

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos  
Del 18 al 21 de marzo de 2014  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.406/13 rev. 4  
21 marzo 2014  
Original: español

REPÚBLICA DE NICARAGUA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2014)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República de Nicaragua del artículo III, párrafo 9º, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionado por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Nicaragua en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la *Convención*, el *Documento de Buenos Aires*, el *Reglamento* del Comité, y la *Metodología* adoptada por el mismo para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la información suministrada por el Estado en su respuesta al cuestionario, la cual, entre otros aspectos, no pudo ser precisada, aclarada o complementada por el Comité en razón de que la República de Nicaragua no otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* en los términos previstos en la Metodología para su realización. Asimismo, el Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia” y la recabada por la Secretaría Técnica del Comité.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado e igualmente la información recibida se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior nicaragüenses analizados en este informe son: el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Nacional (PN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del Poder Judicial.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua, para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto al MP, establecer criterios objetivos que definan y determinen las razones especiales que ameriten que un asunto requiera el nombramiento de un fiscal especial para su atención; fortalecer a la Unidad Especializada Anticorrupción y su dotación de personal; establecer programas permanentes de capacitación periódica dirigidos principalmente a los fiscales auxiliares y asistentes fiscales en aspectos sustantivos; establecer mecanismos adicionales que permitan al Fiscal General rendir de manera pública el informe anual de labores del MP; efectuar análisis de las causas que podrían estar incidiendo en la disminución del número de acusaciones interpuestas por el MP ante los tribunales judiciales relacionadas con delitos cometidos contra Administración Pública, además de fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través de su sitio *Web* institucional, de la información estadística del MP sobre el cumplimiento de sus funciones, entre otras.

En relación con la PGR, continuar impulsando la efectiva implementación del Plan Estratégico 2011-2014 de la PGR; establecer mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; así como elaborar información estadística relativa a las investigaciones que adelanta en relación con la generalidad de los delitos que afecten los intereses y/o el patrimonio del Estado.

En lo atinente a la PN, adoptar las medidas pertinentes que complementen las previsiones de la Ley de la Policía Nacional y su Reglamento en materia de recursos humanos; continuar fortaleciendo las capacidades de los servidores de la PN sobre técnicas de investigación de los actos de corrupción; así como elaborar información estadística relativa a las investigaciones que adelanta en relación con la generalidad de las prácticas corruptas, entre otras recomendaciones.

En lo concerniente a la CGR, complementar sus programas de capacitación que a nivel interno desarrolla con cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia; continuar impulsando la implementación de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2015; fortalecer la plataforma tecnológica; posibilitar la formulación en línea de denuncias ciudadanas por prácticas corruptas; complementar sus mecanismos de rendición cuentas con procedimientos que permitan el escrutinio público; elaborar información estadística en relación con las funciones de detección de las prácticas corruptas, entre otras recomendaciones.

Con respecto a la CSJ y el Poder Judicial, garantizar el principio del debido proceso en el procedimiento y causales de separación o destitución de los magistrados de la CSJ; culminar el proceso de actualización de las descripciones de puestos de la Carrera Judicial; adoptar mecanismos adicionales de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones sustantivas que desempeña el Poder Judicial; elaborar información estadística relativa a los procesos judiciales adelantados en relación con la generalidad de las prácticas corruptas, así como aquellos procesos en el ámbito de la Corte Plena y su Sala Penal, entre otras recomendaciones.

Las buenas prácticas sobre las que la República Nicaragua suministró información se refieren, sintéticamente, a las “Jornadas de Trabajo Anticorrupción”, el monitoreo de casos por delitos contra la Administración Pública y el “Sistema Anticorrupción Interinstitucional” que se vienen desarrollando en el MP; la colaboración internacional en materia de asistencia legal mutua a partir de la creación de las unidades especializadas, tanto en asuntos penales internacionales, como en la lucha contra la corrupción por parte de la PGR; los procesos permanentes de coordinación entre la PN y la cooperación internacional en el marco de las denominadas “Instancias de Diálogo”; el “Modelo de Gestión de Despacho Judiciales” que adelanta la CSJ para brindar a los usuarios del sistema de justicia un servicio eficaz y eficiente; la estrategia de promoción, capacitación e implementación del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo por parte de la Oficina de Ética Gubernamental; la promoción del Portal de Compras, la utilización de las herramientas de capacitación en compras públicas del portal electrónico de la OEA, el establecimiento de las “mesas de ayuda” y el desarrollo de pasantías para funcionarios de otros Estados por parte de la Dirección General de Contrataciones del Estado; así como la implementación del “Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección de Función Pública” desarrollado por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la *Metodología* de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Nicaragua en su respuesta al cuestionario, se definieron cuales de

dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuales requerían atención adicional; cuales se replanteaban; y cuales ya no tenían vigencia, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como un anexo del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan, las acciones que de conformidad con el artículo 4º de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos viene desempeñando la CGR, la relativa reciente adopción de la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Público; la aprobación y publicación del “Manual de Procedimientos Administrativos e Indicadores de Gestión de la Dirección General Jurídica” por parte de la CGR; la constitución del grupo de trabajo en el ámbito de la PN con la responsabilidad de ejecutar, monitorear y evaluar las recomendaciones anticorrupción; la suscripción del Acuerdo de Coordinación entre el MP, la PN y la PGR en la investigación, persecución y recuperación de activos provenientes de actos corrupción y delitos conexos; la Estrategia de Seguridad Regional de la PN; así como la puesta en marcha del SIGRUN, la propuesta de actualización del Plan de Acción sobre la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua por el Comité de Expertos del MESICIC, así como la adopción del Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública y la creación de su Comisión Nacional.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua en la Primera Ronda que quedan vigentes apuntan a propósitos, tales como fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses que permitan la aplicación práctica y efectiva del sistema de ética pública, fortalecer los mecanismos para exigir a los funcionarios públicos denunciar los actos de corrupción de los que tengan conocimiento; mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones patrimoniales; así como continuar implementando mecanismos que alienten la participación en la gestión pública de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, entre otras recomendaciones

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN**

**INFORME PRELIMINAR RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DE  
NICARAGUA DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER  
ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS  
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA<sup>1/</sup>**

**INTRODUCCIÓN**

**1. Contenido del Informe**

[1] En el presente informe se hará referencia, en primer lugar, a la implementación, en la República de Nicaragua, de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante “la Convención”) seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda. La disposición seleccionada es la prevista en el párrafo 9º del artículo III de la Convención, relativa a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado deseó voluntariamente dar a conocer en relación con los órganos de control superior objeto de análisis del presente informe y otros.

[3] En tercer lugar, conforme a lo acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, inciso a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, este informe versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua por el Comité en el Informe de la Primera Ronda y que hayan sido consideradas como objeto de atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/nic.htm>

**2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Nicaragua ratificó la Convención el 17 de marzo de 1999 y depositó el respectivo instrumento de ratificación el 6 de mayo de ese mismo año.

[5] Asimismo, la República de Nicaragua suscribió la Declaración sobre el MESICIC el 4 de junio de 2001.

**I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA**

**1. Respuesta de la República de Nicaragua**

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por la República de Nicaragua en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General de la República, la cual se hizo

---

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 21 de marzo de 2014, en el marco de su Vigésima Tercera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 21 de marzo de 2014.

evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que mostró para aclarar o completar el contenido de la misma. Dicha respuesta puede consultarse en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que la República de Nicaragua no otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* en los términos previstos en la disposición 5 de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ<sup>2/</sup>.

[8] Al respecto, el Comité subraya la importancia de la realización de las visitas *in situ* como una etapa y parte integral del proceso de análisis que realiza, lo cual le permite, en el marco de las mismas y de acuerdo con las disposiciones 3, 26 y 27 de la citada Metodología:

[9] – Precisar, aclarar o complementar la información que suministran los Estados en sus respuestas al cuestionario en relación con la implementación de las disposiciones seleccionadas de la Convención para ser analizadas en la respectiva Ronda y de las recomendaciones que les ha formulado en Rondas anteriores.

[10] – Contar con información objetiva y completa, adicional a la suministrada por los Estados en sus respuestas al cuestionario, para la consideración y adopción de sus respectivos informes.

[11] – Conocer eventuales dificultades para la implementación de la disposición de la Convención bajo su análisis y de las recomendaciones que ha formulado en Rondas anteriores.

[12] – Obtener información adicional a la suministrada por los Estados en sus respuestas al cuestionario relacionada con buenas prácticas en las materias bajo su análisis, cuyo conocimiento es de utilidad para los otros Estados Parte.

[13] – Brindar a los Estados la oportunidad de beneficiarse o solicitar asistencia técnica, de acuerdo a sus requerimientos, de parte de la OEA o de otros organismos internacionales.

[14] – Sostener reuniones con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, investigadores y/o académicos para abordar temas relacionados con la implementación de la disposición de la Convención bajo su análisis y de las recomendaciones que les ha formulado en Rondas anteriores.

[15] El Comité, teniendo en cuenta lo anterior y las bondades comprobadas que ofrece la realización de las visitas *in situ* como una etapa y parte integral de los procesos de análisis que realiza, continuará invitando a todos los Estados Parte a que consideren la posibilidad de otorgar o continuar otorgando, según corresponda, su anuencia para que se les realice una visita *in situ* en el marco de una Ronda.

[16] Con base en lo anterior, el Comité tuvo únicamente en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Nicaragua en su respuesta al cuestionario del día 20 de junio de 2013 y la que fue recabada por la Secretaría Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento y la Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda disponibles en: [www.oas.org/juridico/spanish/mesicic\\_docs\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_docs_sp.htm).

---

2. Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

## **2. Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil**

[17] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un documento de la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, que le fue remitido por vía electrónica por dicha organización de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.<sup>3/</sup>

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA**

### **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[18] La República de Nicaragua cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que se destacan: el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Oficina de Ética Pública y las Direcciones Generales de Contrataciones del Estado y de Función Pública, ambas adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

[19] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por la República de Nicaragua que serán analizados en el presente informe.

[20]– El Ministerio Público (en adelante “MP”). Es la entidad pública independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. Asimismo, es el órgano encargado de promover de oficio o a instancia de parte la investigación y persecución de los delitos de acción pública.

[21]– La Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”). Es el órgano adscrito al Poder Ejecutivo con independencia funcional que tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, la representación legal del Estado en cualquier asunto, trámite o proceso ante los órganos administrativos y jurisdiccionales nacionales e internacionales, velar por los intereses de la Hacienda Pública y supervisar que las actuaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones estén apegadas a derecho.

[22]– La Policía Nacional (en adelante “PN”): Es el cuerpo policial único del Estado, de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, no deliberante que cumple, entre otras funciones, las de prevención, detección e investigación de los delitos, la preservación del orden público y social interno, velar por el respeto y protección de los bienes que son propiedad del Estado y de los particulares, así como brindar el auxilio necesario al Poder Judicial y a otras autoridades que por mandato de ley así lo requieran.

[23]– La Contraloría General de la República (en adelante “CGR”). Es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado,

---

3. Este documento se recibió por correo electrónico el 20 de junio de 2013, y se encuentra disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_nic\\_sc.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_nic_sc.pdf)

encargado de establecer el Sistema de Control que de forma preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales, ejercer un control sucesivo del Presupuesto General de la República y evaluar la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.

[24] – La Corte Suprema de Justicia (en adelante “CSJ”). Es el órgano superior del Poder Judicial del Estado y de los Tribunales de Justicia que en su conjunto lo conforman.

## **1. MINISTERIO PÚBLICO**

### **1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[25] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[26] De conformidad con lo dispuesto en el capítulo I de la Ley Orgánica del Ministerio Público<sup>4/</sup> (Ley No. 346, en adelante “LOMP”), el MP es una institución independiente, única para toda la República e indivisible, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que tiene como función esencial ejercer la acción penal en los delitos de acción pública conforme lo establecen los artículos 10 de la LOMP; 3º del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público<sup>5/</sup> (Decreto N° 133-2000, en adelante “RLOMP”); y 51, 88, 89, 248, 252 y demás relativos del Código Procesal Penal<sup>6/</sup> (Ley N° 406, en adelante “CPP”).

[27] En cuanto al ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, los capítulos VI de la LOMP y VII del RLOMP, regulan las relaciones entre el MP y la PN, disponiendo que ésta última realizará la investigación de delitos de acción pública por conocimiento propio, flagrante delito, denuncia y obligatoriamente por orden del MP, debiendo la PN informar, en todo caso, a los fiscales del MP sobre los resultados de sus investigaciones. Los fiscales, por su parte, podrán participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y en el aseguramiento de la prueba, lo cual no implica que deban realizar actos que por su naturaleza correspondan a la PN. El artículo 33 de la LOMP dispone la coordinación directa y permanente entre los fiscales y la PN que debe mantenerse en relación con la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal, señalando que para tal fin se deben desarrollar mecanismos modernos de comunicación permanente y diseñar métodos operativos dinámicos; y señala, además, que las relaciones entre los fiscales y los oficiales de la PN deben regirse por el respeto mutuo y la constante disposición de eficaz cumplimiento del servicio público que les ha sido encomendado.

[28] Respecto al ámbito de sus funciones, de conformidad con el artículo 4º de la LOMP, el MP es único para toda la República y sus representantes ejercerán las atribuciones que la Ley les confiere conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica en la materia y en el territorio para el que han sido asignados, salvo lo que disponga en casos y situaciones especiales el órgano superior jerárquico<sup>7/</sup> mediante resolución fundamentada. Asimismo, de acuerdo con los

---

4. Disponible en: <http://goo.gl/69dJt>

5. Disponible en: <http://goo.gl/d6BX5S>

6. Disponible en: <http://goo.gl/D5Dmqr>

7. Esta jerarquía se refiere a la dependencia jerárquica en la materia y en el territorio. A nivel territorial existen fiscales auxiliares y fiscales departamentales, siendo éstos últimos los superiores jerárquicos de los fiscales auxiliares (véase artículo 18 LOMP). En razón de la materia, existen unidades especializadas que tienen competencia a nivel nacional y por razón de la materia se convierten en superiores jerárquicos de los Fiscales departamentales y de sus auxiliares (véase artículo 4º del RLOMP).



artículos 5° y 6° del mismo cuerpo normativo, el MP actuará apegado a la Constitución y las leyes, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni a autoridad alguna.

[29] En relación con su estructura, el artículo 2° de la LOMP dispone que el MP se organiza a través de unidades especializadas para el ejercicio de su función acusadora. En este sentido, el MP estableció en 2007 la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado (en adelante “UEACCO”) que surge con la fusión de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, creada por Acuerdo No. 430, de 13 de agosto de 2004, y la Unidad Especializada Anticorrupción, creada por Acuerdo No. 712 de 22 de mayo de 2006. La UEACCO depende directamente del Fiscal General y su competencia se extiende a todo el territorio nacional. Su objetivo primordial es realizar una persecución penal con mayor eficiencia y eficacia de las causas graves y de forma específica de los delitos con características de crimen organizado, así como los delitos de corrupción de mayor relevancia (véase párrafo 60). Asimismo, la UEACCO asesora, monitorea, capacita y orienta a sus unidades de enlace en las sedes fiscales de los departamentos y regiones del país.

[30] Para el cumplimiento de sus atribuciones sustantivas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la LOMP y 15 del RLOMP, el MP está integrado por los Despachos del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, la Inspectoría General, las Fiscalías Departamentales y de Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las Fiscalías Auxiliares, las Fiscalías Especiales, así como la Asistencia y Secretaría Ejecutivas. Asimismo, en cuanto a su ámbito administrativo, el MP cuenta con la Unidades Administrativa y Financiera y de Capacitación y Planificación, además del área de Auditoría Interna.

[31] Con relación a la toma de decisiones en el ámbito sustantivo, de la respuesta<sup>8/</sup> del Estado analizado al cuestionario, así como de las disposiciones del capítulo I del título III del CPP se desprende que el MP adopta tales decisiones a través de la acusación o la querrela, debiendo guardar el más absoluto respeto al régimen constitucional y legal de la República. Al respecto, cabe señalar que el artículo 14, párrafo 4°, de la LOMP faculta al Fiscal General a impartir instrucciones de carácter general o particular respecto del servicio y ejercicio de las funciones del MP a los funcionarios y servidores a su cargo, las que serán de ineludible e inmediato cumplimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, párrafo 4°, del RLOMP.

[32] En cuanto a los recursos de revisión que proceden en contra de las decisiones adoptadas por el MP en su ámbito sustantivo, el artículo 225 del CPP prevé la facultad de la víctima o el denunciante de impugnar la resolución que declara la desestimación de la denuncia o la falta de mérito para ejercer la acción penal dictada por un fiscal, ante el superior jerárquico inmediato de aquél, quien deberá resolver en instancia administrativa definitiva.

[33] El MP, es una institución jerárquica, cuya máxima autoridad es el Fiscal General, en quien reside la representación legal de la institución, así como su administración. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, y ejercerá la acción penal y las atribuciones que la ley le otorga, por sí mismo o por medio de los órganos de la institución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la LOMP. Por su parte, el Fiscal General Adjunto, se encuentra bajo la subordinación directa del Fiscal General, a quien sustituirá en sus ausencias, impedimentos temporales o definitivos mientras se produzca el nombramiento del Fiscal General, así como en los casos de excusa y recusación a que se refiere el artículo 15 de LOMP.

---

8. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 26 y 27, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4\\_nic\\_resp.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_nic_resp.pdf)

[34] Los artículos 161 constitucional y 23 de la LOMP<sup>9/</sup> establecen las calidades que se requieren para ser Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Ambos cargos son electos por la Asamblea Nacional de ternas separadas propuestas por el Presidente de la República y por Diputados de la misma Asamblea, por un período de cinco años contados desde la toma de posesión. De acuerdo con los artículos 138, numeral 9º, constitucional y 24 de la LOMP, su elección requiere al menos el voto favorable del sesenta por ciento del total de los Diputados. El artículo 26 de la LOMP, por su parte, establece las causales por las cuales podrán ser destituidos de sus cargos, entre ellas, el tráfico de influencias y la comisión de cualquier acto de corrupción, mismas que, de conformidad con el artículo 37 del RLOMP, deberán ser debatidas y comprobadas en justo y debido proceso. La Asamblea Nacional, con base en las causales que se invoquen y de acuerdo con el artículo 27 de la LOMP, decidirá con el voto del sesenta por ciento del total de los Diputados que la integran si cabe o no la destitución.

[35] El artículo 68 de la Ley de Carrera del Ministerio Público<sup>10/</sup> (Ley N° 586, en adelante “LCMP”), dispone el procedimiento para el juzgamiento del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, el cual consiste en que una vez privados de su inmunidad por la Asamblea Nacional, será competente para conocer de la causa en primera instancia la Sala Penal de la CSJ y, contra la sentencia emitida por ésta, cabrá el recurso de apelación ante la Corte Plena del Poder Judicial.

[36] Cabe señalar que el artículo 28 de la LOMP establece, además, como causales de suspensión para el ejercicio de las funciones de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, la imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por el voto favorable del sesenta por ciento del total de los Diputados que la integran, haberse dictado en su contra auto de apertura a juicio por delito doloso, así como la licencia concedida por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

[37] Respecto a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del MP, el artículo 12 de la LCMP señala que el ingreso al MP en el área sustantiva se realizará mediante concurso de oposición regulado por los artículos 15 a 24 de dicho ordenamiento, y en el área administrativa a través de la revisión del currículum de los candidatos. La decisión definitiva sobre el nombramiento en las áreas sustantiva y administrativa corresponde al Fiscal General y en ambos casos los candidatos deberán reunir los requisitos señalados en la LOMP, el RLOMP y en la LCMP, así como en el manual de puestos, funciones y requisitos, así como en la normativa que al efecto hubiere emitido el Fiscal General para el cargo que corresponda.

[38] Para efectos de la selección e ingreso de personal al MP, la LCMP dispone en sus artículos 8º al 11, como órganos rectores del Sistema de Carrera del MP, al Fiscal General como máxima autoridad de dirección, administración, ejecución y decisión del Sistema, y la constitución del Comité de Carrera, como órgano ejecutor de los programas para el ingreso, selección, ascenso y desarrollo de la misma, que por acuerdo, resolución o a través de directrices, apruebe el Fiscal General.

---

9. El artículo 23 de la LOMP dispone que para ser Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto se requiere: 1.- Ser nacional de Nicaragua, los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de la elección; 2.- Ser Abogado de moralidad notoria, haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años o haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años. 3.-Estar en pleno goce de sus derechos políticos o civiles. 4.-Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años el día de su elección. 5.-No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme. 6.- No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección. 7.- Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliera misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.

10. Disponible en: <http://goo.gl/d4zOuh>

[39] Asimismo, el artículo 13 de la LCMP establece los requisitos exigibles que los interesados deben cumplir para optar a cualquier categoría en las áreas sustantiva y administrativa del MP, mientras que los artículos 14 y 34 del mismo cuerpo legal establecen, respectivamente, el régimen de impedimentos para acceder a la carrera, así como el de prohibiciones para todos los servidores de la institución, para lo cual, en este último caso, el Fiscal General emitirá las normativas internas necesarias para operativizar este régimen. Por su parte, los artículos 70 y 71 de la LCMP prevén las causales correspondientes al retiro y destitución de la Carrera.

[40] Con relación al régimen de responsabilidades por sus actuaciones, los servidores del MP están sujetos, entre otras disposiciones, a las contenidas en los capítulos I y II del título V de la LCMP. En este sentido, de acuerdo con el artículo 42 de esta Ley, el régimen disciplinario del MP comprenderá el conjunto de normas que regulen las conductas y omisiones de los fiscales y servidores, tendientes a procurar la eficiencia, eficacia y una conducta ética en el ejercicio de sus funciones, para lo cual el Fiscal General dictará la normativa pertinente.

[41] En cuanto al Sistema de Carrera del MP, cabe señalar que el artículo 77 de la LCMP establece que esta Ley no requerirá ser reglamentada mediante Decreto Ejecutivo, sin perjuicio de que el Fiscal General, en el ámbito de su competencia, dicte las normativas pertinentes y las regulaciones administrativas necesarias garantizando los fines establecidos en la misma.

[42] Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con los artículos 12, numerales 3º y 4º, de la LOMP y 20 de su Reglamento, el MP cuenta en su ámbito administrativo con la Unidad de Capacitación y Planificación, la cual se integra por las secciones de planificación y estadísticas, selección e ingreso y capacitación. Dicha Unidad es responsable, en otros aspectos, de desarrollar programas de formación, actualización y especialización para todo el personal del MP, así como de elaborar y actualizar el manual de puestos, funciones y requisitos, además de organigramas y/o gráficas de cualquier índole que ilustren sobre el que hacer general de la institución.

[43] En este sentido, del Informe Anual del MP 2012<sup>11/</sup> presentado ante la Asamblea Nacional se desprende un resumen de las actividades desarrolladas durante ese año por la Dirección de Capacitación, las cuales estuvieron dirigidas en su mayoría a la coordinación interinstitucional para lograr que los funcionarios asistieran a las diversas capacitaciones que fueron impulsadas por las distintas instituciones y organismos que colaboran con el MP. Asimismo, el MP implementó un programa especializado para la capacitación de los fiscales de la UEACCO en 2012<sup>12/</sup>.

[44] Sobre las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas en el MP, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>13/</sup> que en noviembre de 2012, mediante Acuerdo N° 271 se actualizó y validó el “Protocolo de Actuaciones en Delitos Contra la Administración Pública”. Además, en concordancia con la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública que el Gobierno aprobó en 2012, el MP creó y actualizó su “Estrategia Interna de Fortalecimiento de la Probidad, Transparencia e Institucionalidad”.

[45] De igual manera, el MP viene desarrollando y ejecutando una serie de proyectos de cooperación externa vinculados directamente al fortalecimiento de sus capacidades, desarrollo y modernización institucional a nivel nacional, entre los que se destacan el “Proyecto para el

---

11. Véase Informe Anual del MP 2012, pp. 95 a 98, disponible en: <http://goo.gl/8e3Vq9>

12. Véase Informe de Avance de la República de Nicaragua en el marco de la Vigésima Primera Reunión del Comité (artículo 31 del Reglamento), p. 50, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/XXI\\_nic.doc](http://www.oas.org/juridico/PDFs/XXI_nic.doc)

13. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 50, *supra* nota 8.

Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública”<sup>14/</sup> en el marco de la Fase III del Programa Fondo Anticorrupción (FAC) para el fortalecimiento de la UEACCO, así como el “Proyecto de Fortalecimiento del MP”<sup>15/</sup> suscrito con el BID por un período de ejecución de dos años (2011 y 2012) fundamentalmente destinado a apoyar la áreas más sensibles y urgentes de la institución (racionalización de la acción fiscal en los procesos penales, fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal fiscal y mejora de la eficiencia y gestión de los recursos institucionales).

[46] En cuanto a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, en el Informe Anual del MP 2012<sup>16/</sup> se puede observar, por ejemplo, la creación y ejecución del Sistema Anticorrupción Interinstitucional (SAI), consistente en una base de datos interinstitucional que refleja las causas ingresadas de casos de corrupción entre la PN, el MP y la PGR, visualiza el manejo y estado actual de cada caso y permite obtener información uniforme, veraz y precisa y la adquisición de un *software* especializado para la digitalización de expedientes fiscales con el objetivo de visualizar la transparencia en el manejo de los mismos y agilizar el proceso de trámite de archivo. Asimismo, con base en la información puesta de presente en la respuesta<sup>17/</sup> del Estado analizado, el MP adquirió nuevos equipos de cómputo para facilitar las labores de prevención, investigación y sanción de los delitos contra la Administración Pública.

[47] Asimismo, el MP cuenta con el sitio *Web* institucional [www.ministeriopublico.gob.ni](http://www.ministeriopublico.gob.ni) de acceso público y con información relativa a sus objetivos, funciones y marco jurídico. Se destacan en el mismo los enlaces electrónicos a los servicios *en línea* que posibilitan formular de manera virtual quejas sobre los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, solicitudes de información pública, así como la presentación de denuncias sobre la comisión de un delito.

[48] Sobre este último aspecto, el Estado analizado pone de presente en su respuesta<sup>18/</sup> que el MP cuenta desde 2011 con una Oficina de Recepción de Denuncias, la cual, en 2012, amplió su red de cobertura para delitos cometidos contra la Administración Pública en las 18 sedes departamentales del MP, logrando con ello una cobertura nacional. Asimismo, con el ánimo de fortalecer la denuncia ciudadana, en marzo de 2012, se firmó el “Convenio de Colaboración Interinstitucional de Oficinas de Denuncia o Atención Ciudadana” con la CGR, la PGR y el MP, para crear mecanismos de intercambio de información y colaboración para defender los intereses del Estado.

[49] Con relación a los mecanismos de control, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 8º de la LOMP dispone que los funcionarios del MP serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones.

[50] Ahora bien, tratándose específicamente de los mecanismos de control interno tanto la LOMP como su Reglamento establecen un conjunto de disposiciones que rigen la conducta ética de los fiscales, incluyendo al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto, así como a los empleados administrativos. Para ejercer estos controles y realizar las investigaciones, si hubiere mérito para ello, el MP cuenta con las oficinas de la Inspectoría General.

[51] En este sentido, de conformidad con el artículo 43 de la LCMP, la Inspectoría General es el órgano encargado de recibir, tramitar y resolver las quejas o denuncias de orden disciplinario

---

14. Véase Informe Anual del MP 2012, pp. 100 a 103, *supra* nota 11.

15. *Ibíd.*, pp. 116 y 117.

16. *Ibíd.*, pp. 95 a 98.

17. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 50, *supra* nota 8.

18. *Ibíd.* p. 62.

promovidas por particulares y/o autoridades sobre las actuaciones de los miembros del MP en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el procedimiento establecido el capítulo II del título V de dicha Ley. Los artículos 45, 46 y 47 de este ordenamiento, por su parte, establecen, respectivamente, las faltas disciplinarias leves, graves y muy graves, mientras que el artículo 48 dispone el régimen sancionatorio por incurrir en tales faltas. Asimismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 42 de la LCMP, que dispone que Fiscal General dictará la normativa pertinente sobre régimen y procedimiento disciplinario, en 2002 se emitió el Reglamento Disciplinario del MP<sup>19/</sup> de aplicación y observancia obligatoria para todos su funcionarios y empleados.

[52] Respecto a la responsabilidad penal de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, el artículo 69 de la LCMP dispone que será la Sala Penal de los Tribunales de Apelaciones la que conocerá en primera instancia de los procesos que tengan lugar contra fiscales y funcionarios que posean atribuciones de fiscales, cuyas resoluciones podrán apelarse ante la Sala Penal de la CSJ. En estos casos, se designará un fiscal especial para que ejerza la acción penal.

[53] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestales, el artículo 34 de la LOMP establece que el anteproyecto del presupuesto del MP se elaborará por la misma institución, y se enviará oficialmente en la fecha que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La ejecución del presupuesto estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes de la Administración Pública conforme lo que establezca la ley de la materia.

[54] Con relación a lo anterior, el Estado analizado pone de presente en su respuesta<sup>20/</sup> que “*dada la escasa [sic] asignación presupuestaria, el Fiscal General de la República, mantiene como principal estrategia para complementar el presupuesto del Ministerio Público otorgado por la Asamblea Nacional mediante el Presupuesto General de la República; la Gestión de Proyectos de Cooperación Externa vinculados directamente al fortalecimiento de las capacidades, desarrollo y modernización institucional a nivel.*” Para ello, la LOMP de acuerdo con su artículo 35, numeral 9º, faculta al despacho de la Secretaría Ejecutiva la función de “*coordinar la cooperación nacional e internacional y velar porque la misma sea aplicada a los diversos proyectos de la institución*”.

[55] En relación con los mecanismos de coordinación con otros órganos de control y Poderes Públicos del Estado, así como para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el artículo 7º de la LOMP dispone que, para el cumplimiento de sus funciones, el MP podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos estatales y de sus entidades desconcentradas, descentralizadas y autónomas, estando éstas obligadas a prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos. Sumado a lo anterior, como se desprende de la respuesta<sup>21/</sup> del Estado analizado, el MP también ha suscrito una serie de convenios o acuerdos de colaboración y cooperación con otras entidades públicas, entre los que destacan el “Acuerdo de Coordinación entre el MP, PN y PGR en la Investigación, Persecución y Recuperación de Activos Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos Conexos” suscrito por los titulares de dichas entidades en marzo de 2009, así como el “Convenio de Colaboración Interinstitucional de Oficinas de Denuncias o Atención Ciudadana entre la CGR, el MP y la PGR”<sup>22/</sup> suscrito en marzo de 2012. Sumado a lo anterior, del Informe Anual del MP 2012<sup>23/</sup> se desprenden las

---

19. Disponible en: <http://goo.gl/aEQr7w>

20. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 76, *supra* nota 8.

21. *Ibíd.*, p. 81.

22 Véase: <http://goo.gl/ISrf8n>

23. Véase Informe Anual del MP 2012, pp. 64 a 68, *supra* nota 11.

coordinaciones nacionales específicas con las instituciones del Estado realizadas por el MP en ese año.

[56] Finalmente, en relación con los mecanismos de rendición de cuentas, el artículo 14, numeral 9º, de la LOMP dispone que el Fiscal General deberá presentar por escrito a la Asamblea Nacional, un informe anual sobre el trabajo realizado por la institución. Si la Asamblea Nacional lo requiere deberá comparecer para explicar el informe presentado.

## **1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[57] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[58] En primer lugar, como quedó señalado en la sección anterior, en su ámbito sustantivo, el MP está integrado por los órganos descritos en los artículos 11 de la LOMP y 15 de su Reglamento, entre los cuales se ubican los “fiscales especiales”, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la LOMP, serán nombrados por el Fiscal General para la atención de asuntos que por razones especiales lo ameriten y tendrán únicamente las facultades que el Fiscal General señale para cada caso específico. A su vez, el artículo 33 del RLOMP dispone que previo al ejercicio del cargo, el fiscal especial nombrado suscribirá un “contrato de servicios especiales” en cuyas cláusulas se establecerá fundamentalmente, el alcance del servicio, limitación de lo que le fuere cometido, condiciones en que se prestará el mismo y las facultades específicas asignadas por el Fiscal General, estableciéndose en el mismo artículo, como requisitos del profesional contratado, ser un experto en la materia del caso y contar con reconocida idoneidad personal y profesional.

[59] Con base en lo anterior y dada la importancia de garantizar la objetividad y calidad en la investigación de hechos punibles y un efectivo y correcto ejercicio de la acción penal, sobre todo en los procesos por delitos propios de funcionarios públicos que tengan lugar contra fiscales y funcionarios que posean atribuciones de fiscales que, de acuerdo con el artículo 69 de la LCMP, se designará un fiscal especial para que la ejerza, el Comité considera conveniente que el Estado analizado establezca, a través de los medios que estime más apropiados, criterios objetivos que definan y determinen claramente las “razones especiales” que ameriten que un asunto requiera el nombramiento de un fiscal especial para su atención, así como la “experticia” e “idoneidad personal y profesional” que la persona que se desee contratar como fiscal especial debe poseer y acreditar. Lo anterior, considera el Comité, permitiría tanto el ejercicio adecuado de la acción penal, como de la facultad que el artículo 19 de la LOMP concede al Fiscal General, evitando con ello una posible aplicación discrecional de la misma. (Véase recomendación 1.4.1. del capítulo II de este informe).

[60] En segundo lugar, el Comité reconoce la existencia de la UEACCO como una de las Unidades Especializadas del MP para el ejercicio de su función acusadora que, tratándose de delitos de corrupción, conocerá sólo aquellos de “mayor relevancia” cuando el sujeto activo sea funcionario de las instituciones públicas y entes autónomos, descentralizados y desconcentrados o de cualquier otra institución pública; sea dirigente de partidos políticos a nivel nacional o local; diplomático o directivo de agencia de cooperación internacional u organizaciones no gubernamentales nacionales; personaje connotado de la vida pública nacional, tanto del sector privado, social civil, de universidades o de algún medio de comunicación; o bien sea una persona políticamente expuesta.



[61] Al respecto, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, estima conveniente que el Estado analizado considere establecer criterios que, en atención a la cuantía, complejidad en su investigación y/o calidad o investidura de los sujetos involucrados, entre otros parámetros, permitan identificar y definir con objetividad la relevancia, gravedad o importancia de los casos de corrupción que requieran la intervención de la UEACCO para realizar la persecución penal correspondiente. Lo anterior, conllevaría a delimitar su competencia y aprovechar los recursos de esta Unidad para enfrentar efectivamente los casos de corrupción de mayor relevancia y turnar aquellos de menor cuantía, sofisticación, impacto o gravedad a otras instancias del MP para su persecución.<sup>24/</sup> (Véase recomendación 1.4.2. del capítulo II de este informe).

[62] En tercer lugar, el Comité denota la existencia del Sistema de Carrera del MP con base en las disposiciones contenidas en la LCMP descritas en la sección anterior. Al respecto, si bien los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el artículo III, párrafo 5º, de la Convención fueron materia de análisis de la Segunda Ronda, el Comité no formulará recomendaciones sobre el particular, reiterando las observaciones contenidas en el Informe de dicha Ronda<sup>25/</sup>. No obstante, el Comité desea aprovechar la oportunidad para insistir en la necesidad de que el Estado analizado continúe con la tarea de fortalecer, con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención, los sistemas y procesos de selección de servidores públicos en el MP, teniendo en cuenta que, con base en la información que tuvo a su disposición, no pudo precisar, entre otros aspectos, la existencia de la normativa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 18 de LCMP tendiente regular el contenido y plazos de la convocatoria pública cuando las necesidades del servicio en el área sustantiva del MP lo exijan, así como las normativas internas a que se refieren los artículos 14 y 34 de la LCMP para operativizar el régimen de prohibiciones para todos los servidores del MP.<sup>26/</sup>

[63] En cuarto lugar, en materia de capacitación, si bien en el Informe Anual del MP 2012 aludido en la sección anterior se desprende un resumen de las actividades y programas desarrollados durante ese año por su Dirección de Capacitación, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, estima conveniente que el Estado analizado continúe fortaleciendo el trabajo que viene realizando la Dirección de Capacitación del MP para brindar mayor capacitación, por ejemplo a los fiscales auxiliares y asistentes fiscales en el aspecto sustantivo, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Anual citado<sup>27/</sup>, y adoptando las medidas que crea pertinentes para que los programas de

---

24. Al respecto, la República de Nicaragua señala que la UEACCO ha venido aplicando las directrices del Fiscal General en las que delimita su competencia sobre las materias en las que actúa, de manera que la UEACCO tenga el conocimiento de los casos más complejos, de mayor perjuicio al Estado, y en los que los funcionarios de mayor nivel se han visto involucrados, así como aquellos en los que el nivel de complejidad lo requiere, de manera que la estructura y personal que tiene la UEACCO, no se vea atiborrada de casos de no menor importancia pero si de menor relevancia, es por eso que la UEACCO sólo lleva un promedio de cuarenta casos al año, a los cuales les da una atención especializada es decir el mismo fiscal conoce el caso desde el inicio de la investigación en la que participa de manera activa, hasta la ejecución de sentencia. Los casos de menor relevancia quedan al conocimiento de una unidad enlace y un fiscal enlace por cada sede fiscal en los departamentos y regiones del país, a los cuales la UEACCO, asesora, monitorea, capacita y orienta. Los criterios de relevancia orientados para la UEACCO por el Fiscal General están en armonía con los criterios de relevancia que tiene la unidad especializada de la PN que atiende estos casos.

25. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 7, 23 y 24, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic\\_II\\_inf\\_nic.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf)

26. Al respecto, la República de Nicaragua señala que los principios de equidad, publicidad, eficiencia, entre otros, son parte del contenido de la normativa que regula la convocatoria para los concursos por oposición para acceder a la carrera fiscal, adjuntando normativa que reglamenta la LCMP en lo que respecta al sistema de selección (FGR-LCMP-01-2008; FGR-LCMP-02-2008; y FGR-LCMP-03-2008), disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

27. Véase Informe Anual del MP 2012, p. 91, *supra* nota 11.

capacitación que desarrolla dicha Dirección cuenten con las características referidas.<sup>28/</sup> (Véase recomendaciones 1.4.3. y 1.4.4 del capítulo II de este informe).

[64] Igualmente, el Comité formulará una recomendación a la República de Nicaragua sobre la conveniencia de adoptar manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal al servicio del MP, teniendo en cuenta que el mismo Estado analizado señala en su respuesta<sup>29/</sup> que actualmente la institución está elaborando tanto un manual de puestos y funciones, como un reglamento de evaluación al desempeño. (Véase recomendación 1.4.5. del capítulo II de este informe).

[65] En quinto lugar, en cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, de acuerdo con los artículos 14, numeral 4º, de la LOMP y 26, numeral 4º, de su Reglamento, corresponde al Fiscal General impartir por escrito instrucciones de carácter general o particular respecto del servicio y ejercicio de las funciones del MP a los funcionarios y servidores a su cargo, las que serán de ineludible e inmediato cumplimiento. A este respecto, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>30/</sup> que el Fiscal General ha instruido las funciones de los fiscales, a través de un compendio de circulares e instructivos. Asimismo, en el Informe Anual del MP 2012<sup>31/</sup>, se hace mención a los logros alcanzados en las aplicaciones de las resoluciones, directrices y dictámenes emanados por el Fiscal General. En este sentido y teniendo en cuenta que estas normativas internas “*son una herramienta útil de consulta que sirven para la aplicación correcta y adecuada de la ley, permiten establecer la unidad de criterios y de actuación que contribuye indudablemente al fortalecimiento del Estado de Derecho permitiéndole a los ciudadanos tener certeza jurídica sobre las actuaciones de los servidores públicos*”<sup>32/</sup>, el Comité formulará una recomendación sobre la conveniencia de que toda esta normativa se accesible a la ciudadanía a través del sitio *Web* institucional del MP. (Véase recomendación 1.4.6. del capítulo II de este informe).

[66] En este mismo orden de ideas, el Comité estima igualmente conveniente que el Estado analizado considere incluir en el sitio *Web* institucional del MP información que permita dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante el MP. (Véase recomendación 1.4.7. del capítulo II de este informe).

[67] En sexto lugar, el Comité observa que en el Informe Anual del MP 2012<sup>33/</sup> se establece, en relación con la gestión administrativa y ejecución presupuestaria, que el presupuesto aprobado del MP para 2012 ascendió a la suma de C\$179.5 millones de córdobas<sup>34/</sup>, ejecutándose en un 100%, desglosados en 86% servicios personales, 10% servicios no personales, 3 % materiales y suministros y el 1% para bienes de uso. No obstante, el Comité formulará una recomendación en el sentido de dotar al MP con los recursos humanos y financieros suficientes para su adecuado funcionamiento,

---

28. Al respecto, la República de Nicaragua presenta información relacionada con las acciones de coordinación y capacitación que viene desarrollando la Dirección de Capacitación del MP sobre capacitaciones interinstitucionales en distintos temas que incluyen la materia de ética, probidad y transparencia, incluso cursos relacionados al tema de delitos contra la administración pública a nivel de postgrado, entre otros aspectos, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

29. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 45, *supra* nota 8.

30. *Ibidem*.

31. Véase Informe Anual del MP 2012, p. 82, *supra* nota 11.

32. *Ibidem*.

33. *Ibid.*, p. 119.

34. Aproximadamente US\$1 (un dólar estadounidense) = C\$24.4800 córdobas (tipo de cambio a noviembre de 2013).



toda vez que el mismo informe establece que “*es importante destacar que por el insuficiente presupuesto asignado solamente tenemos instaladas sedes municipales en el 40% del país, también la necesidad imperante de contratar Fiscales Auxiliares, Asistentes Fiscales, Notificadores, igualmente el reemplazo de la mayoría de flota vehicular que tiene 10 años de vida útil y mejora de instalaciones que están significativamente deterioradas a nivel nacional*”<sup>35/</sup>. (Véase recomendación 1.4.8. del capítulo II de este informe).

[68] En séptimo lugar, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones que desempeña el MP, el Comité toma nota de lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9º, de la LOMP descrito en la sección anterior.

[69] Al respecto, el Comité observa que el citado numeral 9º del artículo 14 de la LOMP dispone que sólo si la Asamblea Nacional lo requiere, el Fiscal General deberá comparecer para explicar el informe presentado. Sin embargo, en aras de brindar mayor transparencia y promover la participación ciudadana en la gestión que desempeña el MP, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere la posibilidad de establecer, sin perjuicio de la posible comparencia del Fiscal General a la Asamblea Nacional, mecanismos adicionales de rendición de cuentas con procedimientos que posibiliten el escrutinio público. (Véase recomendación 1.4.9. del capítulo II de este informe).

[70] Por último, el Comité no logró identificar la forma ni los medios en los que el MP hace público y accesible a los ciudadanos el informe anual que presenta el Fiscal General sobre el trabajo realizado por la institución, por que formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 1.4.10. del capítulo II de este informe).

### 1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[71] Con respecto a los resultados en el cumplimiento de sus funciones, el Estado analizado suministró en su respuesta<sup>36/</sup> la siguiente información con respecto a las acusaciones interpuestas por el MP por delitos contra la Administración Pública en el periodo 2008-2012, a saber:

Delitos	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Peculado	62	00	00	00	00	62
Malversación de caudales públicos	05	00	02	04	00	11
Fraude	03	04	03	04	01	15
Cohecho	00	01	00	03	01	05
Tráfico de influencias	00	00	01	01	00	02
Enriquecimiento ilícito	00	01	00	00	00	01
Abuso de autoridad o funciones	00	00	01	00	01	02
Usurpación de funciones	00	00	01	01	01	03
Exacciones	00	00	01	00	00	01
Total	70	06	09	13	04	102

[72] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité denota que el MP ha interpuesto acusaciones por delitos contra la Administración Pública. Sin embargo, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones:

35. Véase Informe Anual del MP 2012, p. 119, *supra* nota 11.

36. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 92, *supra* nota 8.

[73] En primer lugar, como se puede observar, en los últimos 5 años el MP interpuso 102 causas relacionadas con tales delitos. Estas cifras llaman la atención del Comité por cuanto, según se desprende del Informe Anual del MP 2012<sup>37/</sup>, en ese mismo año (2012) ingresaron al MP un total de 48,661 causas, de las cuales 19,097 (39.2%) cumplieron con los requisitos de ley para el ejercicio de la acción penal y sólo 4 causas, es decir el 0.02%, se refieren a delitos contra la Administración Pública. Al respecto, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que considere efectuar un análisis de las posibles causas de ello, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes. (Véase recomendación 1.4.11. del capítulo II de este informe).

[74] En segundo lugar y no obstante la información suministrada por el Estado analizado sobre las acusaciones interpuestas por el MP por delitos sólo contra la Administración Pública en los años citados, el Comité no identifica el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de esos años por la totalidad de los delitos de corrupción tipificados en el régimen penal nicaragüense, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, por lo que formulará una recomendación en este sentido. (Véase recomendación 1.4.12. del capítulo II de este informe).

[75] En tercer lugar, el Comité observa que el sitio *Web* institucional del MP contiene enlaces que se entiende remiten a estadísticas nacionales, departamentales y de las unidades especializadas. Sin embargo, no se identifica información publicada en los mismos. En este sentido, el Comité formulará una recomendación tendiente fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad de la información estadística del MP referida al ejercicio de sus atribuciones. (Véase recomendación 1.4.13. del capítulo II de este informe).

[76] Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos por el MP en relación con su gestión disciplinaria, el Informe Anual del MP 2012<sup>38/</sup> señala que 2012 la Inspectoría General dio trámite a 187 quejas de usuarios del MP a nivel nacional, de las cuales 75 (40%) fueron resueltas y las 112 (60%) restantes se encuentran en proceso de tramitación dentro de los términos legalmente establecidos del procedimiento. Las formas de resolución, cita el Informe, fueron 15 no ha lugar, 17 no admitidas, 3 remitidas a competencia del Fiscal Departamental, 8 declaradas improcedentes, 16 rechazadas por no constituir faltas, 10 se archivaron las diligencias, a 1 se impuso sanciones y 5 se resolvieron por otro tipo de gestión. Al respecto, con base en la información que tuvo a su disposición, llama la atención del Comité que sólo 1 (1.3%) de las 75 causas disciplinarias haya concluido en sanción. Al respecto, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que considere efectuar un análisis de las posibles causas de ello, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes. (Véase recomendación 1.4.14. del capítulo II de este informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[77] Con base en el análisis integral realizado con respecto al MP en los acápitales anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

---

37. Véase Informe Anual del MP 2012, pp. 12 y 13, *supra* nota 11.

38. *Ibíd.* p. 90.

[78] **La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al MP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[79] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Establecer, a través de los medios que se estimen pertinentes, criterios objetivos que definan y determinen las “razones especiales” que ameriten que un asunto requiera el nombramiento de un fiscal especial para su atención, así como la “experticia” e “idoneidad personal y profesional” que la persona que se desee contratar como fiscal especial debe poseer y acreditar, de acuerdo con los artículos 19 de la LOMP y 33 del RLOMP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Establecer criterios que, en atención a la cuantía, complejidad en su investigación y/o calidad o investidura de los sujetos involucrados, entre otros parámetros, permitan identificar y definir con objetividad la relevancia, gravedad o importancia de los casos de corrupción que requieran la intervención de la UEACCO para realizar la persecución penal correspondiente. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Continuar desarrollando los programas de capacitación periódica dirigidos principalmente a los fiscales auxiliares y asistentes fiscales en los aspectos sustantivos de las funciones que desempeñan. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Continuar adoptando las medidas pertinentes que complementen las acciones de capacitación que desarrolla la Dirección de Capacitación del MP, de tal manera que éstas cuenten con cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia, que brinden, entre otros aspectos, capacitación sobre el conocimiento y debido cumplimiento de las normas de conducta que rigen al MP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Adoptar y publicar los manuales u otros documentos que se describan las funciones del personal al servicio del MP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y conocer, a través del sitio *Web* institucional del MP, las circulares, resoluciones, directrices y/o dictámenes emanados por el Fiscal General respecto del ejercicio de las funciones de que desempeñan los servidores del MP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía conocer, a través del sitio *Web* institucional del MP, los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante el MP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Dotar al MP con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con el ejercicio de

la acción penal en los delitos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).

- 1.4.9. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco del MP, mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten el escrutinio público. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.10. Publicar, a través del sitio *Web* institucional del MP, el informe anual que debe presentar el Fiscal General a la Asamblea Nacional sobre el trabajo realizado por la institución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9º, de la LOMP. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.11. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en la disminución del número de acusaciones interpuestas por el MP ante los Tribunales Judiciales relacionadas con delitos cometidos contra Administración Pública, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.12. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por el MP en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.13. Fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio *Web* institucional, de la información estadística del MP sobre el cumplimiento de sus funciones. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.14. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en que el número de quejas recibidas y tramitadas ante la Inspectoría General del MP relativos a procedimientos disciplinarios contra servidores del MP en el desempeño de sus funciones terminen, en su mayoría, por otras formas de resolución distintas a una sanción, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).

## **2. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[80] La PGR cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[81] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República<sup>39/</sup> (Ley No. 411, en adelante “LOPGR”), la PGR es la institución adscrita al Poder Ejecutivo con independencia funcional, que tiene a su cargo la representación legal del Estado en lo que concierne a los intereses y a las materias que la LOPGR determine, con funciones específicas de asesoría y consulta de los órganos y entidades dentro del Poder Ejecutivo. En el ámbito de la investigación y persecución de hechos delictivos, la PGR, conforme lo dispuesto en el artículo 109.3 del CPP, es considerada como la parte víctima u ofendida en representación del Estado o sus instituciones.

[82] En este sentido, atendiendo la capacidad de legitimación que se otorga a la PGR para ser parte en el proceso penal, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la LOPGR, dentro del ejercicio de sus funciones se destacan: la representación legal del Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se ventilen o deban ventilarse en los Tribunales de Justicia; representar al Estado como persona privada en las causas penales, civiles y otras, ya sea como demandante o demandado; velar por los intereses de la Hacienda Pública; supervisar que las actuaciones de los funcionarios y empleados del Estado en el desempeño de sus funciones estén ajustadas a derecho; pedir informes a las oficinas públicas sobre datos ilustrativos que requiera la PGR para el fiel cumplimiento de sus atribuciones; y ser parte en las diligencias en que los tribunales deban oír al MP en las leyes de la materia.

[83] Asimismo y atendiendo a la naturaleza de los asuntos que requieren su actuación en defensa de los intereses del Estado y sus instituciones, la PGR está integrada, entre otras dependencias, por la Procuraduría Nacional Penal (en adelante “PNP”) que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República<sup>40/</sup> (Decreto No. 19-2009, en adelante “RLOPGR”) es la entidad que representa “...*al Estado, la Administración Pública, sus instituciones, órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos, empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas u organismos dependencias de alguna de ellas, en cualquier actuación, asunto, trámite o proceso penal en que se considere víctima, ofendido o tenga interés.*”

[84] En este orden de ideas, el artículo 27 del RLOMP establece, entre otras funciones de la PNP, la realización de la averiguación previa de hechos revestidos de carácter penal y, cuando proceda, denunciar, requerir y participar como víctima u ofendido ante los órganos de investigación penal por los hechos delictivos que sean de su competencia, así como representar al Estado en las formas previstas por las leyes, cuando éste figure como víctima u ofendido en procesos penales. Para el cumplimiento de éstas y las demás atribuciones que la ley le confiere, la PNP se compone de cuatro Unidades Especializadas, a saber: la Unidad Anticorrupción (en adelante “UAC”), la Unidad contra Delitos Económicos, la Unidad contra el Crimen Organizado y la Unidad de Asuntos Internacionales Penales, Derechos Humanos y Humanitarios. Por lo que hace al contenido, alcance y funciones que desarrollan las primeras tres, éste se encuentra reglamentado en el Acuerdo PGR-No. 05-2008<sup>41/</sup>.

[85] En cuanto al ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>42/</sup> que la PGR “*en su condición de parte víctima cuando el Estado como un todo, o en algunas de sus instituciones se ve afectado por la comisión de un hecho delictivo... puede – en su calidad de persona privada sin perder su naturaleza pública- perseguir y consecuentemente, ejercer la acción penal pública a la par del Ministerio*

---

39. Disponible en: <http://goo.gl/vhJ6Am>

40. Disponible en: <http://goo.gl/1W4VNF>

41. Disponible en: <http://goo.gl/H2i1wh>

42. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 13 y 14, *supra* nota 8.

*Público sea adhiriéndose a su acusación, o formulando su propia acusación, al igual que cualquier otra víctima<sup>43/</sup>. En este punto es preciso aclarar que conforme lo dispuesto en el art. 564 del Código Penal vigente<sup>44/</sup>, en los delitos menos graves<sup>45/</sup> la víctima del delito... podrá ejercer directamente la acción penal ante el juzgado competente, sin necesidad de agotar la vía administrativa ante el Ministerio Público; mientras que los delitos con penas graves, el derecho de la acción penal por parte de la víctima del delito, deberá estarse al pronunciamiento que en los plazos fijados por los arts. 225 y 226 CPP realice el Ministerio Público... (órgano acusatorio por antonomasia), y con ello poder determinar si tendrá que actuar personalmente como acusador particular directo ante la declinación del Ministerio Público por las razones dispuestas en el art. 224 y 225 CPP.” Asimismo, en cuanto a las investigaciones en donde la CGR por medio de auditoría determina la presunción de responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo en contra de la Administración Pública, por disposición legal la CGR remite indistintamente al conocimiento de la PGR y/o el MP los resultados, evidencias y conclusiones de su auditoría, con la finalidad de que estos órganos acusatorios establezcan las acciones legales pertinentes de conformidad con el régimen penal vigente.*

[86] Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado analizado precisa en su respuesta<sup>46/</sup> que *“el Sistema de Justicia Penal Nicaragüense....se integra por una fase de investigación previa... Dicha investigación, se convierte en el primer paso para que los órganos acusatorios públicos (Ministerio Público y Procuraduría General de la República) tomen las decisiones pertinentes sobre el ejercicio de la acción penal. Al respecto, ha de tenerse presente que conforme las previsiones legales contenidas en los arts. 227 y 228 CPP, la investigación preliminar recae en las Autoridades de la Policía Nacional quienes dirigen sus actos acorde a los criterios de legalidad, cientificidad y lógica para el descubrimiento y comprobación de los hechos presuntamente delictivos....”*

[87] En este sentido, además de las funciones y atribuciones que el Sistema Procesal Penal otorga a los operadores del Sistema de Justicia Penal en la prevención, investigación, persecución y sanción de cualquier hecho delictivo, el Estado analizado señala en su respuesta que *“a la luz de las directrices delineadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en el “Plan Nacional de Desarrollo Humano”, certeramente se potencializa [sic] como una línea estrategia del combate a la corrupción el fortalecimiento del proceso de armonización y complementariedad entre los diversos órganos estatales encargados de erradicar las diversas manifestaciones delictivas”, y agrega “dentro de estos parámetros de la Política Criminal del Estado de Nicaragua, la Procuraduría General de la República, en conjunto con las Autoridades Superiores de la Policía Nacional, Ministerio Público y Contraloría General de la República, han venido instituyendo la suscripción de Acuerdos Interinstitucionales que precisan a través de una mejor coordinación líneas de acción que faciliten un abordaje más eficiente y eficaz en la lucha contra la corrupción pública, haciendo énfasis en la cooperación interinstitucional para la prevención, investigación y persecución de los Delitos contra la Administración Pública.”<sup>47/</sup>*

[88] Respecto a la manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales, la PGR es un organismo con independencia funcional, su máxima autoridad la conforma la Dirección Superior, compuesta por el Procurador General y el Subprocurador General de conformidad con el artículo 4º de la LOPGR. Dicha Dirección Superior está asistida por tres órganos consultivos de apoyo para el

---

43. Véase artículo 78 del CPP.

44. Disponible en: <http://goo.gl/uekQUI>

45. Véase artículo 24 del Código Penal.

46. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 13 y 14, *supra* nota 8.

47. *Ibíd.* p.15.

buen desempeño y funcionamiento de la institución, los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del RLOPGR, son el Consejo Superior, el Consejo Nacional y la Asamblea Nacional de la PGR.

[89] El Consejo Superior es el órgano principal de consulta en todos aquellos temas que la PGR considere pertinente para su mejor desarrollo y desenvolvimiento. Dicho órgano se encuentra integrado por los Procuradores Nacionales y sus funciones y atribuciones están conferidas en lo dispuesto por el artículo 68 RLOPGR. Por su parte, de acuerdo con el artículo 69 del mismo Reglamento, el Consejo Nacional es el órgano consultivo y asesor de la PGR, integrado por la Dirección Superior quien lo presidirá, los Procuradores Nacionales, Directores de Órganos de Apoyo, Procuradores Departamentales y de las Regiones Autónomas, Procuradores Itinerantes Nacionales y Procuradores Municipales.

[90] En cuanto a los recursos que proceden en contra las decisiones adoptadas por la PGR, teniendo en cuenta que ésta se encuentre bajo la “rectoría sectorial” de la Presidencia de la República, en atención a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo<sup>48/</sup> (Ley No. 290, en adelante “LOCPPE”), proceden los recursos administrativos de revisión y apelación descritos en sus artículos 48 al 54, con la salvedad de que lo no previsto en dicha Ley sobre el procedimiento administrativo, tendrá aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Regulación de la Jurisdicción de los Contencioso-Administrativo<sup>49/</sup> (Ley No. 350).

[91] Sobre la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, de acuerdo con el artículo 4º de la LOPGR, el Procurador General y Subprocurador General conforman la Dirección Superior de la PGR, máximo órgano de dirección de la institución. El Procurador General es el funcionario ejecutivo superior de la PGR, con rango de Ministro de Estado y tiene a su cargo, además de las funciones descritas en el artículo 12 de la LOPGR, las de representación legal, judicial y extrajudicial, así como la administración del órgano. Por su parte, el Subprocurador General desempeña las funciones que le delegue directamente el Procurador General y lo sustituirá en caso de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento, así como en los casos de ausencia definitiva hasta que se nombre a un nuevo Procurador General. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la LOPGR ambos cargos requieren las mismas calidades que el artículo 161 constitucional establece para los magistrados de los Tribunales de Justicia y serán por nombramiento del Presidente de la República conforme al artículo 150, numeral 6º, constitucional, el cual deberá ser ratificado con el voto favorable del sesenta por ciento del total de Diputados de la Asamblea Nacional de conformidad con el numeral 30 del artículo 138 constitucional.

[92] Los cargos de Procurador General y Subprocurador General pueden cesar por remoción del Presidente de la República conforme el artículo 150, numeral 6º, constitucional, o por destitución de la Asamblea Nacional de conformidad con los artículos 138, numeral 4º, de la misma Constitución y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional (Ley No. 606).

[93] Con relación a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, la PGR se rige por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa<sup>50/</sup> (Ley No. 476, en adelante “LSCCA”), la cual *“en sus artículos 28, 78, 79 y 80 garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad y equidad para el ingreso en la Carrera Administrativa, asegurando la participación de funcionarios y empleados*

---

48. Disponible en: <http://goo.gl/F9GyJQ>

49. Disponible en: <http://goo.gl/B5xpwg>

50. Disponible en: <http://goo.gl/RGT4MY>

*internos y candidatos externos en la provisión de puestos en un solo proceso; en sus artículos 81, 82 y 83 establece, respectivamente, los requisitos generales de ingreso a la Carrera Administrativa, la publicidad de la convocatoria, así como el contenido de la misma; en sus artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, instituye los órganos rectores del Servicio Civil y define sus respectivas atribuciones; y en su artículo 90 dispone sobre los recursos de los resultados del proceso de selección.”<sup>51/</sup>*

[94] Por su parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa<sup>52/</sup> (Decreto Ejecutivo No. 87-2004, en adelante “RLSCCA”) establece igualmente en sus artículos 52, 80, 81 y 84 los principios de mérito, igualdad, capacidad y equidad para los procesos de provisión de puestos, y *“en sus artículos 4, 87, 88 y 89 dispone, respectivamente, sobre los requisitos de idoneidad para la incorporación al Servicio Civil y para participar en el proceso de provisión, regulando asimismo la publicidad y el contenido de la convocatoria para dichos procesos; en sus artículos 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38 y 85 regula la integración de los órganos rectores del Servicio Civil, su estructura u organización y funciones específicas de algunos de sus miembros; y en sus artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 96 reglamenta los distintos tipos de recursos disponibles y sus respectivos trámites.”<sup>53/</sup>*

[95] Sin perjuicio de lo anterior, el RLOPGR establece en su artículo 70 las calidades para ser Procurador Nacional, Municipal, Itinerante, Auxiliar, Departamental y de las Regiones Autónomas. Por su parte, los artículos 71 y 72 del mismo ordenamiento disponen, respectivamente, el proceso de selección y nombramiento de los mismos. Sumado a todo lo anterior, el artículo 74 establece las causales de destitución para todos los servidores de la PGR, cuyo procedimiento estará regido por lo establecido en la LSCCA y su Reglamento.

[96] Respecto a la existencia de documentos en los que se describan las funciones del personal al servicio de la PGR, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>54/</sup> que la institución cuenta con manuales de puestos en donde se describen las actividades y responsabilidades de cada servidor público.

[97] En materia de capacitación, la misma respuesta señala que *“la PGR ha implementado el primer “Diplomado en Técnicas Jurídicas del Estado”<sup>55/</sup>, además de que “existen programaciones semanales*

---

51. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, p. 3, *supra* nota 25.

52. Disponible en: <http://goo.gl/KqghdE>

53. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, p. 3, *supra* nota 25.

54. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

55. Al respecto, la República de Nicaragua señala que en el periodo 2012-2013, la PGR desarrolló el I Postgrado en Derecho Procesal y Técnicas Jurídicas para la Defensa del Estado del cual se graduaron 34 procuradores auxiliares y 3 miembros del Ejército de Nicaragua. En el marco del plan de profesionalización actualmente para el periodo 2013-2014 se desarrolla el II Postgrado en Derecho Procesal y Técnicas Jurídicas para la Defensa del Estado y la Buena Gestión Pública, en el que se encuentra cursando 67 Procuradores Auxiliares. Tanto el Primer Postgrado como el II en su Plan de Estudios contienen un módulo denominado Derecho Penal, Procesal Penal y colaboración internacional. En su parte penal el contenido del mismo esta determinado por el estudio de 2 grandes capítulos; delitos contra la Administración Pública (en estos se incluyen los tipos penales establecidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción) y delitos de crimen organizado en los que se incluye delitos de narcoactividad y lavado de dinero. En el tema procesal penal se incluyen las herramientas procesales y técnicas de investigación para estos tipos de delitos. En materia de colaboración internación se incluye el estudio de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.



*o quincenales para la realización de capacitaciones dirigidas al personal en las diferentes áreas de la PGR, en donde se incluye la participación en determinados módulos de interés a los servidores públicos que por razón de su cargo y funciones de una u otra manera guardan vinculación con el tema a tratar...*”, citando, además, los cursos y tópicos de capacitación impartidos al personal de la PGR en el período que va de diciembre 2010 a marzo de 2013.<sup>56/</sup>

[98] Por su parte, la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, señala en su informe que *“en la Web de la institución encontramos datos del 2011 Capacitaciones en el año se proyectó realizar 4 capacitaciones; de las cuales se efectuaron 9 capacitaciones laborales dirigidas a los Procuradores Auxiliares Laborales y Sociales y Procuradores Departamentales, de las cuales 4 fueron realizadas en el Primer Semestre y 5 en el Segundo Semestre. En año 2011 se realizaron 3 capacitaciones más que en el 2010”*<sup>57/</sup>.

[99] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, de la respuesta del Estado analizado se desprende que la PGR, a través de la PNP, ha venido desarrollando, vía circulares aprobadas por el Procurador General, *“un sinnúmero de directrices y orientaciones jurídicas que faciliten a los Procuradores Penales que asumen la representación legal del Estado, un mejor desarrollo y fortalecimiento en sus actuaciones frente a situaciones que pudieren presentárseles en el curso de las investigaciones y procesos jurisdiccionales”*<sup>58/</sup>, citando, por ejemplo, el Acuerdo No. 70-2008 que aprueba las políticas de persecución penal de la PGR, así como el Acuerdo No. 05-2008 sobre la creación de las Unidades Especializadas Contra el Crimen Organizado, Delitos Económicos y Anticorrupción.

[100] Sobre la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el Estado analizado pone de presente en su respuesta, entre otros desarrollos, el Sistema Informático de Seguimiento de Casos Penales (SISCAP), el cual consiste en el manejo, control y seguimiento automatizado de los casos penales llevados por las Unidades de la PNP, el cual se está implementando en las diversas sedes departamentales de la PGR.<sup>59/</sup>

[101] Con relación a las acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de calidad implementadas, la PGR adoptó un Plan Estratégico 2011-2014<sup>60/</sup> que contiene, entre otros aspectos, los principales retos que representa la interrelación de la PGR con los demás actores involucrados en el Sistema Judicial y la Administración Pública y para cumplir su rol dentro de dicho Sistema, así como un conjunto de lineamientos estratégicos tendientes a enfrentar los mismos.

[102] Respecto a la manera en la que la PGR suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones y les da a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones, la institución cuenta con una Oficina de Atención Ciudadana<sup>61/</sup> en sus diversas sedes que, de acuerdo con la respuesta del Estado analizado, *“brinda a los ciudadanos información y/o orientación que requieren sobre sus solicitudes independientemente de la materia que verse el tema por tratar”*<sup>62/</sup>.

---

56. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, 93 y 94, *supra* nota 8.

57. Véase el informe presentado por la organización “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, p. 16, *supra* nota 3.

58. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 49, *supra* nota 8.

59. *Ibíd.* p. 50.

60. Disponible en: <http://goo.gl/1hf6ts>

61. Véase: <http://www.pgr.gob.ni/index.php/areas-de-la-pgr/oficina-de-atencion-ciudadana>

62. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 60, *supra* nota 8.

[103] Asimismo, la PGR cuenta con el sitio *Web* institucional [www.pgr.gob.ni](http://www.pgr.gob.ni), el cual, además de contener información relacionada con el marco jurídico que rige a la institución, su estructura, puntos de contacto, etc., destacan, entre otros, sus enlaces sobre “percepción de la corrupción”<sup>63/</sup>, que contienen información acerca de los ciclos de medición que se realiza a través del monitoreo de las prácticas de corrupción en los servicios públicos desde las experiencias directas y cotidianas de la ciudadanía, así como de información sobre el “Programa de Fortalecimiento para la Buena Gestión Pública” y su Estrategia<sup>64/</sup>, tendiente a generar capacidades específicas y fortalecer las alianzas estratégicas para la prevención, detección, investigación y acusación de los actos de corrupción. Este sitio *Web* cuenta, además, con un enlace para la presentación virtual de “*pre-denuncias*” por parte de la ciudadanía, con la salvedad de que tal denuncia deberá posteriormente ser ratificada de manera presencial por el denunciante ante la PN o el MP.

[104] Cabe mencionar que la PGR cuenta también con una cuenta en la red social *Facebook* y, a partir de 2012, transmite un programa radial interactivo “La PGR Al Día” que semanalmente, además de dar a conocer las funciones, objetivos, misión y visión de la institución, sus autoridades y jefes de las diversas áreas acuden para responder quejas, reclamos o inquietudes que la ciudadanía plantea a través de dicho programa.

[105] Con relación a los mecanismos de control interno, como se mencionó anteriormente, el régimen disciplinario imperante para los servidores de la PGR está dispuesto en los artículos 4º y 14 de la LOCPPE, así como en los artículos 47 al 66 de la LSCCA y 14 al 22 de su Reglamento, sumado a las previsiones legales dispuestas tanto en el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo<sup>65/</sup> (Decreto Ejecutivo No. 35-2009), así como en el Código de Conducta de los Servidores Públicos de la PGR. Asimismo, la PGR cuenta con una Unidad de Auditoría Interna<sup>66/</sup>, la cual está encargada, entre otras responsabilidades, de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas de Auditoría Gubernamental para la adecuada administración y ejecución de los recursos financieros de la institución.

[106] Sobre el particular, el Estado analizado señala en su respuesta que “*dentro de los mecanismos de control interno aprobado por el Procurador General de la República, mediante la Disposición N° 13 y 14 referente al “Sistema de Información” y “Mecanismos de Dirección y Control de la PGR”, se están desarrollando procesos y actividades concretas en la cual se hace énfasis en el cumplimiento a las normas de conducta y valores del funcionario público que labora en la institución.*”<sup>67/</sup>

[107] Sobre los mecanismos de atención de reclamos o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, el Estado analizado pone de presente en su respuesta, que la PGR dispone de buzones de quejas y sugerencias en las diversas sedes del país, “*las cuales luego son retomadas y atendidas directamente por el Procurador General de la República, quien según la naturaleza del asunto dispone las medidas pertinentes para solventar el señalamiento ciudadano en el buzón de quejas y sugerencias.*”<sup>68/</sup> Igualmente, la PGR cuenta con una

---

63. Véase: <http://www.pgr.gob.ni/index.php/institucional/48-informe-integro-de-ciet>

64. Véase: <http://www.pgr.gob.ni/index.php/pbgp>

65. Disponible en: <http://goo.gl/ZETfZs>

66. Véase: <http://www.pgr.gob.ni/index.php/areas-de-la-pgr/auditoria>

67. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 85, *supra* nota 8.

68. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 65, *supra* nota 8.

herramienta<sup>69/</sup> en su sitio Web institucional que permite a la ciudadanía formular *en línea* quejas o sugerencias en relación con los servicios que presta la PGR.

[108] En cuanto a la manera en que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 5° de la LOPGR dispone, como una de las responsabilidades del Procurador General, la de elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto de la institución y presentarlo al Presidente de la República, para su inclusión en el proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario<sup>70/</sup> (Ley No. 550, en adelante “LAFRP”). Al respecto, de conformidad con la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta, el presupuesto de la PGR se viene incrementando desde 2008 *“como un reflejo de la importancia que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) le ha dado a la misión y aportes que la PGR ha venido gestando desde las diversas materias que atiende a favor de la población”*, lo cual *“ha permitido maximizar la cobertura institucional y como corolario la atención ciudadana a nivel Nacional, logrando con ello un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad y accesibilidad de los servicios a la población nicaragüense”*<sup>71/</sup>.

[109] Además, la PGR, como órgano encargado de liderar el “Fondo Anticorrupción”, actualmente denominado “Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública”, ha contado también con importantes aportes de económicos tendientes a fortalecer sus capacidades institucionales en la lucha contra la corrupción.<sup>72/</sup>

[110] Con relación a los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos, la PGR ha suscrito convenidos de colaboración y coordinación interinstitucional para potencializar y fortalecer las capacidades interinstitucionales de los operadores del Sistema de Justicia Penal, tales como, el acuerdo de coordinación con el MP y la PN en la investigación, persecución y recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción y delitos conexos, así como el convenio de colaboración interinstitucional de Oficinas de Denuncias o Atención Ciudadana entre la CGR, el MP y la PGR.

[111] Asimismo, el Estado analizado pone de presente en su respuesta<sup>73/</sup> que, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación que la PGR ha venido desarrollando, se destaca que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 415, 416 y 417 del CPP, se creó la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República<sup>74/</sup>, integrada por la PGR, el MP, la CSJ, la PN, la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública, entre otras instituciones, con el objeto de fomentar la interacción institucional y el concurso coherente y coordinado de todos los operadores del Sistema de Justicia Penal, así como para coordinar y facilitar la implementación del proceso de reforma procesal penal, la efectiva capacitación de los operadores del Sistema, y la implementación efectiva y eficaz de las políticas criminales del Estado. Otro aspecto de coordinación interinstitucional que destaca el Estado analizado en su respuesta<sup>75/</sup> tiene que ver la oficialización de la Política Nacional de Lucha contra Corrupción, a través de la “Estrategia Nacional para el

---

69. Véase: <http://www.pgr.gob.ni/index.php/quejas-o-sugerencias>

70. Disponible en: <http://goo.gl/LzuNKi>

71. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 72 y 73, *supra* nota 8.

72. *Ibíd.*, pp. 74 a 76.

73. *Ibíd.*, pp. 79 y 80.

74. Véase: <http://www.poderjudicial.gob.ni/comipe2013/default.asp>

75. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 79 y 80, *supra* nota 8.

Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”<sup>76/</sup>, cuya implementación aglutina a diversos sectores de la Administración Pública y de la sociedad civil en una Comisión Nacional, entre ellos, la PGR.

[112] Finalmente, en lo que respecta a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>77/</sup> que la Oficina de Prensa de la PGR recaba información de cada área sobre resultados de casos, juicios, sentencias, recursos de amparo, deudores del Estado, demandas judiciales, entre otros, para su posterior publicación en la sitio *Web* institucional. El Área de Planificación y Seguimiento de la PGR realiza, por su parte, un trabajo de consolidación de la información que mensualmente recopila de las áreas sustantivas, especialidades, delegaciones departamentales y órganos de apoyo de la PGR, para la consideración del Procurador General e insumo y conocimiento del desempeño y cumplimiento de metas fijadas en el Plan Operativo Anual (POA) por los funcionarios de la PGR. Este informe mensual consolidado también es enviado a la Presidencia de la República para su incorporación en el “Sistema de Información del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional” (en adelante “SIGRUN”), a fin de poder medir a nivel nacional el cumplimiento de las metas e indicadores de las instituciones del Estado, entre ellas la PGR.

## **2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[113] La PGR cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[114] En primer lugar, si bien la PGR ha venido liderando acciones y mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucionales tendientes al efectivo funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Nicaragüense, como quedó descrito en la sección anterior, el Comité estima conveniente que el Estado analizado continúe promoviendo, desarrollando y fortaleciendo, según corresponda, los vínculos de colaboración y sinergias de la PGR con los demás órganos y actores involucrados en dicho Sistema en la investigación y persecución en los asuntos penales en que el Estado sea víctima u ofendido. (Véase recomendación 2.4.1. del capítulo II de este informe).

[115] En segundo lugar y con relación al régimen descrito en la sección anterior sobre la manera en que se determinan los recursos humanos y en que son provistos los mismos, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y la suministrada por el Estado analizado en su respuesta, no formulará recomendaciones al respecto, sino que reitera aquellas contenidas en el Informe de la Segunda Ronda<sup>78/</sup>, teniendo en cuenta que sobre estos aspectos la PGR está sujeta al régimen previsto en la LSCCA y su Reglamento el cual fue detalladamente analizado por el Comité el marco de dicha Ronda.

[116] En tercer lugar, con respecto a la existencia de documentos en los que se describan las funciones del personal al servicio de la PGR, el Comité toma nota de lo expresado por el Estado analizado en su respuesta<sup>79/</sup> en cuanto a que esta institución cuenta con manuales de puestos en donde

---

76. Disponible en: <http://goo.gl/t1rLmQ>

77. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 85, *supra* nota 8.

78. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 5 a 7 y 22 a 24, *supra* nota 25.

79. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

se describen las actividades y responsabilidades de cada servidor público. Sin embargo, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas apropiadas para que los mismos sean accesibles para su consulta y conocimiento público, pudiéndose, por ejemplo, incluir un enlace electrónico en el sitio *Web* institucional para estos efectos. (Véase recomendación 2.4.2. del capítulo II de este informe).

[117] En cuarto lugar, en materia de capacitación, el Comité toma nota de la información suministrada tanto por el Estado analizado como por la organización de la sociedad civil “*Grupo Cívico Ética y Transparencia*” que sobre el particular se describió en la sección anterior. Sin embargo, con base en esta información, el Comité estima conveniente que el plan que viene desarrollando la PGR prevea acciones de capacitación, sensibilización y divulgación con respecto a las normas de conducta y valores éticos que rigen a los funcionarios que laboran en la institución. (Véase recomendación 2.4.3. del capítulo II de este informe).

[118] En quinto lugar, el Comité reconoce la labor que viene desempeñando la Oficina de Atención Ciudadana de la PGR. Sin embargo, cree también conveniente que el Estado analizado considere incluir en el sitio *Web* institucional información que permita dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la PGR.<sup>80/</sup> (Véase recomendación 2.4.4. del capítulo II de este informe).

[119] En sexto lugar, el Comité reconoce el conjunto de acciones desarrolladas por la PGR para cumplir con los objetivos propuestos en relación con su Plan Estratégico para el cuatrienio 2011-2014<sup>81/</sup>, principalmente aquellas que tienen que ver con el combate contra la corrupción llevadas a cabo por la PNP. A este respecto y teniendo en cuenta el alcance de las directrices estratégicas que se propone la PGR en dicho documento, muchas de cuales refieren a su ámbito de competencia y especialización en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, el Comité formulará una recomendación para que se adopten las medidas necesarias para continuar impulsando la efectiva implementación de este Plan Estratégico. (Véase recomendación 2.4.5. del capítulo II de este informe).

[120] Sumado a lo anterior, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta, el Comité reconoce la existencia del Sistema Informático de Seguimiento de Casos Penales (SISCAP) como una de herramienta tecnológica para facilitar el desarrollo de las labores que desarrolla la PGR, así como el proyecto que actualmente adelanta la institución para la implementación de tecnología moderna de interconexión con sus sedes departamentales en una misma red extendida. En este sentido, el Comité releva la importancia de que la PGR continúe desarrollando y promoviendo proyectos informáticos que complementen a los existentes, teniendo en cuenta la utilidad que reviste la tecnología para facilitar, entre otros aspectos, las labores de coordinación y cooperación interinstitucionales, así como de prevención y detección de prácticas corruptas. El Comité hará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 2.4.6 del capítulo II de este informe).

[121] En séptimo lugar, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, se toma nota de la información que sobre el particular suministró el Estado analizado en su respuesta. Sin embargo, con base en la misma, el Comité denota que la información que recopiló el Área de Planificación y Seguimiento de las diferentes áreas de la PGR y

---

80. Al respecto, la República de Nicaragua señala que al navegar en el sitio *Web* institucional de la PGR se puede encontrar enlaces que informan a los usuarios los procedimientos y requisitos para ciertos trámites o gestiones que se realizan en la PGR.

81. Véase Plan Estratégico 2011-2014 de la PGR, pp. 4 a 8, *supra* nota 60.

que posteriormente se incorpora al SIGRUN, es de acceso restringido. En este sentido, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las disposiciones que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PGR, mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten la participación ciudadana. (Véase recomendación 2.4.7 del capítulo II de este informe).

### 2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[122] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario, se recabó información relativa a la PGR, entre la que se destaca la siguiente:

[123] En primer lugar, en la respuesta<sup>82/</sup> del Estado analizado al cuestionario, se ponen de presente las acciones que ha venido desarrollando la PGR para prevenir prácticas corruptas, tales como los cursos de capacitación, seminarios, talleres y conferencias en materia de prevención y juzgamiento de los ilícitos de corrupción durante el período de diciembre de 2010 a marzo de 2013, incluyendo la campaña “*Con participación Ciudadana, Cero Corrupción*” que se llevó a cabo en 2007 y el “*Diplomado de Técnicas Jurídicas para la Defensa del Estado*” que actualmente viene desarrollando para los procuradores que ejercen la representación del Estado.

[124] El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que la PGR ha desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción en cumplimiento de las funciones que le competen en esta materia. Sin embargo, con base en la atribución que le confiere la LOPGR relativa a supervisar que las actuaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones estén apegadas a derecho, el Comité, en aras de coadyuvar con esta atribución de la PGR, cree conveniente que se continúen actualizando e implementando nuevas políticas y/o campañas que permitan, no sólo a los servidores públicos, sino a la población en general, formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar los actos de corrupción. (Véase recomendación 2.4.8 del capítulo II de este informe).

[125] En segundo lugar, en cuanto a las labores que desempeña la PGR, a través de la PNP, en materia de persecución represiva de aquellas conductas delictivas cometidas por funcionarios o ex funcionarios públicos, así como los casos en los que se declaró la prescripción del ejercicio de la acción penal, el Estado analizado suministra en su respuesta<sup>83/</sup> los siguientes datos:

Tipo Penal	DENUNCIAS Interpuestas						ACUSACIONES Interpuestas					
	Año					Total	Año					Total
	08	09	10	11	12		08	09	10	11	12	
Peculado	1	9	7	3	4	24	1	12	7	14	9	43
Malversación de caudales públicos	2	3	2	1	2	10	1	3	-	1	-	5
Infidelidad en custodia de documento	-	1	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-
Fraude	3	3	10	2	7	28	-	2	2	2	-	6
Cohecho por funcionario	-	-	2	2	-	4	-	1	1	2	2	6

82. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 92 y 93, *supra* nota 8.

83. *Ibid.*, pp. 98, 99 y 102.

público												
Cohecho por particular	-	-	1	4	1	6	-	1	2	3	-	6
Usurpación de funciones públicas	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Abuso de autoridad	-	2	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>66</b>

Tipo Penal	PRESCRIPCIÓN De la Acción Penal <sup>84/</sup>				
	Año				Total
	09	10	11	12	
Peculado	-	1	-	-	1
Malversación de caudales públicos	2	-	-	1	3
Fraude	-	1	3	-	4
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

[126] Con base en lo anterior, el Comité denota que la PGR ha dado trámite e interpuesto acusaciones por los delitos que se indican. Sin embargo, considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones:

[127] – Teniendo en cuenta que la información suministrada por el Estado analizado ofrece cifras sobre las denuncias y acusaciones tramitadas e interpuestas por la PGR por delitos cometidos sólo por funcionarios o ex funcionarios públicos en los años citados, el Comité no identifica el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de esos años sobre la totalidad de los delitos tipificados en el régimen jurídico penal que afecten los intereses y/o el patrimonio del Estado, que indiquen cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, y el sentido absolutorio o condenatorio de tal decisión, por lo que formulará una recomendación en este sentido. (Véase recomendación 2.4.9. del capítulo II de este informe).

[128] – Se observa, asimismo, que el sitio *Web* institucional de la PGR publica, en su sección “archivo de noticias”, algunas notas informativas dispersas que ofrecen datos relacionados con logros y resultados alcanzados por las distintas áreas de la PGR en cumplimiento de sus funciones. En este sentido, el Comité formulará una recomendación tendiente fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad de la información estadística de la PGR referida al ejercicio de sus atribuciones. (Véase recomendación 2.4.10. del capítulo II de este informe).

[129] En tercer lugar, en la respuesta<sup>85/</sup> del Estado analizado al cuestionario, se ponen de presente las demandas que la PGR ha promovido en razón de las resoluciones emitidas por la CGR, en donde se

84. Al respecto, la República de Nicaragua señala que esta información trata de hechos ocurridos bajo la vigencia del anterior Código Penal, el que establecía que en los delitos de acción pública el ejercicio de la acción penal prescribía a los 5 años. Sin embargo, con el nuevo Código Penal vigente desde enero del 2008 (artículo 131) “la acción penal en los delitos señalados en el arto 16 de este Código no prescribirán en ningún caso.” El arto. 16 del Código Penal establece un listado de delitos para los cuales opera el principio de universalidad y los que conforme el arto. 131 son imprescriptibles, entre ellos el inciso n) que establece “cualquier otro delitos que pueda ser perseguido en Nicaragua , conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país” Conforme dicha disposición todos los tipos penales que se establecen no solo en la Convención Interamericana contra la corrupción, sino también en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional son imprescriptibles.

determina responsabilidad civil en contra de funcionarios o ex funcionarios, en el período comprendido de enero de 2008 al 1º trimestre de 2013, en donde se han interpuesto 102 demandas ejecutivas corrientes con acción de pago.

[130] A continuación, se expone de manera sucinta y descriptiva las demandas que la PGR ha interpuesto por razón de la responsabilidad civil que la CGR ha fijado mediante glosas en contra de funcionarios o ex funcionarios públicos:

Causas judiciales	Año						Total
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Demandas interpuestas pendientes de resolución	3	14	39	0	10	4	70
Con sentencias favorables al Estado declarando con lugar las demandas ejecutivas con acción de pago interpuestas por la PGR.	1	5	12	1	0	0	19
Con sentencias desfavorables al Estado declarando sin lugar las demandas ejecutivas con acción de pago interpuestas por la PGR:	0	1	1	0	0	0	2
Concluidas por suscripción de Acuerdos de Pago de los funcionarios con la PGR.	2	1	4	0	1	1	9
Cerradas por cancelar el pago de glosas antes de la interposición del juicio por la PGR.	0	0	2	0	0	0	2
Total	6	21	58	1	11	5	102

[131] Asimismo, de acuerdo con la información suministrada por el Estado en su respuesta, en el período 2008-2013, la PGR ha obtenido 19 sentencias firmes con acción de pago por las glosas impuestas por la CGR, quedando firme el crédito a favor del Estado por los siguientes montos: C\$3'837,748.95 y US \$15'445,239.72, estos momentos, precisa el mismo en Estado, *“actualmente se encuentran en proceso de ejecución de sentencia para su recaudación e ingreso al erario público de la Nación”*, y añade *“sin perjuicio de lo anterior, en lo que va del año 2008 al 13 de mayo del 2013, producto de las acciones jurisdiccionales y acuerdos de pago de las glosas impuestas por la CGR, la PGR contabiliza como créditos cancelados e ingresados al Tesoro de la Nación las siguientes cantidades”*<sup>86/</sup>, a saber:

Año	Monto	
	Córdobas (C \$)	Dólares (US \$)
2008	144,323.54	392.35
2009	100,902.05	480.93
2010	164,443.90	4,048.41
2011	142,115.32	21,641.29
2012	300,805.92	8,496.01
2013*	74,923.35	3,081.53
Total	927,514.08	38,140.52
* Al 13 de mayo de 2013.		

85. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 96 y 97, *supra* nota 8.

86. *Ibid.*, pp. 105 y 106.



[132] El Comité estima que la anterior información permite demostrar que la PGR ha desarrollado sus atribuciones de sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad patrimonial en cumplimiento de la atribución que específicamente le confiere el artículo 16 del RLOPGR.

[133] Finalmente, el Comité estima también conveniente la elaboración de información estadística sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior de la PGR con sujeción a los disposiciones aplicables de la LSCCA y su Reglamento, entre otras normativas, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. (Véase recomendación 2.4.11. del capítulo II de este informe).

## **2.4. Conclusiones y recomendaciones**

[134] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la PGR en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[135] La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la PGR, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.**

[136] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Continuar promoviendo, desarrollando y fortaleciendo, según corresponda, los vínculos de colaboración y sinergias de la PGR con los demás órganos y actores involucrados en el Sistema de Justicia Penal Nicaragüense. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Adoptar las medidas que se estimen apropiadas para que los documentos que describan las funciones del personal al servicio de la PGR sean accesibles para su consulta y conocimiento público, pudiéndose incluir para estos efectos un enlace electrónico en el sitio *Web* institucional de la PGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Desarrollar acciones de capacitación, sensibilización y divulgación con respecto a las normas de conducta y valores éticos que rigen a los funcionarios de la PGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Complementar la publicación, a través del sitio *Web* institucional de la PGR, de información que permita a la ciudadanía conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la PGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Adoptar las medidas que se estimen necesarias para continuar impulsando la efectiva implementación del Plan Estratégico 2011-2014 de la PGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).

- 2.4.6. Desarrollar y promover proyectos informáticos, complementarios a los existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de coordinación y cooperación interinstitucionales, así como de prevención y detección de prácticas corruptas que realiza la PGR. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PGR, mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten el escrutinio público. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Promover, en el marco de la PGR, políticas y/o campañas, complementarias a las existentes, que permitan a los servidores públicos y a la población en general formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar los actos de corrupción. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.9. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por la PGR en relación con la generalidad de los delitos que afecten los intereses y/o el patrimonio del Estado que permita conocer cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, y el sentido absolutorio o condenatorio de tal decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio *Web* institucional de la PGR, de la información estadística sobre el cumplimiento de sus funciones. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.11. Elaborar información estadística relativa sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior de la PGR con sujeción a los disposiciones aplicables de la LSCCA y su Reglamento, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).

### **3. POLICÍA NACIONAL**

#### **3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[137] La PN cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[138] De conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 constitucional y 1° de la Ley de la Policía Nacional y sus Reformas<sup>87/</sup> (Ley No. 228, en adelante “LPN”), la PN es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante; es el único cuerpo policial del Estado, con la misión de proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Asimismo, la PN es responsable de la prevención y persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, así como velar por el respeto y preservación de los bienes propiedad del Estado y de los particulares, brindar el auxilio necesario al Poder Judicial y a otras autoridades que conforme a la Ley lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.

[139] Asimismo, el artículo 2° de la LPN dispone que la PN tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial, la que ejerce con sus jefes, oficiales y personal adecuado, jerarquizados bajo un solo mando y escalafón. El artículo 3° del mismo ordenamiento establece, por su parte, como funciones de la PN, cumplir y hacer cumplir la ley y las resoluciones de las autoridades judiciales; investigar los delitos perseguibles de oficio y, cuando fuere requerida su actuación, en los delitos de acción privada, así como recibir denuncias sobre faltas o delitos y su remisión a la autoridad competente; además de prevenir la comisión de actos delictivos mediante el estudio, planificación y ejecución de métodos y técnicas de prevención de la delincuencia, entre otras atribuciones.

[140] Dentro de su estructura orgánica descrita en el artículo 8° de la LPN y de acuerdo también con la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta<sup>88/</sup>, la PN cuenta para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección e investigación de delitos, con una Dirección de Auxilio Judicial, dentro de la cual se ubica el Departamento de Delitos Especiales al que corresponde perseguir e investigar aquellos en contra de la Administración Pública, así como con la Dirección de Investigaciones Económicas, cuya especialidad es desarrollar labores de inteligencia a fin de detectar la posible comisión de delitos de orden económico, fiscal, aduanero y legitimación ilegal de capitales. Cabe resaltar que en diciembre de 2001 mediante Resolución 003/02, la PN creó el Departamento Anticorrupción como la unidad especializada en la investigación de inteligencia en los delitos contra la Administración Pública, así como el Departamento de Inteligencia y Análisis Financiero, facultada para elaborar y presentar las pruebas periciales, brindar seguimiento y análisis de los reportes de operaciones sospechosas en materia de lavado de dinero o activos provenientes de cualquier actividad delictiva, incluyendo aquellas cometidas por funcionarios y/o empleados públicos.

[141] Con respecto a la manera en la que adopta sus decisiones, el artículo 5° de la LPN dispone que los miembros de la PN, en el cumplimiento de sus funciones, actuarán conforme a los principios fundamentales establecidos en dicha Ley, a su profesionalismo, a su condición de servidores públicos y especialmente respetando los derechos humanos. Para estos efectos, de acuerdo con la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta<sup>89/</sup>, las estructuras policiales de la PN se subordinan a la Dirección General, la cual delega los asuntos a la Subdirección General que corresponda en razón del ámbito competencial de cada una de ellas. Asimismo, en cuanto a la resolución de los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas por la PN, éstos se rigen por el sistema de recursos y procedimientos establecidos y regulados por los artículos 39 al 46 de la LOCPPE y 26 y 27 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional y sus Reformas<sup>90/</sup> (Decreto Ejecutivo No. 26/96, en adelante “RLPN”). Agotada la vía administrativa, si corresponde, el agraviado podrá ejercer el

---

87. Disponible en: <http://goo.gl/uxavVY>

88. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 3, *supra* nota 8.

89. *Ibid.*, pp. 24 y 25.

90. Disponible en: <http://goo.gl/ADS6tk>

recurso de amparo o aquellos contemplados en la Ley que Regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley No. 350).

[142] De conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la LPN, la Jefatura Nacional es el órgano de dirección de la PN, integrada por el Director General, a quien corresponde el mando, dirección y administración de la institución y las demás atribuciones y deberes contemplados en los artículos 16 de la LPN y 3° de su Reglamento; tres Subdirectores Generales que están a cargo de las áreas de investigación, prevención y gestión; y el Inspector General. Cabe señalar que la PN está sometida a la autoridad civil ejercida por el Presidente de la República, como Jefe Supremo de la PN, a través del Ministro de Gobernación, quien dirigirá, organizará, coordinará y supervisará a la PN a través de la Dirección General de conformidad con las disposiciones aplicables de la LPN y la LOCPPE.

[143] En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 de la LPN y 229 de su Reglamento, el Director General de la PN es nombrado por el Presidente de la República, entre los miembros de la Jefatura Nacional, para lo cual deberá ostentar el Grado de Comisionado General. De acuerdo con el artículo 88, numeral 1, de la LPN, el Director General tendrá una permanencia de cinco años en el cargo y concluido este período pasará a retiro. Por su parte, los artículos 81 de la LPN y 230 de su Reglamento disponen que los Subdirectores Generales y el Inspector General serán nombrados por el Ministro de Gobernación, a propuesta del Director General, dentro de los miembros que ostenten el Grado de Comisionado Mayor o de Comisionado General, ocupando tales cargos por cinco años prorrogables.

[144] Con respecto a las instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo, el artículo 89 de la LPN dispone que el Presidente de la República podrá destituir al Director General por insubordinación, realizar proselitismo político dentro o fuera de la institución, desempeñar cargos públicos de carácter civil, por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito que merezca pena más que correccional, y/o por incapacidad física o mental declarada de conformidad con la Ley.

[145] En cuanto a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en que son provistos mismos, la LPN, en sus artículos 49 al 53, establece la Carrera Policial con base en criterios de profesionalismo y eficacia, así como la obligatoriedad del Gobierno de promover, a través del Ministerio de Gobernación, las condiciones más favorables para la promoción humana, social y profesional de los miembros de la PN, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, méritos y capacidad, quienes, en lo laboral, estarán sujetos a lo previsto en la LPN, su Reglamento y a las políticas generales de personal del Ministerio de Gobernación y a las especiales de la PN, aprobadas por el Director General.

[146] Asimismo, de conformidad con los artículos 70 de LPN y 149 y 237 de su Reglamento, los procesos de selección de personal se harán por convocatoria pública y de acuerdo a las calidades que verifique la Academia de Policía, debiendo los aspirantes reunir los requisitos mínimos previstos en los artículos 70 de LPN y 235 de su Reglamento, entre otras disposiciones aplicables.

[147] Con relación al régimen de responsabilidad por sus actuaciones, los artículos 54 al 56 de la LPN estipulan la responsabilidad de los miembros de la PN de manera personal y directa por los actos en los ejercicios de sus funciones y que cuando ellos hayan actuado en contravención a los principios fundamentales de actuación, se les someterá al régimen disciplinario o a la orden del tribunal competente dependiendo de la falta o el delito cometido. Dicho régimen está previsto en a las normas

constitucionales, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo<sup>91/</sup> (Decreto Ejecutivo 35-2009), el Reglamento de Ética de la Policía Nacional<sup>92/</sup> (Acuerdo Ministerial No. 069-2000) y el nuevo Reglamento Disciplinario de la PN<sup>93/</sup> (Decreto 51/2012).

[148] Respecto de la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>94/</sup> que *“la PN cuenta con los Manuales de Organización y Funciones; Manuales de Procedimientos de las Especialidades de la Policía Nacional; Normas Técnicas de Control Internos emitidas por la Contraloría General de la República, y Manuales de Políticas Institucional.”*

[149] En materia de capacitación, la PN cuenta la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”<sup>95/</sup>, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del RLPN, *“se constituye en el Instituto de Estudios Superiores de la Policía Nacional, que es el órgano rector del Sistema de Educación de la Policía y su función consiste en organizar, planear, dirigir, coordinar y supervisar la formación profesional, capacitación y desarrollo de los aspirantes y policías en servicio activo y fuerzas auxiliares mediante planes y programas integrales, especializados, científicos y humanísticos.”* De acuerdo con los artículo 147 al 152 del mismo ordenamiento, el Sistema de Educación de la Policía está conformado por los subsistemas de formación; de promoción y capacitación; de preparación continua.

[150] En lo que tiene que ver con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, así como la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>96/</sup> que *“las especialidades de la PN de Nicaragua, cuenta con Manuales de Procedimientos para ejecutar su trabajo. Paralelamente, se trabaja con Sistemas Automatizados para procesar con rapidez la información, por ejemplo, el SIRCOP (Sistema de Registro y Control de Personal), que es administrado por la División de Personal para el control y seguimiento de la carrera del funcionario policial. EL SAIP (Sistema automatizado de Investigación Policial), administrado por la Dirección de Auxilio Judicial. Además, la PN hace uso de Sistemas Automatizados de Organismos y Organizaciones Internacionales, principalmente, de aquellos enfocados a la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional.”*

[151] En cuanto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, con base en la información que el Comité tuvo a su disposición, la PN cuenta con una División de Desarrollo, Programas y Proyectos<sup>97/</sup> responsable de la formulación, gestión, administración y seguimiento de programas y proyectos financiados por la cooperación externa, inversiones públicas y créditos, enfocados en las temáticas policiales relacionadas con el desarrollo y fortalecimiento institucional de la PN. Cabe resaltar, entre éstos, el proyecto “Transparencia y Probidad en la Policía Nacional”<sup>98/</sup>, financiado con recursos de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán).

---

91. Disponible en: <http://goo.gl/6VzDtn>

92. Disponible en: <http://goo.gl/uZj8Gr>

93. Disponible en: <http://goo.gl/z4qTXA>

94. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

95. Véase: <http://www.edudis-policia.edu.ni>

96. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

97. Véase: <http://pndivisiondesarrollo.wikispaces.com/home>

98. Véase: <http://www.policia.gob.ni/webasuntos/proyectos.html>

[152] Con relación a la manera en la que se suministra información a la ciudadanía acerca de los objetivos y funciones de la PN, los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la misma, la PN cuenta, en primer lugar, con el sitio Web institucional [www.policia.gob.ni](http://www.policia.gob.ni), el cual, además de proveer información general sobre la institución, establece el enlace [www.policia.gob.ni/servi.html](http://www.policia.gob.ni/servi.html) para que la población acceda y conozca los requisitos para tramitar permisos de conducir, de portación de armas, o para la obtención de certificados de conducta., entre otros. El sitio Web institucional contiene, asimismo, un enlace al Centro de Documentación de Información Policial<sup>99/</sup> (CEDOC), que provee información sobre diversos aspectos del quehacer policial a nivel nacional e internacional.

[153] Adicionalmente, de acuerdo con la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta<sup>100/</sup>, la PN cuenta con medios impresos y espacios de radio y televisión (Visión Policial) que permiten a la ciudadanía acceder a cierto tipo de información sobre el comportamiento de la criminalidad y violencia, así como cuentas en las redes sociales Facebook y YouTube, en donde se publican notas de prensa, comunicados e informes de gestión, entre otros.

[154] La misma respuesta<sup>101/</sup> del Estado analizado señala que en el marco del Modelo Policial Preventivo, Proactivo Comunitario<sup>102/</sup>, *“se define dentro de sus subsistemas, la planificación policial con la participación activa de los diferentes sectores de la Sociedad Civil y la Comunidad Organizada, permitiendo identificar y dar respuesta a los principales problemas de seguridad ciudadana tomando como referencia el principio de responsabilidad compartida. Siendo un proceso sistemático que se retroalimenta y permite la participación ciudadana en el control social y la buena gestión policial.”* De la misma manera y en cumplimiento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, la PN ha instalada 39 buzones físicos de quejas y sugerencias en algunas de las demarcaciones territoriales del país.<sup>103/</sup>

[155] Con relación a los mecanismos de control interno, como se mencionó anteriormente, la PN cuenta con un Inspector General, quien, de conformidad con el artículo 19 de la LPN, depende directamente del Director General y entre sus atribuciones es responsable de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que rigen a la PN, cuidando de la oportuna y justa corrección de las faltas en que incurran sus miembros; realizar las inspecciones a las distintas unidades a fin de constatar el funcionamiento de éstas y el buen servicio de los miembros, cuidar por el prestigio de la institución disponiendo las investigaciones necesarias ante los reclamos que formulen autoridades o particulares en relación a la conducta policial, o por la violación de los derechos y garantías consignados en la Constitución por parte de sus miembros, así como verificar el cumplimiento de las instrucciones y órdenes del Director General, entre otras responsabilidades.

[156] La PN cuenta además con una División de Asuntos Internos<sup>104/</sup>, a la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la LPN, corresponde investigar las denuncias que autoridades y/o particulares formulen en relación con el comportamiento de los miembros de la PN. Los artículos

---

99. Véase: <http://www.policia.gob.ni/cedoc>

100. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 60, *supra* nota 8.

101. *Ibídem*.

102. Véase: <http://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/revistas/sistematizacion.pdf>

103. Al respecto, la República Nicaragua señala que la efectividad que ha tenido el Modelo Policial es producto de la Estrategia de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, lo que conllevó a elevarse a rango Constitucional en las recientes reformas de la Constitución Política de la República, aprobadas por la Asamblea Nacional.

104. Véase: <http://www.policia.gob.ni/webasuntos/asuntosinternos.html>

160, 161 y 162 de la misma Ley señalan que esta División se encargará de investigarlas, emitir conclusiones y resolver las medidas correspondientes en su nivel de competencia, citando a los ciudadanos que se encuentren relacionados como testigos o involucrados e informando al ciudadano los resultados de la investigación y de las medidas aplicadas.

[157] Sobre el particular, cabe señalar que el sitio *Web* institucional facilita un enlace electrónico<sup>105/</sup> para que los ciudadanos puedan interponer una denuncia cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados por uso indebido de la fuerza o mal servicio de la PN, o bien cuando se encuentren frente a un acto de corrupción.

[158] En cuanto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 al 103 de la LPN, los recursos financieros destinados a la PN en el Presupuesto General de la República son administrados por ésta por medio de sus órganos de apoyo de administración y finanzas, bajo la supervisión y vigilancia del Ministerio de Gobernación. Para su funcionamiento la PN tiene asignada una partida presupuestaria conforme lo establecido en la LAFRP, en la que se señala la manera de realizar la formulación, grabación, ejecución y posterior rendición de todos y cada uno de los recursos con que cuenta la PN, indistintamente de las fuentes de financiamiento.

[159] En relación con los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o Poderes Públicos del Estado y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de las mismas, como se mencionó anteriormente con respecto al MP y a la PGR, la PN ha suscrito convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con otras entidades públicas para la detección, prevención, investigación y sanción de los delitos contra la Administración Pública, entre los que destacan, el “Acuerdo de Coordinación entre el MP, PN y PGR en la Investigación, Persecución y Recuperación de Activos Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos Conexos”, así como su participación en la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República, descrita en la sección 2.1 de este informe.

[160] Finalmente, con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para ello, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>106/</sup> la figura de un informe de gestión anual de la Jefatura Nacional al Presidente de la República, así como la comparecencia de los Jefes de Delegaciones y Especialidades nacionales. En cuanto a la recopilación de la información, la misma respuesta<sup>107/</sup> establece que ésta *“se realiza a través del Sistema de Información Policial (SIPOL) y de los Centros de Emergencia policial que funcionan a nivel nacional, dirigido por la Secretaría Ejecutiva Nacional, que es el órgano encargado de recibir, evaluar, planificar, organizar, ordenar, asesorar y procesar la información con el objeto de apoyar las decisiones de la Jefatura Nacional; así como recibir y custodiar la documentación remitida a la policía o despachada por ella.”*

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[161] La PN cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección

---

105. Véase: <http://www.policia.gob.ni/webasuntos/denuncia.html>

106. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 84, *supra* nota 8.

107. *Ibidem*.



3.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[162] En primer lugar, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité denota también la existencia de otros cuerpos normativos y medidas que estima complementan las previsiones de la LPN y su Reglamento en materia de recursos humanos, tales como la estrategias de reclutamiento, las políticas de personal de la PN y el Manual de la Carrera Policial, Postulación de Oficiales a Cargos Vacantes y Cursos (Disposición No. 020/04), por mencionar algunos, los cuales el Comité no identificó que estuvieran disponibles para su consulta en el sitio *Web* institucional de la PN, por lo que formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 3.4.1. del capítulo II de este informe).

[163] En segundo lugar, si bien el Estado analizado señala en su respuesta<sup>108/</sup> que la PN cuenta con documentos en los que se describen las funciones del personal a su servicio, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, no identifica la existencia de manuales específicos que se relacionen con las funciones de quienes en el Departamento Anticorrupción desempeñan las labores de investigación de inteligencia en los delitos de corrupción y contra la Administración Pública. En este sentido, el Comité formulará una recomendación para que se adopten las medidas necesarias para que la PN cuente con dichos manuales. (Véase recomendación 3.4.2. del capítulo II de este informe).

[164] En tercer lugar, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité no identifica la existencia de procedimientos documentados, manuales o guías que versen sobre el desarrollo de las tareas de investigación de actos de corrupción y de los delitos contra la Administración Pública. En este sentido, el Comité formulará una recomendación para que se adopten las medidas necesarias para que la PN cuente con dichos documentos y, si corresponde, que los mismos sean publicados en su sitio *Web*.<sup>109/</sup> (Véase recomendación 3.4.3. del capítulo II de este informe).

[165] En cuarto lugar, el Comité formulará una recomendación con base en lo expresando por el Estado analizado en su respuesta<sup>110/</sup>, en el sentido que “... *se requiere de recursos tecnológicos, reposición de equipos informáticos, medios de comunicación, de transporte, diseños de software entre otros, que estén en correspondencia con las demandas del servicio, nuevos escenario y modalidades complejas de criminalidad que enfrenta la institución policial.*” (Véase recomendación 3.4.4. del capítulo II de este informe).

[166] En el mismo sentido, el Comité formulará una recomendación con base en lo expresando por el Estado analizado en su respuesta<sup>111/</sup>, al señalar que “*resulta importante destacar la preocupación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), en la asignación de recursos humanos, técnicos materiales para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en medio de las dificultades económicas del país.*” (Véase recomendación 3.4.5. del capítulo II de este informe).

---

108. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

109. Al respecto, la República de Nicaragua señala que agregar que la PN aprobó y puso en vigencia mediante disposición N° 014-2012 de la Directora General de la Policía Nacional el Manual de Procedimientos de Investigación Policial en Delitos y Faltas Penales, el que contiene una sección sobre la metodología para la Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública que se constituye como base material de estudio obligatorio de los Planes y Programas de los Cursos correspondiente de la Academia de Policía y del Sistema de Preparación Continua, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

110. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 106, *supra* nota 8.

111. *Ibidem*.



[167] Finalmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, se toma nota de la información que sobre el particular suministró el Estado analizado en su respuesta. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las disposiciones que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PN, mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten la participación ciudadana. (Véase recomendación 3.4.6 del capítulo II de este informe).

### **3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[168] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario, se recabó información relativa a la PN, entre la que se destaca la siguiente:

[169] En primer lugar, en la respuesta<sup>112/</sup> del Estado analizado al cuestionario, se ponen de presente las acciones que ha venido desarrollando la PN para prevenir prácticas corruptas, tales como las 797 visitas operativas que a nivel nacional se realizaron a diferentes instituciones estatales, alcaldías y entes descentralizados, así como las *“37 visitas especiales a diferentes estructuras departamentales con el fin de obtener información sobre casos de malas prácticas, examinar el tratamiento policial, conocer la situación actual de personas investigadas anteriormente y posibilitar la realización de visitas a los diferentes Operadores de Justicia locales para incidir en la agilización de los procesos en los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. De esta forma, se logró identificar en las instituciones, Alcaldías, y entes descentralizados, que las áreas consideradas más vulnerables para la comisión de malas prácticas, fueron adquisiciones, recaudaciones, expedición de permisos, supervisión y bodegas.”*

[170] Al respecto, el Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que la PN ha desarrollado ciertas acciones de carácter preventivo de actos de corrupción. Sin embargo, teniendo en cuenta las atribuciones que sobre la prevención del delito le confiere la LPN, el Comité estima conveniente que el Estado analizado a través de la PN, considere desarrollar, entre otras acciones, campañas de prevención de las prácticas corruptas, de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrearán y de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales.<sup>113/</sup> (Véase recomendación 3.4.7. del capítulo II de este informe).

[171] En segundo lugar, en cuanto a las labores que desempeña la PN en materia de detección de las prácticas corruptas que generan responsabilidad administrativa y/o penal para quienes resultan involucrados en las mismas, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>114/</sup> que la Dirección de Investigaciones Económicas en su función de detección y prevención de los delitos y malas prácticas en la Administración Pública, articuló, desarrolló y coordinó actividades como el Sistema Policial de Inteligencia Investigativa, con la participación de las autoridades de las Instituciones del Estado y entes descentralizados. Esto le permitió conocer e investigar 213 informaciones. De éstas se logró la prevención de 123 actividades en las que se involucraron servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, a los que se les aplicó sanciones administrativas por las autoridades superiores de las instituciones, producto de las recomendaciones surgidas de las investigaciones. Asimismo, a 28

---

112. Ibid., pp. 91 y 92.

113. Al respecto, la República de Nicaragua presenta información adicional sobre labores de divulgación y prevención de los actos de corrupción por parte de la PN en el periodo 2010-2011, disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

114. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 95 y 96, *supra* nota 8.

informaciones se les brindaron seguimiento operativo con resultados negativos y 62 investigaciones fueron tramitadas a la Dirección de Auxilio Judicial, para su documentación e investigación (véase tablas siguientes).

Año	Tipo penal	Dirección de Auxilio Judicial	Actividades Prevenidas	Negativas
2008	Malversación	00	00	00
	Fraude	02	00	06
	Peculado	01	00	09
	Cohecho	00	00	00
	Prevención de malas prácticas	00	39	00
	Subtotal	03	39	15
2009	Malversación	01	00	00
	Fraude	03	00	02
	Peculado	07	00	02
	Cohecho	00	00	00
	Prevención de malas prácticas	00	25	00
	Subtotal	11	25	04
2010	Malversación	00	00	00
	Fraude	03	00	01
	Peculado	10	00	03
	Cohecho	01	00	00
	Prevención de malas prácticas	00	29	00
	Subtotal	14	29	04
2011	Malversación	00	00	00
	Fraude	02	00	01
	Peculado	09	00	04
	Cohecho	03	00	00
	Prevención de malas prácticas	00	20	00
	Subtotal	14	20	05
2012	Malversación	00	00	00
	Fraude	01	00	00
	Peculado	18	00	00
	Cohecho	01	00	00
	Prevención de malas prácticas	00	10	00
	Subtotal	20	10	00
Total		62	123	28

Años	Tipo penal	Dirección de Auxilio Judicial	Actividades Prevenidas	Negativas	Total
2008-2012	Malversación	01	00	00	01
	Fraude	11	00	10	21
	Peculado	45	00	18	63
	Cohecho	05	00	00	05
	Prevención de malas prácticas	00	123	00	123
Total		62	123	28	213

[172] Sumado a lo anterior, en la misma respuesta<sup>115/</sup> del Estado analizado se señala que “la Dirección de Auxilio Judicial, en su articulación como parte del Sistema Policial con la Dirección de Investigaciones Económicas registró, investigó y documentó la cantidad de 62 casos de delitos Contra la Administración Pública. En esta fase de investigación es importante destacar la responsabilidad compartida con otros operadores de justicia miembros de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal y las autoridades de las Instituciones afectadas. De las investigaciones realizadas se remitieron a la instancia competente, Ministerio Público 58 casos y se encuentran en proceso investigativo 4 casos.” (Véase tabla siguiente).

Tipo penal	2008	2009	2010	2011		2012		Total		Total
	RMP	RMP	RMP	RMP	P	RMP	P	RMP	P	
Fraude	02	03	03	02	00	01	00	11	00	11
Peculado	01	07	10	08	01	15	03	41	04	45
Cohecho	00	00	01	03	00	01	00	05	00	05
Malversación	00	01	00	00	00	00	00	01	00	01
Total	03	11	14	13	01	17	03	58	04	62

(RMP) Remitidos al MP; (P) Pendiente (en proceso investigativo).

[173] Con base en lo anterior, el Comité denota que la PN ha dado cumplimiento a sus funciones de detección de prácticas corruptas. Sin embargo, considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones:

[174] – Teniendo en cuenta que la información suministrada por el Estado analizado sobre las diligencias llevadas a cabo por la PN por los delitos que allí se indican, el Comité no identifica el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de esos años por la totalidad de los delitos de corrupción tipificados en el régimen jurídico penal nicaragüense, indicando cuántas se encuentran en curso y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, por lo que formulará un recomendación en este sentido. (Véase recomendación 3.4.8. del capítulo II de este informe).

[175] – Con relación a lo anterior, el Comité tuvo a su disposición el Anuario Estadístico 2012<sup>116/</sup> de la PN, el cual recoge los principales logros alcanzados por la PN en ese periodo, así como los datos generales del comportamiento de la actividad delictiva del país y sus principales indicadores. No obstante, el Comité echa de menos que en dicho documento no se identifiquen, dentro de los apartados comparativos de la actividad delictiva nacional, datos relacionados con los delitos contra la Administración Pública, los cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos, o bien aquellos que atenten contra los intereses y/o patrimonio del Estado. En este sentido, el Comité estima conveniente se adopten las medidas se consideren convenientes a modo de incluir la información estadística que se recomienda en el párrafo anterior en los Anuarios Estadísticos que elabora la PN. (Véase recomendación 3.4.9. del capítulo II de este informe).

[176] En tercer lugar, con relación a las funciones de sanción de la PN en cuanto a las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria para quienes resultan involucrados en las mismas, el Estado analizado pone de presente en su respuesta<sup>117/</sup> que “en el periodo comprendido del 2008-2012 se recepcionaron [sic] por la División de Asuntos Internos 9904 denuncias, de las cuales 1,340

115. Ibíd., p. 96.

116. Disponible en: <http://goo.gl/MzIve0>

117. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 101 y 102, *supra* nota 8.

*denuncias corresponden a malas prácticas y falta de transparencia en el actuar policial, lo que representa el 13.52%. De ellas, resultaron positivas el 55% equivalentes a 737 denuncias. Como resultado de las investigaciones administrativas disciplinarias se investigaron 2,597 Policías y se sancionaron 1,191 policías, lo que en relación con el total de la plantilla policial la proporción se corresponde al 2% de funcionarios policiales sancionados.”*

[177] La misma respuesta<sup>118/</sup> se señala además que la PN obtiene “...un promedio anual de 268 casos, con resultados positivos el promedio anual es de 147 denuncias. El promedio de policías sancionados anual es de 238. El Inspector General emitió 716 resoluciones en el ámbito de su competencia, de las cuales 562 corresponde a sanciones de bajas, 142 son traslados a cargos inferiores y 12 restricciones en el lugar de servicio. El resto que equivale a 475, fueron medidas disciplinarias propuestas por la División de Asuntos Internos. Una de las características de las vías de denuncias por malas prácticas, falta de transparencia o actos de corrupción, es que el 55% de estos hechos son denunciados por mandos policiales, lo que demuestra el impacto de la capacitación recibida, los niveles de compromiso y responsabilidad institucional en la prevención, investigación y corrección de los actos que afectan la imagen y la buena gestión policial. La denuncia por la vía de la ciudadanía representa un 42%, mientras que un 2% proviene de otras fuentes (PPDH, Inspectoría Civil y Organismos de Derechos Humanos)...”

[178] Sin perjuicio que la anterior información podría servir para demostrar que la PN ha realizado investigaciones e impuesto sanciones disciplinarias en cumplimiento de las funciones que le competen en relación con la LPN y su Reglamento, el Comité formulará una recomendación sobre la conveniencia de que ésta de publique. (Véase recomendación 3.4.10. del capítulo II de este informe).

### **3.4. Conclusiones y recomendaciones**

[179] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la PN en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[180] La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la PN, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

[181] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos normativos y otras medidas que complementan las previsiones de la LPN y su Reglamento en materia de recursos humanos, tales como las estrategias de reclutamiento, las políticas de personal de la PN y el Manual de la Carrera Policial, Postulación de Oficiales a Cargos Vacantes y Cursos (Disposición No. 020/04) estén disponibles para su consulta en el en el sitio *Web* institucional de la PN. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Complementar los documentos en los que se describen las funciones del personal al servicio de la PN con manuales o guías relacionados con las funciones de quienes desempeñan las labores de investigación de inteligencia en los delitos de corrupción

---

118. *Ibídem.*

y contra la Administración Pública principalmente en el Departamento Anticorrupción. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).

- 3.4.3. Desarrollar procedimientos documentados, manuales o guías que versen sobre las tareas de investigación de los delitos contra la Administración Pública, los cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos, y de aquellos que atenten contra los intereses y/o el patrimonio del Estado y, si corresponde, hacerlos accesibles para su consulta en el sitio *Web* institucional de la PN. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Dotar a la PN con los recursos tecnológicos y sistemas informáticos que se estimen necesarios y acordes a las demandas del servicio, nuevos escenarios y modalidades complejas de criminalidad que enfrenta la institución. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Dotar a la PN de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones, principalmente dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PN, mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten el escrutinio público. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Desarrollar campañas de prevención de la corrupción, de divulgación de las consecuencias que la misma trae consigo, así como de probidad y concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por la PN en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer cuántas se encuentran en curso y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Complementar los Anuarios Estadísticos que elabore en el futuro la PN con información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por esta institución en relación con la generalidad de las prácticas corruptas, incluyendo los delitos contra la Administración Pública, los cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos, y aquellos que atenten contra los intereses y/o el patrimonio del Estado. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Publicar la información estadística sobre los resultados de los procesos de investigación disciplinaria en el ámbito de la PN que permita conocer cuántas investigaciones están en curso, el número de decisiones adoptadas en relación con las mismas; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones

relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

#### **4. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

##### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[182] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[183] De conformidad con los artículos 154 constitucional y 5°, 6° y 7° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado<sup>119/</sup> (Ley No. 681, en adelante “LOCGR”), la CGR es el organismo superior de control dotado de independencia y autonomía funcional y administrativa, con ámbito nacional, que tiene a su cargo la rectoría del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado<sup>120/</sup>; el examen y evaluación, por medio de auditoría gubernamental<sup>121/</sup>, de los sistemas administrativos, contables, operativos y de información y sus operaciones, realizadas por las entidades y organismos públicos y sus servidores, sin excepción alguna; la expedición de regulaciones para el funcionamiento de dicho Sistema, así como la determinación de responsabilidades administrativas y civiles, y, cuando de los resultados de sus investigaciones se presuman responsabilidades penales, hacerlo del conocimiento de los Tribunales de Justicia.

[184] Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 155 constitucional y 9° de la LOCGR, corresponde también a la CGR, entre otras atribuciones y funciones, establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales, el control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República, así como el control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.

[185] En cuanto al ámbito de sus funciones, el artículo 2° de la LOCGR señala que las disposiciones de esta Ley rigen para todos los organismos y entidades de la Administración Pública y sus servidores públicos en todo el territorio de la República, así como para todas personas naturales o jurídicas del sector privado mencionadas en el párrafo anterior.

[186] Respecto a la manera en que la CGR adopta sus decisiones, de acuerdo con el citado artículo 154 constitucional y 5° de la LOCGR, para dirigirla se creó un órgano colegiado denominado el Consejo Superior de la Contraloría General de la República (en adelante CSCGR) integrado por cinco miembros propietarios. Dentro de este contexto, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la LOCGR, las decisiones y/o resoluciones que adopte este Consejo se toman con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Sin embargo, en aquellas decisiones y/o resoluciones en las que se presuman responsabilidades penales, éstas deberán ser aprobadas por los dos tercios de sus miembros y proceder conforme al 2° párrafo del artículo 156 constitucional.

---

119. Disponible en: <http://goo.gl/sUCbXB>

120. Véase artículos 28 al 33 de la LOCGR.

121. Véase artículo 43 de la LOCGR.

[187] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la LOCGR, en contra de las resoluciones que establezcan responsabilidades administrativas e impongan sanciones determinadas por la máxima autoridad, procede recurso de revisión ante la misma autoridad que dictó dicha resolución y de la decisión que se adopte procederá recurso de apelación ante el CSCGR. Pero, si fuere el Consejo el que dictó la resolución que dio lugar a la responsabilidad administrativa y las sanciones correspondientes, ésta podrá recurrirse mediante recurso de revisión, dejándose en ambos casos a salvo el derecho del afectado para impugnar dichas resoluciones por la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o por aquellos contemplados en la Ley No. 350.

[188] En cuanto a las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones, las multas impuestas a los servidores de la Administración Pública se efectuarán por la propia entidad u organismo mediante retención de las remuneraciones. Sin embargo, si en la fecha de imposición de la multa el infractor hubiese cesado en el cargo, la multa podrá hacerse efectiva en cualquier cargo público en que se encontrare de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 LOCGR. Pero si el infractor no está laborando para ninguna entidad estatal, el CSCGRP remitirá a la PGR la certificación de la resolución que determina la responsabilidad administrativa para su recaudación por la vía que corresponda.

[189] Con respecto a las resoluciones que establezcan responsabilidades civiles, éstas son determinadas de forma privativa por la CGR, pudiéndose, de conformidad con el artículo 90 de LOCGR, promover en contra de éstas recurso de revisión ante el CSCGR. Con el recurso de revisión se agota la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo administrativo. De conformidad con el artículo 87 de la LOCGR, las resoluciones firmes dictadas por el CSCGR que confirmen responsabilidades civiles a la luz de lo dispuesto en el artículo 1687 del Código Procesal Civil, constituyen título ejecutivo y será la PGR la que por la vía ejecutiva realice las acciones pertinentes.

[190] En materia de presunción de responsabilidad penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la LOCGR, las decisiones que en esa vía emita el CSCGR no serán objeto de recurso por la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o por aquellos contemplados en la Ley No. 350. Las resoluciones en donde se presumieren responsabilidades penales junto con las conclusiones y todas las evidencias acumuladas en la auditoría, de conformidad con el artículo 9º, numeral 16, de la LOCGR, serán remitidas de inmediato al conocimiento de los Tribunales de Justicia, la PGR y/o el MP, para el ejercicio de sus atribuciones correspondientes.

[191] De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la LOCGR, el CSCG es la autoridad superior de la CGR y responsable de dirigir su organización y funcionamiento, de acuerdo con esta Ley, sus regulaciones e instrucciones generales y especiales. De conformidad con los artículos 154 constitucional y 5º de la LOCGR, el CSCG está conformado por cinco miembros propietarios y tres suplentes electos por la Asamblea Nacional de acuerdo con el literal a) del artículo 138, numeral 9, constitucional, para un período de cinco años, dentro del cual gozarán de inmunidad. El proceso de nombramiento inicia con la presentación de terna o lista enviada por el Presidente de la República según lo dispuesto por el artículo 150, numeral 14, de la Constitución, debiendo los candidatos reunir las calidades descritas en el artículo 12 de la LOCGR.

[192] El CSCG tendrá un Presidente, quien ejerce la representación legal de la CGR y las atribuciones y funciones señaladas en el artículo 17 de la LOCGR, y un Vicepresidente, quien, entre otras atribuciones, auxilia al Presidente y lo sustituye en caso de ausencia temporal. Ambos son

electos por los miembros del Consejo, por mayoría de votos y por el periodo de un año, pudiendo ser reelectos.

[193] De acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 138 constitucional y 21 de la LOCGR, los miembros propietarios y suplentes del CSCG solamente podrán ser suspendidos o destituidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, por las causales, términos y procedimientos previstos en los artículos 21, 22 y 23 de la LOCGR.

[194] En relación con la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, la CGR se rige por lo dispuesto en la LSCCA y en su Reglamento, ordenamientos sobre los cuales ya se hecho referencia en la sección 2.1 del presente informe. No obstante, es preciso agregar que los funcionarios al servicio de la CGR están sujetos igualmente al régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 8º, 10 y 11, entre otros aplicables, de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos<sup>122/</sup> (Ley No. 438, en adelante “LPSP”), así como a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ética Profesional de los Servidores Públicos de la CGR, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas<sup>123/</sup>.

[195] Respecto de la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, la CGR cuenta, entre otros, con los Manuales de Organización y Funciones de las Direcciones Generales de Auditorías, Jurídica, Administrativa-Financiera, de Planificación y Desarrollo Institucional, así como de la Divisiones de Sistemas Informáticos y de Relaciones Institucionales, de las Unidades de Apoyo Administrativo y de Adquisiciones. Igualmente, cuenta con Manuales de Puestos de Trabajo de las Direcciones Generales de Auditorías y de Relaciones Institucionales, disponibles todos en el sitio *Web* institucional de la CGR. Asimismo, en materia de capacitación del personal de la CGR, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>124/</sup> que cada año se contempla el “Plan Anual de Capacitación”, el cual es aprobado por el CSCGR en función de las necesidades y requerimientos del personal humano.

[196] Igualmente, la CGR cuenta y publica en su sitio *Web* institucional<sup>125/</sup> un conjunto de manuales, guías y normativas que establecen procedimientos documentados para el desarrollo de sus tareas, entre los que se destacan el Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica, el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Auditoría, los Manuales de Auditoría Gubernamental, las Guías de Auditoría y Evaluación en diversas áreas, así como las Normativas en materia de auditoría gubernamental, control y fiscalización, por citarse algunas.

[197] Con respecto a acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, la CGR cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional<sup>126/</sup> para el quinquenio 2011-2015, el cual, en aras de establecer un marco estratégico en correspondencia a la LOCGR y vinculado a las metodologías internacionales en el ámbito de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y la OLACEFS, prevé una serie de actividades concretas para la consecución de los objetivos específicos que el dicho Plan se contemplan.

---

122. Disponible en: <http://goo.gl/D8Nxz3>

123. Disponible en: <http://goo.gl/vPPWL8>

124. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 44, *supra* nota 8.

125. Véase: [http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com\\_docman&Itemid=184](http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&Itemid=184)

126. Disponible en : <http://goo.gl/NIIj6X>



[198] Asimismo, desde 2010 y con el apoyo de la cooperación internacional alemana, la CGR viene implementado el Sistema de Información para la Implementación de Recomendaciones de Control Interno (SIIRCI), que permite el control y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditorías aprobados por el CSCGR, permitiendo la efectividad de los sistemas de control en el sector público.

[199] Sobre la manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, la CGR cuenta con el sitio *Web* institucional [www.cgr.gob.ni](http://www.cgr.gob.ni), el cual, entre otros aspectos, provee información de carácter general sobre la institución, su marco jurídico y estructura. El sitio provee además un enlace<sup>127/</sup> al centro de documentación de la CGR, el cual está a cargo de la Oficina de Acceso a la Información (en adelante “OAIP”) y en él se pueden consultar y descargar archivos con información de procedimientos de control efectuados por la CGR en el sector público, tales como informes de auditoría aprobados con su respectiva resolución administrativa, informes ejecutivos sobre declaraciones de probidad recibidas, actividades de control y seguimiento a las contrataciones estatales y municipales, informes sobre denuncias ciudadanas tramitadas, planes de capacitación a los servidores públicos de las entidades sujetas a control, entre otros. La CGR cuenta a su vez con una Dirección de Denuncia Ciudadana, la cual tiene también un espacio en el sitio *Web* institucional en el que se publican los requisitos y respuestas a las preguntas más frecuentes para interponer una denuncia ante la CGR de conformidad con el procedimiento de tramitación aprobado por el CSCGR en Sesión Ordinaria N° 74 de septiembre de 2000 y sus últimas reformas de 2012.

[200] Con relación a los mecanismos de control interno, como se mencionó anteriormente, el régimen disciplinario imperante para los servidores de la CGR está dispuesto en los artículos 47 al 66 de la LSCCA y 14 al 22 de su Reglamento, sumado a las previsiones legales dispuestas tanto en la LPSP, como a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ética Profesional de los Servidores Públicos de la CGR, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas. Asimismo, la CGR cuenta con su propia Unidad de Auditoría Interna, la cual está encargada, entre otras responsabilidades, de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas de auditoría gubernamental para la adecuada administración y ejecución de los recursos financieros de la institución.

[201] En cuanto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestarios para su funcionamiento, el artículo 8° de la LOCGR dispone que el presupuesto de la CGR se financiará con una cantidad suficiente de los ingresos tributarios del Presupuesto General de la República, que le permita cumplir a cabalidad todas sus atribuciones y funciones establecidas en la LOCGR; las donaciones y por lo previsto en otras disposiciones legales. A este respecto, el Estado analizado puso de presente en su respuesta<sup>128/</sup> la información presupuestaria otorgada a la CGR en los últimos 5 años, a saber:

Año	Presupuesto	
	En Córdobas Nicaragüenses (C\$)	Equivalente en Dólares Estadounidenses (US\$)
2008	132,598,082	6,680,643.59
2009	135,533.979	6,503,393.82
2010	131,743,000	6,020,061.69
2011	139,820,699	6,085,325.53
2012	171,558,192	7,111,073.01

127. Véase: [http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com\\_docman&Itemid=101](http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&Itemid=101)

128. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 71 y 72, *supra* nota 8.

[202] En lo que tiene que ver con los mecanismos de coordinación con otros órganos o poderes del Estado, el artículo 9º, numeral 27, de la LOCGR dispone la obligación de la CGR de cooperar con los órganos competentes, en lo que fuere necesario, para el examen de los actos cometidos contra el patrimonio público y para la iniciación y prosecución de los juicios, situación que, como señala el Estado analizado en su respuesta, ha conllevado a la CGR a suscribir acuerdos y/o convenios de coordinación y cooperación con otras instituciones, tales como el MP, la PGR y la PN, sobre los cuales ya se ha hecho referencia en las secciones correspondientes del presente informe. Cabe señalar que el numeral 30 del citado artículo 9º fija la obligación de la CGR de emitir informe previo al dictamen elaborado en el proceso de consulta sobre los proyectos de ley que pudieren formularse con el funcionamiento del Sistema de Control Gubernamental o con el Organismo Superior de Control, lo cual implica, de acuerdo con lo expresado por el Estado analizado en su respuesta, *“una relación estrecha con el Poder Legislativo”*<sup>129/</sup>.

[203] Finalmente, con relación a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones que desempeña la CGR, el artículo 156 constitucional en su último párrafo señala que el Presidente del CSCGR o quien éste designe de entre los miembros del Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o cuando ésta lo solicite. Estos informes de gestión están disponibles para su consulta en el sitio Web institucional de la CGR<sup>130/</sup> y, de acuerdo con la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta, *“para la recopilación del contenido del Informe anual, la CGR cuenta dentro de su estructura con una dependencia denominada “División de Planificación” encargada de recopilar de todas las Direcciones sustantivas y de apoyo los resultados referidos a la gestión operativa anual de la CGR.”*<sup>131/</sup>

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[204] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[205] En primer lugar, con relación al régimen sobre la manera en que se determinan los recursos humanos y en la que son provistos los mismos, el Comité no formulará recomendaciones al respecto, sino que reitera aquellas contenidas en el Informe de la Segunda Ronda<sup>132/</sup>, teniendo en cuenta el personal de la CGR está sujeto al régimen previsto en la LSCCA y su Reglamento, el cual fue analizado detalladamente en el marco de dicha Ronda. Empero, sin perjuicio de lo anterior y con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité desea dejar constancia en el presente informe de la conveniencia de que el Estado analizado continúe avanzando en el desarrollo e implementación del sistema de clasificación de puestos en las instituciones del Estado, principalmente en la CGR, a modo de garantizar lo dispuesto por el artículo 22 y siguientes de la LSCCA y contribuir a la consecución y logro de uno de los objetivos estratégicos de la CGR contemplados en su Plan Estratégico quinquenal de desarrollo institucional citado en la sección anterior.

---

129. Ibid, p. 78.

130. Véase: [http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=64&Itemid=184](http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=184)

131. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 83 y 84, *supra* nota 8.

132. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 5 a 7 y 22 a 24, *supra* nota 25.

[206] En segundo lugar, el Comité reconoce como una de las responsabilidades de la CGR, la de ofrecer y, en su caso, coordinar la capacitación de servidores públicos en áreas de su competencia. Al respecto, el Comité observa, con base en la información que tuvo a su disposición, que en materia de capacitación externa, la CGR realizó en 2012 más de 100 eventos con más de 3,200 funcionarios públicos capacitados<sup>133/</sup>, mientras que en el mismo periodo a nivel interno impartió más de 25 eventos con más de 400 funcionarios participantes<sup>134/</sup>. Con base en esta información, el Comité no identifica si en el marco de las capacitaciones realizadas, especialmente a nivel interno, se incluyen cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia, que contengan, entre otros aspectos, el conocimiento y debido cumplimiento de la normativa ética que rige al personal de la CGR, dispuesta principalmente tanto en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos como en el Reglamento de Ética Profesional de los Servidores Públicos de la CGR, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas, citados ambos ordenamientos en la sección anterior, por lo que formulará una recomendación.<sup>135</sup> (Véase recomendación 4.4.1. del capítulo II de este informe).

[207] En tercer lugar, en lo que respecta a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, el Comité reconoce la puesta en marcha, entre otras iniciativas, del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la CGR para el quinquenio 2011-2015. Dicho documento prevé seis objetivos estratégicos tendientes a fortalecer las capacidades de la institución hacia un mejor y más eficiente cumplimiento de sus atribuciones. Para el Comité esta iniciativa reviste de mucha importancia teniendo en cuenta el conjunto de acciones que se contemplan para cumplir con tales objetivos, principalmente a través de las labores que la CGR se ha propuesto para el fortalecimiento del sistema de control interno en el sector gubernamental para promover la transparencia en la función pública y lograr una correcta administración de los recursos por parte de las instituciones del Estado, lo cual contribuye al logro de los propósitos de la Convención y, en este sentido, formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.2. del capítulo II de este informe).

[208] En este orden de ideas y en aras de facilitar y hacer más efectivo y eficiente el cumplimiento de las labores que desempeña la CGR, el Comité reconoce la existencia de iniciativas que, con el apoyo de la cooperación internacional principalmente, la CGR viene implementando para desarrollar nuevas y modernas tecnologías y sistemas informáticos, tales como el SIIRCI, al cual se aludió en la sección anterior y que permite el control y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría aprobados por el CSCGR. Sin embargo, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité releva la utilidad de la tecnología como una herramienta para el desarrollo de mecanismos modernos para prevenir y detectar las prácticas corruptas, como lo señala el párrafo 9º del artículo III de la Convención. En este sentido, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere redoblar sus esfuerzos tendientes a fortalecer la plataforma tecnológica de la CGR, a través del desarrollo y promoción de proyectos informáticos que complementen a los existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de ésta en materia de prevención y detección de las prácticas corruptas. (Véase recomendación 4.4.3. del capítulo II de este informe).

[209] En cuarto lugar, sobre la manera en la que se suministra información a los ciudadanos, el Comité reconoce los esfuerzos de la CGR de contar con un sitio *Web* moderno con un centro de documentación *en línea* que permite consultar y descargar archivos con información acerca de los

---

133. Véase el Informe de Gestión Anual 2012 de la CGR a la Asamblea Nacional, p. 36, disponible en:

<http://goo.gl/zSMJjV>

134. *Ibíd.*, p. 47.

135. Al respecto, la República de Nicaragua señala que la capacitación se impartió a servidores públicos de diversos sectores de la Administración Pública incluyendo al personal de las diversas áreas de la CGR en temas de probidad, ética, manuales y normativas técnicas. Los cursos fueron desarrollados por funcionarios de la Oficina de Ética Pública

objetivos y cumplimiento de las funciones propias de la CGR, lo cual, como se puede observar, es el resultado de un arduo proceso de digitalización de documentos físicos que, entiende el Comité, corresponde desarrollar a la OAIP de conformidad con lo dispuesto en su “manual de organización y funciones” aprobado en mayo de 2012 por el CSCGR<sup>136/</sup>. En este sentido, el Comité considera conveniente adoptar las medidas que se estimen necesarias tendientes a fortalecer a la OAIP para que ésta pueda cumplir con sus funciones, principalmente aquellas relacionadas con el mantenimiento y actualización permanente del sitio *Web* institucional de la CGR. Lo anterior responde también a lo expresado por la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia” que en su informe indica que *“los dirigentes de esta entidad [CGR] aseguran que se ha rediseñado la página Web con la finalidad de desarrollar el proceso de digitalización de la información física y así ingresarla a la Web, sabemos que es un método beneficioso al poder tener réplicas digitales de los documentos más importantes y de frecuente consulta sin embargo de esta nueva metodología aún no se observan frutos pues la información no es actualizada y no todos los documentos de interés público se encuentran en la misma.”*<sup>137/</sup>. (Véase recomendación 4.4.4. del capítulo II de este informe).

[210] Asimismo, el Comité reconoce la existencia al interior de la CGR de la Dirección de Denuncia Ciudadana, la cual tiene también un espacio en el sitio *Web* institucional en el que se publican los requisitos y respuestas a las preguntas más frecuentes para interponer una denuncia ante la CGR de conformidad con los procedimientos aprobados por el CSCGR, las cuales, de acuerdo con la información que tuvo a su disposición el Comité, sólo puede presentarse de manera presencial, escrita u oral, ante CGR o bien en sus delegaciones regionales. A este respecto y en aras de facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que crea necesarias a modo de establecer un enlace electrónico que posibilite la presentación en línea de tales denuncias, así como reclamos, quejas o sugerencias por parte de los particulares en relación con las funciones que cumple la CGR y sobre el desempeño del personal a su servicio. (Véase recomendación 4.4.5. del capítulo II de este informe).

[211] En quinto lugar, si bien el Comité observa, con base en la información suministrada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, que el presupuesto de la CGR incrementó en más de un 16% de 2011 a 2012, de la misma respuesta se denota también que *“una de las principales limitantes para la CGR es que la asignación presupuestaria que recibe no le permite desplegar en todas las unidades auditables [sic] que manejan, ejecutan y gestionan recursos públicos, las acciones de prevención, detección de las prácticas corruptas, puesto que implicaría contratar o efectuar mayor cantidad de capacitación en el sector público, contratar más auditores gubernamentales a efectos de tener mayor cobertura en la fiscalización y control de los recursos públicos. Adicional al escueto presupuesto que tiene asignada la CGR, se cuenta con otra limitante, que al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica se le atribuyó ejercer otros tipos de auditorías como son las Auditorías Ambientales, Forenses e Informática; sin embargo, no se cuenta con el personal capacitado para desarrollar este tipo de auditoría, por lo que es menester el apoyo técnico en estas áreas para posibilitar la realización de las potestades de la Contraloría General de la República.”*<sup>138/</sup>

[212] Por su parte, la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, en su informe indica que *“en aspectos generales y a simple vista externa a las instituciones de control, podemos manifestar que su principal limitación es el insuficiente presupuesto otorgado por el Gobierno, la falta de mayor disponibilidad de recursos financieros constituye el potencial número*

---

136. Disponible en: <http://goo.gl/TfhPXo>

137. Véase el informe presentado por la organización “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, p. 9, *supra* nota 3.

138. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 106, *supra* nota 8.

*uno que no permite ampliar la cobertura sobre las mismas funciones que por ley constitucional los diferentes órganos de control deben desarrollar. El método que les ha permitido avanzar en sus propósitos institucionales han sido gracias a la cooperación de algunas EFS en el marco de la OLACEFS o con otros Organismos Internacionales, que han solventado monetaria e intelectualmente sus necesidades. Otro factor que influye negativamente en la realización de sus funciones es la falta de capacidades técnicas para realizar las capacitaciones, acompañamientos y preparación técnica de nuevas modalidades de auditorías.”<sup>139/</sup>.*

[213] El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta los anteriores aspectos. (Véase recomendación 4.4.6. del capítulo II de este informe).

[214] Finalmente, con relación a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones que desempeña la CGR, el Comité estima conveniente que el Estado analizado estudie la posibilidad de complementar los mismos con mecanismos que posibiliten el escrutinio público sobre la rendición que se presenta, fortaleciéndose con ello la participación ciudadana en el seguimiento de su gestión. (Véase recomendación 4.4.7. del capítulo II de este informe).

#### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[215] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario, se recabó información relativa a la CGR, entre la que se destaca la siguiente:

[216] En primer lugar, en la respuesta<sup>140/</sup> del Estado analizado al cuestionario, se ponen de presente las acciones que ha venido desarrollando la CGR en cumplimiento de la atribución que le confiere el artículo 155 constitucional de establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso adecuado de los fondos públicos. En los últimos 5 años dichas acciones, señala la respuesta, se han centrado en capacitaciones continuas respecto a la aplicación de las normas y en el fortalecimiento del sistema de control interno en el sector público.

[217] Asimismo, entre los años 2009 y 2012, la CGR, con el apoyo de la cooperación internacional, ha “*divulgado varios informes denominados “Actos Administrativos de la CGR”, en donde se relacionan las resoluciones del CSCGR sobre las auditorías practicadas, así como las respuestas a las consultas más frecuentes que los servidores públicos formulan para no caer en errores; de estas publicaciones se han distribuidos a la sociedad civil en un promedio de 1,300 ejemplares. De igual forma, en la página Web se han publicado los ajustes a los sistemas administrativos de las Entidades del Sector Público de acuerdo a las NTCl, así como el avance del Plan de Capacitación externa de la CGR durante el año 2009 al 2012.*”

[218] De la respuesta se desprende también, además de la puesta en marcha del SIIRCI descrito en la sección 4.1 del presente informe, que en 2011, en el marco de un Convenio de Cooperación Científico-Técnico con la Contraloría General de la República del Ecuador, “*se fortaleció el Sistema de Control Interno con el inicio de asistencia técnica de tres guías especializadas de control interno y se comenzó el proceso de inducción en las instituciones del Gobierno Central y Poderes del Estado. Esta labor se continuará en los años 2013 y 2014, hasta llegar a completar el 100% de las entidades.*”

---

139. Véase el informe presentado por la organización “Grupo Cívico Ética y Transparencia”, p. 14, *supra* nota 3.

140. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 90 y 91, *supra* nota 8.

[219] El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que la CGR ha desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones que le competen en esta materia. Sin embargo, en aras de fortalecer el relacionamiento de la CGR con la ciudadanía, cree conveniente que el Estado analizado considere desarrollar campañas o programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y se promueva, entre otros aspectos, la facultad que tiene la sociedad de interponer denuncias por actos de corrupción en las entidades públicas sujetas al control de la CGR. (Véase recomendación 4.4.8. del capítulo II de este informe).

[220] En segundo lugar, en relación con la labor que desarrolla la CGR a través de los diferentes tipos de auditoría que realiza (financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales, informáticas, ambientales, forenses, de gestión y de cualquier otra clase) para la detección de prácticas corruptas cometidas por los servidores públicos en las entidades y organismos sujetos a su control, de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>141/</sup> que “en los últimos cinco años (2008-2012), la CGR ha finalizado un total de 2,377 auditorías.” (véase tabla siguiente<sup>142/</sup>).

Auditorías Finalizadas 2008-2012					
2008	2009	2010	2011	2012	Total
226	354	291	766	740	2,377

[221] Con base en lo anterior y en relación con la labor que desarrolla la CGR para determinar responsabilidad administrativa, civil, y de presunción de responsabilidad penal, a partir de las auditorías que ésta realiza y de conformidad con las facultades que le asisten en términos de lo dispuesto en el título V de la LOCGR, tanto de la respuesta del Estado analizado al cuestionario<sup>143/</sup> como de los documentos<sup>144/</sup> que tuvo a su disposición el Comité, se desprende lo siguiente:

Año	Auditorías Finalizadas	Tipo de responsabilidad determinada					
		Administrativa		Civil		Presunción de Responsabilidad Penal	
		Funcionarios	Entidades	Funcionarios	Monto (C\$)	Funcionarios	Monto (C\$)
2008	226	105	19	36	53,147,491.79	23	34,082,866.67
2009	354	99	20	39	9,660,122.06	31	10,841,053.44
2010	291	23	7	10	776,463.21	1	124,494.01
2011	766	89	24	35	1,553,181.12	65	9,519,17.74
2012	740	53	23	16	1,471,398.85	27	2,832,983.15

[222] La anterior información sirve para demostrar que la CGR ha determinado responsabilidad administrativa, civil, y de presunción de responsabilidad penal, a partir de las auditorías que ésta realiza.

141. Ibíd., pp. 94 y 95.

142. Esta información se obtuvo a partir de los Informes Anuales de Gestión de la CGR publicados en su sitio Web institucional, disponibles en: [www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=64&Itemid=184](http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=184)

143. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 100 y 101, *supra* nota 8.

144. Esta información se obtuvo a partir de los Informes Anuales de Gestión de la CGR publicados en su sitio Web institucional, *supra* nota 130.

[223] Asimismo, el Comité observa que la CGR, dentro del ámbito de sus funciones, debe ordenar a la máxima autoridad de la institución correspondiente, la ejecución de sanciones administrativas, o aplicarlas si fuera el caso, así como efectuar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría y a la ejecución de las responsabilidades y sanciones administrativas. Al respecto, el Comité no cuenta con información sobre los resultados en cumplimiento de estas atribuciones, por lo que formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.9. del capítulo II de este informe).

[224] Igualmente, con base en la obligación de la CGR prevista en el artículo 9º, numeral 16, de la LOCGR de remitir de inmediato a los Tribunales de Justicia, la PGR y/o al MP las conclusiones y todas las evidencias acumuladas, cuando de los resultados de la investigación de auditoría se presumiera responsabilidad penal, el Comité no cuenta con información sobre el resultado de estos trámites, que permitan conocer la cantidad de investigaciones enviadas a los Tribunales de Justicia, la PGR y/o al MP para la instauración de un procedimiento penal. Sobre el particular, el Comité formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.10. en el capítulo II de este informe).

[225] En tercer lugar, en relación con los montos que la CGR ha determinado en perjuicio del erario público como consecuencia de la responsabilidad civil de los servidores públicos, en su respuesta<sup>145/</sup>, el Estado analizado provee los siguientes datos:

Año	Monto (C\$)
2008	53,147,491.79
2009	9,660,122.09
2010	776,463.21
2011	1,553,181.12
2012	1,471,398.85
Total	66,608,657.06

[226] La anterior información sirve para demostrar que la CGR ha determinado responsabilidad civil para quienes resultan involucrados en prácticas corruptas, así como el monto de los resarcimientos patrimoniales a favor del Estado.

[227] Finalmente, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, no identificó información estadística sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior de la CGR con sujeción a las disposiciones aplicables de la LSCCA y su Reglamento, por lo que formulará una recomendación. (Véase la recomendación 4.4.11. en el capítulo II de este informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones**

[228] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la CGR en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[229] La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la CGR, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.**

[230] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

---

145. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 105, *supra* nota 8.



- 4.4.1. Complementar los programas de capacitación que a nivel interno desarrolla la CGR con cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia, que incluyan, entre otros aspectos, la promoción, conocimiento y el debido cumplimiento de la normativa ética que rige a su personal. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Adoptar las medidas pertinentes para continuar impulsando la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la CGR para el quinquenio 2011-2015, principalmente en cuanto al fortalecimiento del sistema de control interno en el sector público para promover la transparencia en la función pública y lograr una correcta administración de los recursos por parte de las instituciones del Estado. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Fortalecer la plataforma tecnológica de la CGR, a través del desarrollo y promoción de proyectos informáticos que complementen a los existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de ésta en materia de prevención y detección de las prácticas corruptas. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Fortalecer a la OAIP para que pueda cumplir con sus funciones, principalmente las relacionadas con el mantenimiento y actualización permanente del sitio *Web* institucional de la CGR. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Adoptar las medidas necesarias para establecer un enlace electrónico que posibilite la formulación en línea de denuncias ciudadanas por prácticas corruptas, así como la presentación de reclamos, quejas o sugerencias en relación con las funciones que cumple la CGR y sobre el desempeño del personal a su servicio. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Fortalecer a la CGR, garantizándoles los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y cobertura de sus atribuciones de control externo y fiscalización, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Adoptar las medidas pertinentes que complementen el mecanismo de rendición cuentas de la CGR con procedimientos que permitan el escrutinio público. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Desarrollar campañas o programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público en donde se promueva, entre otros aspectos, la facultad que tiene la sociedad de interponer denuncias por actos de corrupción en las entidades públicas sujetas al control de la CGR. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.9. Elaborar información estadística en relación con las funciones de seguimiento que adelanta la CGR en cuanto al cumplimiento por parte del CSCGR o de las máximas autoridades de los organismos sujetos a su control, según corresponda, de la ejecución de las responsabilidades y sanciones administrativas determinadas con base en los resultados de las auditorías gubernamentales que realiza la CGR, que permita conocer la aplicación de dichas sanciones y, en su caso, la recaudación de



las multas, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).

4.4.10. Elaborar información estadística que permita conocer, con base en los resultados de las auditorías adelantadas por la CGR en las que se determine presunción de responsabilidad penal, el número de investigaciones remitidas a los Tribunales de Justicia, la PGR y/o al MP y el número de procesos penales iniciados con base en las mismas, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).

4.4.11. Elaborar información estadística relativa sobre los procedimientos disciplinarios que se siguen al interior de la CGR con sujeción a las disposiciones aplicables de la LSCCA y su Reglamento, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).

## **5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

### **5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[231] La CSJ cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[232] De conformidad con el artículo 159 constitucional, la CSJ es el órgano superior del Poder Judicial, la cual, junto con los tribunales de justicia del Estado (de apelación, jueces de distrito y locales), conforman un sistema unitario, cuya organización y funcionamiento se encuentra determinado por las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua<sup>146/</sup> (Ley No. 260, en adelante “LOPJUD”).

[233] En este sentido, con base en lo dispuesto en el artículo 3° de la LOPJUD, corresponde exclusivamente al Poder Judicial la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado y conocer todos aquellos procedimientos no contenciosos en que la ley autoriza su intervención, y sólo los tribunales castrenses conocerán de las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la CSJ de conformidad con la Constitución y las leyes.

[234] De conformidad con los artículos 6° y 8° de la LOPJUD, el Poder Judicial es independiente y se subordina únicamente a los intereses supremos de la Nación de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Los magistrados, jueces y tribunales, en su actividad jurisdiccional, son también independientes en todas sus actuaciones, debiendo obediencia sólo a la Constitución y la ley. Sin embargo, no pueden, en lo individual o colectivo, dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento, pero para efectos de asegurar una administración de justicia pronta y

---

146. Disponible en: <http://goo.gl/2F6vUC>

cumplida, sí podrán girar instrucciones generales de carácter procedimental. La LOPJUD dispone además que cuando los jueces y magistrados se vean inquietados o perturbados en su independencia, éstos deberán ponerlo en conocimiento de las autoridades previstas en la LOPJUD.

[235] La CSJ, como máximo tribunal del Poder Judicial, ejerce las funciones jurisdiccionales, de gobierno y reglamentarias que le confieren la Constitución en su artículo 164, así como las previstas en los artículos 27, 32, 33, 34, 35 y demás aplicables de la LOPJUD. Para estos efectos, el artículo 163, en relación con el artículo 138, numeral 7º, constitucionales, establece que la CSJ estará integrada por 16 magistrados electos por la Asamblea Nacional por un período de cinco años, con el sesenta por ciento del total de votos de Diputados, y propuestos en listas separadas para cada cargo, por el Presidente de la República y Diputados, en consulta con asociaciones civiles pertinentes. El citado artículo 163 dispone que la CSJ estará integrada por salas. Actualmente existen salas en materia civil, penal, constitucional y de lo contencioso administrativo, además de la Corte Plena.

[236] De conformidad con los artículos 25 y 26 de la LOPJUD, la Corte Plena está integrada por todos los magistrados de la CSJ y se reunirá ordinariamente la primera y tercera semana de cada mes, y extraordinariamente cuando la convoque el Presidente de la CSJ o lo solicite por escrito un tercio del total de sus miembros. La Corte Plena, además, formará *quórum* con la presencia de por lo menos las tres cuartas partes del total de sus miembros y toda resolución o acuerdo que emane de ella requerirá del voto coincidente de por lo menos los dos tercios del total de sus integrantes. Asimismo, de acuerdo con el artículo 27 de la LOPJUD, compete a la Corte Plena la resolución oportuna, rápida y razonada de los asuntos planteados ante la misma, así como conocer y resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad de la ley y conflictos de competencia y constitucionalidad que se susciten entre los Poderes del Estado; los recursos de apelación en contra de resoluciones recaídas en procesos especiales de responsabilidad con formación de causa por delitos propios de los funcionarios públicos, en contra de los magistrados de la CSJ y de tribunales de apelaciones; las acciones penales en contra de aquellos funcionarios que la Constitución señale, previa privación de su inmunidad, así como organizar y dirigir la administración de justicia, ente otras.

[237] Tratándose de la Sala Penal, ésta es la superior jerárquica jurisdiccional de las salas penales de los Tribunales de Apelaciones, así como de los Juzgados de Distrito y Locales de lo Penal. Su función jurisdiccional la ejerce en todo el territorio nacional. Al respecto, corresponde a la Corte Plena designar, entre sus magistrados, a seis miembros quienes la conformarán, y conocerán, tramitarán y resolverán lo concerniente en materia penal dentro de sus competencias establecidas. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la LOPJUD, la Sala Penal de la CSJ conocerá y resolverá los recursos de casación en asuntos penales, incluyendo los provenientes de la jurisdicción militar; los recursos de hecho por inadmisibilidad de la casación en materia penal; las solicitudes de extradición y de auxilio judicial internacional; de los conflictos de competencia entre jueces y tribunales de lo penal, así como entre Tribunales de Justicia Ordinaria de lo Penal y los Tribunales Militares; asimismo, conocerá, en primera instancia, de oficio o por acusación, de los procesos especiales de responsabilidad con formación de causa que por delitos propios de los funcionarios públicos tengan lugar en contra de los Magistrados de la CSJ, previa privación de su inmunidad, y de los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones y, en segunda instancia, de las causas por los delitos señalados anteriormente, cuando éstos fuesen cometidos por los Jueces de Distrito, Abogados y Notarios, Alcaldes y Presidentes de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica, entre otras funciones.

[238] Cabe señalar, que la Sala de lo Penal, al igual que las demás salas de la CSJ, cuenta con un Presidente, quien es electo entre los demás miembros de la Sala por un período de un año, y le

competente, además de las funciones señaladas en el artículo 37 de la LOPJUD, distribuir entre los integrantes de la Sala los expedientes para su debido estudio y confección del proyecto de sentencia, para luego ser debatido.

[239] En cuanto a la manera en que se adoptan las decisiones y las acciones necesarias para hacerlas efectivas, los artículos 13 y 14 de la LOPJUD establecen que, so pena de nulidad, toda resolución judicial, con excepción de las providencias de mero trámite, deberá exponer claramente los motivos sobre los cuales está fundamentada de conformidad con los supuestos de hecho y normativos involucrados en cada caso particular, debiendo analizar los argumentos expresados por las partes en defensa de sus derechos. Los jueces y magistrados deben resolver de acuerdo a los fallos judiciales precedentes y sólo podrán modificarlos explicando detalladamente las razones que motiven el cambio de interpretación, debiendo guardar observancia del debido proceso en toda actuación judicial, cualquiera que sea la naturaleza del proceso y brindar las garantías necesarias a las partes para la adecuada defensa de sus derechos.

[240] Por su parte, el artículo 12 de la LOJUD, en relación con el artículo 167 constitucional, dispone que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas y en ningún caso pueden restringirse los efectos o limitar los alcances del pronunciamiento, bajo las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales que la ley determine. Asimismo, las autoridades judiciales pueden requerir el auxilio de la fuerza pública en el curso de los procesos y para el cumplimiento de sus sentencias o resoluciones, el que debe ser concedido de inmediato por la autoridad a quien se solicite, bajo apercibimiento de las sanciones de ley.

[241] Con relación a los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden en contra de sus decisiones, el artículo 20 de la LOPJUD señala que todas las sentencias de primer grado, dictadas por los jueces, podrán ser impugnadas por las partes mediante el recurso de apelación, sin perjuicio de los demás recursos establecidos por la ley, y establece, además, que en todo proceso, cualquiera que sea la materia, habrán sólo dos instancias.

[242] En cuanto la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, como quedó señalado anteriormente, la CSJ, máximo tribunal del Poder Judicial del Estado, estará integrada por 16 magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años, quienes deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 161 constitucional. En este sentido, corresponde igualmente a la Asamblea Nacional conocer, admitir y resolver, de conformidad con el numeral 11 del artículo 138 constitucional, sobre las renunciaciones y destituciones de los magistrados de la CSJ, quienes, de conformidad con el artículo 162 constitucional, gozan de inmunidad y únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley.

[243] Asimismo, es preciso mencionar que la CSJ cuenta a su vez, de entre sus miembros, con un Presidente, un Vicepresidente y diez vocales. De acuerdo con el artículo 28 de la LOPJUD, el Presidente, que representa al Poder Judicial y cumple las atribuciones previstas en el artículo 29 de la LOPJUD, es elegido entre los miembros de la CSJ por mayoría de votos para un período de un año. De igual forma y por el mismo período se elige al Vicepresidente que ejercerá las funciones que le designe el Presidente y lo sustituirá en caso de falta temporal, pudiendo ambos cargos ser reelectos. Los diez vocales, por su parte, se enumerarán en forma descendente del uno al diez según el orden como fueron electos por la Asamblea Nacional.

[244] Con relación a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, el Poder Judicial se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Carrera Judicial<sup>147/</sup> (Ley No. 501, en adelante “LCJUD”), la cual, de conformidad con su artículo 1º, tiene por objeto garantizar la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial y regular la Carrera Judicial establecida por el artículo 159 constitucional, así como el régimen disciplinario, ingreso, traslado, permisos y demás aspectos estatutarios atinentes a dicha Carrera. Asimismo, en cuanto a los magistrados de la CSJ, de acuerdo con el artículo 3º de este ordenamiento, ellos integran también la Carrera Judicial como “categoría especial”, rigiéndose por lo dispuesto en la Constitución y, en lo que resulte aplicable y no contradiga a ésta, por lo dispuesto en la LCJUD.

[245] El artículo 2º de la LCJUD dispone que la Carrera Judicial se rige por los principios de mérito, responsabilidad, igualdad, publicidad, estabilidad, imparcialidad, independencia y especialidad; en sus artículos 8º al 15 y 18 establece los requisitos para participar en los concursos de mérito y los requisitos formales para el ingreso a la Carrera Judicial, así como la publicidad y contenido de la convocatoria a concursos y las bases de los mismos, y define los criterios para la valoración de méritos de los concursantes; en sus artículos 4º al 7º instituye el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial<sup>148/</sup> (en adelante “CNACJUD”) como órgano rector de la Carrera Judicial y delimita sus atribuciones; en sus artículos 16 y 17 establece el recurso de impugnación por lo cual los ciudadanos que tengan objeción sobre la idoneidad de alguno de los aspirantes a la Carrera Judicial puedan dar trámite al recurso debidamente motivado ante el Tribunal Examinador; y en su artículo 23 dispone sobre la posibilidad de solicitar la revisión de la puntuación obtenida y la de interponer recurso de apelación de la resolución que rechace dicha solicitud.

[246] En lo que respecta al régimen de incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos, éste se encuentra previsto en los artículos 42, 43 y 44 de la LCJUD, respectivamente. Por su parte, los capítulos XIII y XIV de este cuerpo normativo establecen el régimen y procedimiento disciplinario a los cuales están sujetos los miembros de la Carrera Judicial. Al respecto, cabe señalar, que las disposiciones contenidas en la LOPJUD sobre faltas en que pueden incurrir los funcionarios y empleados del Poder Judicial serán aplicables complementariamente al régimen de la Carrera Judicial, siendo el CNACJUD y la Corte Plena los únicos competentes para imponer sanciones.

[247] Asimismo, es pertinente señalar que el Poder Judicial cuenta con un Código de Ética de los Funcionarios y Empleados a su servicio, aprobado por la CSJ mediante Acuerdo No. 193 de septiembre de 2011<sup>149/</sup>, con el objeto de promover la transparencia, integridad y eficiencia de los servidores públicos del Poder Judicial, mediante el cumplimiento de principios, valores y normas de ética en su función jurisdiccional y administrativa. Su artículo 55 crea la Comisión Nacional de Ética del Poder Judicial, a la cual corresponde conocer y emitir dictamen en los “procesos de responsabilidad ética”, de conformidad con las normas de este Código relativas a los funcionarios y empleados tanto de la Carrera Judicial como de la Administrativa en todo el Estado.

[248] Con relación a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, el Estado analizado pone de presente en su respuesta<sup>150/</sup> que “*en el año 2008 el Poder Judicial inicio un proceso de clasificación de puesto desarrollado en tres fases: Primera fase: Análisis y descripción de puesto de trabajo; Segunda Fase: Análisis y valoración*

---

147. Disponible en: <http://goo.gl/Sw6nGQ>

148. Véase: <http://www.poderjudicial.gob.ni/carrerajudicial/default.asp>

149. Disponible en: <http://goo.gl/nV96Df>

150. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 45, *supra* nota 8.

*realizada por el Ministerio de Hacienda, como Ente Rector, y Tercera fase: Clasificación, en coordinación con el Ente Rector. Como resultado de este proceso, el Poder Judicial cuenta con un Manual de Puestos certificado por el Ministerio de Hacienda.”*

[249] En materia de capacitación, el Poder Judicial cuenta con el “Instituto de Altos Estudios Judiciales”<sup>151/</sup>, órgano rector de la instrucción judicial en Nicaragua. Este Instituto, antiguamente denominado “Escuela Judicial”, cuenta con diversos programas educativos de formación inicial y continua, de posgrados y formación externa, un programa de género y un programa de investigaciones jurídicas. La formación que imparte no sólo alcanza a funcionarios judiciales sino también a miembros de la PN, el MP y la PGR, así como a estudiantes universitarios y abogados, entre otros. A este respecto, el Estado analizado señala en su respuesta que “*durante el período 2008-2012, el Poder Judicial ejecutó 359 eventos de capacitación para mejorar el desempeño de las funciones, y de inducción al personal de nuevo ingreso con la participación de 11,705 funcionarios*”<sup>152/</sup>. Asimismo, cabe resaltar, que en el marco del Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública que se ejecuta con el apoyo de la cooperación internacional, el Instituto imparte un curso de postgrado específicamente en materia de “Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia”.

[250] El Poder Judicial, como parte de sus acciones de fortalecimiento institucional, cuenta con una Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Externa, la cual, entre otras atribuciones, gestiona la cooperación ante organismos donantes para obtener el financiamiento de proyectos de conformidad a las prioridades planteadas por la CSJ. En este sentido, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>153/</sup> algunos de los proyectos que el Poder Judicial se encuentra ejecutando, entre los que destacan el Programa Nacional de Facilitadores Judiciales que se realiza con el apoyo de la Secretaría General de la OEA. Igualmente, conviene hacer mención a la adopción en agosto de 2011 del “Plan Estratégico del Poder Judicial” para el decenio 2011-2021<sup>154/</sup>, que con el apoyo de la cooperación española, tiene entre sus objetivos reducir la retardación de la justicia, facilitar el acceso a la misma sin discriminación, mejorar la gestión administrativa del Poder Judicial y desarrollar canales de coordinación interinstitucional con el Sector Justicia y los otros Poderes del Estado.

[251] Asimismo, se destaca la reciente culminación de la ejecución del “Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia” financiado con recursos procedentes del BID, que tuvo como objetivos ampliar el acceso a la justicia para atender las necesidades de los grupos vulnerables del país; mejorar la organización y funcionamiento de los despachos judiciales, fortalecer y racionalizar las funciones administrativas del Poder Judicial y aumentar la confianza y mejorar la calidad del servicio, mediante el establecimiento y consolidación de las carreras judicial y funcionaria y de la creación de mecanismos de comunicación con los usuarios.

[252] En cuanto a la implementación de tecnologías modernas para facilitar el cumplimiento de sus labores, el Estado analizado señala en su respuesta<sup>155/</sup> que ésta “*se ha constituido como una prioridad estratégica en el desarrollo del Poder Judicial...para mejorar el desempeño de la laboral jurisdiccional y administrativa*”. En este sentido, el Poder Judicial cuenta con una Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones<sup>156/</sup> responsable del desarrollo e implementación

---

151. Véase en: <http://www.poderjudicial.gob.ni/ej/default.asp>

152. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 45, *supra* nota 8.

153. *Ibíd.*, pp. 50 a 55.

154. Disponible en: <http://goo.gl/xqOs6Q>

155. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 45, *supra* nota 8.

156. Véase: <http://www.poderjudicial.gob.ni/dgtic13/default.asp>

de los sistemas informáticos y redes para apoyar y facilitar los procesos y toma de decisiones de todos los órganos jurisdiccionales. Entre ellos se encuentra el sistema de información, gestión y documentación judicial creado con el objetivo de mantener un registro actualizado de leyes, sentencias y jurisprudencia, así como el “Sistema Automatizado de Planificación y Estadística (SAPE)” tendiente a brindar información estadística en materia civil, familiar, laboral, jurisdicción especializada de adolescentes y penal, así como el Sistema NICARO que permite a los ciudadanos consultar en línea asuntos y causas judiciales.

[253] En relación con lo anterior, en cuanto a la manera en la que se suministra información a los ciudadanos acerca de sus objetivos y funciones, el Poder Judicial cuenta con el sitio *Web* institucional [www.poderjudicial.gob.ni](http://www.poderjudicial.gob.ni), que contiene más de 40 páginas principales correspondientes a las diferentes entidades del Poder Judicial, incluida la CSJ, con información sobre su organización, funciones y marco normativo. Asimismo, el sitio *Web* publica una serie de enlaces electrónicos con orientaciones a los ciudadanos acerca de cómo realizar gestiones ante las distintas instancias de este Poder del Estado. Sumando a lo anterior, el Poder Judicial cuenta también con Oficinas de Atención al Público, creadas por el nuevo “Modelo de Gestión de Despachos Judiciales”<sup>157/</sup>, que funcionan en la ciudad de Managua y en cinco circunscripciones del país; un programa radial denominado “*Una hora con la Justicia*”, así como con una serie de publicaciones de producción semanal, trimestral y anual con información sobre servicios judiciales y temas relacionados con la justicia.

[254] Con respecto a los mecanismos de control interno, el Poder Judicial cuenta con una Inspectoría Judicial<sup>158/</sup> que funge como un órgano de apoyo al CNACJUD, encargada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la LOPJUD, de instruir todas las quejas presentadas en contra de los Magistrados de Tribunales de Apelaciones, Jueces, Secretarios, Registradores Públicos y demás funcionarios judiciales que formen parte de la Carrera Judicial. Asimismo tramita las quejas presentadas en contra de los Abogados y Notarios Públicos siempre que no constituyan delito. Dentro de sus funciones también se encuentra la de conocer de las denuncias, que por desbalance patrimonial excesivo, se formulen contra los funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, investigando con base en la “declaración de probidad” que debe rendir todo funcionario público al tenor de la ley de la materia y la realidad del patrimonio actual del denunciado, así como su origen y fundamento del acrecimiento desproporcionado a la remuneración del cargo, remitiendo en su caso el informe correspondiente a la CGR y/o a la PGR.

[255] Sobre la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 159 constitucional dispone que el Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República. Al respecto, el artículo 84 de la LOPJUD señala que la Comisión de Administración del Poder Judicial elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto y lo remitirá a la Corte Plena para su aprobación. Una vez aprobado, éste será remitido al Ministerio de Finanzas para su inclusión en el proyecto de Ley Anual de Presupuesto de la República que corresponda.

[256] En cuanto a los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o Poderes Públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades, el Poder Judicial, a través del Presidente de la CSJ, forma parte de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República<sup>159/</sup>, creada en virtud del artículo 415 del CPP con la finalidad de coordinar y facilitar la implementación del proceso de reforma procesal

---

157. Véase: [http://www.poderjudicial.gob.ni/despa\\_1/default.asp](http://www.poderjudicial.gob.ni/despa_1/default.asp)

158. Véase: <http://www.poderjudicial.gob.ni/Inspect/default.asp>

159. Véase *supra* nota 74.

penal y garantizar la efectiva capacitación de los operadores del sistema y el desempeño de sus respectivas funciones, promoviendo la modernización de la legislación penal procesal y sustantiva y empoderar a la ciudadanía para que pueda acceder a la justicia bajo el nuevo marco legal. Además del Presidente de la CSJ, también integran esta Comisión el Presidente de la Sala Penal de la CSJ, el Fiscal General de la República, el Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Director de la Defensoría Pública, el Director Nacional de la PN, el Director de la Auditoría Militar, el Director del Instituto de Medicina Legal y el Director del Sistema Penitenciario Nacional, el Procurador General de la República, el Viceministro de Gobernación y el Director de la Unidad de Análisis Financiero.

[257] Finalmente, en relación con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Estado analizado señala en su respuesta que *“toda ejecución de gasto en el Poder Judicial es autorizada por la autoridad competente y al final de cada mes se informa de todas las operaciones efectuadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema integrado de Gestión Financiera y Administrativa (SIGFA). Esta información posteriormente es verificada por la Auditoría Interna de la CSJ y por la Contraloría General de la República, para luego ser publicada en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, la CSJ también informa trimestralmente de la ejecución presupuestaria a la Contraloría General de la República, entidad que anualmente practica auditorías.”*<sup>160/</sup>

## **5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[258] La CSJ, como máximo tribunal del Poder Judicial, cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1 de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[259] En primer lugar, el Comité toma nota de lo dispuesto por los artículos 138, numeral 11, y 162 constitucionales en relación a que los Magistrados de la CSJ únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y las Leyes, correspondiéndole a la Asamblea Nacional conocer, admitir y resolver sobre las renunciaciones y destituciones de dichos funcionarios. Sin embargo, con base en la información que sobre la Corte Plena está disponible en el sitio *Web* institucional del Poder Judicial, el Comité observa que *“hasta la fecha no existe una ley que regule el procedimiento para destituir a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”*<sup>161/</sup>. Con base en lo anterior, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado sobre la conveniencia de adoptar, teniendo en cuenta la importancia de garantizar siempre el principio del debido proceso, las disposiciones que estime necesarias que determinen objetivamente el procedimiento y las causales de separación o destitución de los magistrados de la CSJ. (Véase la recomendación 5.4.1. en el capítulo II de este informe).

[260] En segundo lugar, el Comité toma nota de la existencia de la Carrera Judicial con base en las disposiciones contenidas en la LCJUD descritas en la sección anterior. Al respecto, si bien los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el artículo III, párrafo 5°, de la Convención fueron materia de análisis de la Segunda Ronda, el Comité no formulará

---

160. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 86, *supra* nota 8.

161. Véase: <http://www.poderjudicial.gob.ni/paginas/cplena.asp>



recomendaciones sobre el particular, sino que reitera aquellas contenidas en el Informe de dicha Ronda<sup>162/</sup> que aun se encuentran vigentes.

[261] En tercer lugar, en cuanto a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal al servicio del Poder Judicial, el Comité reconoce las fases que desde 2008 vino ejecutando este Poder del Estado para contar con el Manual de Puestos certificado por el Ministerio de Hacienda. A este respecto, el Comité toma nota también de la información suministrada por la República de Nicaragua en su informe de avance presentado en marzo de 2013 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Comité en el sentido que *“la División de Clasificación y Gestión de Carrera Judicial cuenta con un Manual de cargos y funciones, de los funcionarios de carrera Judicial el cual se actualiza permanentemente los cargos y definen el perfil del cargo y requisitos de ingreso. En el año 2012 se realizaron las Descripciones de Puesto de Trabajo de las dependencias de la Defensoría Pública, las Oficinas de Apoyo Judicial y Apoyo Procesal de Managua, y a su vez se actualizó la plantilla del personal de Carrera Judicial a nivel nacional en coordinación con las delegaciones de los departamentos. Continuamos con la laboriosa tarea en este año 2013 de terminar de actualizar las Descripciones de Puesto de Trabajo de al menos el 50% del personal de Carrera Judicial que labora en el Poder Judicial”*<sup>163/</sup>. Con base en lo anterior, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de adoptar las medidas que estime necesarias para culminar el proceso de actualización de las descripciones de puestos de la Carrera Judicial, posibilitando, si corresponde, su consulta pública a través del sitio Web institucional del Poder Judicial. (Véase la recomendación 5.4.2. en el capítulo II de este informe).

[262] En cuarto lugar, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité no identificó la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas en el ámbito del Poder Judicial, o de manuales o guías relativas a las mismas, por lo que formulará una recomendación al respecto.<sup>164/</sup> (Véase la recomendación 5.4.3. en el capítulo II de este informe).

[263] En quinto lugar, el Comité reconoce la prioridad que el Poder Judicial concede al desarrollo de nuevas y modernas tecnologías de la información para facilitar y hacer más efectivo y eficiente el servicio público que presta teniendo en cuenta el conjunto de sistemas, redes, registros informáticos que viene desarrollando a través de su División General de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Al respecto, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, observa la existencia de una serie de sistemas pendientes de implementación y desarrollo tendientes a brindar nuevas herramientas y expandir las existentes con la finalidad de continuar fortaleciendo la plataforma tecnológica del Poder Judicial, por lo que formulará una recomendación para que se continúen desarrollando y promoviendo proyectos informáticos que complementen a los existentes, y con ello contribuir hacia una administración de justicia más transparente y ágil. (Véase la recomendación 5.4.4. en el capítulo II de este informe).

[264] En sexto lugar y en aras de fortalecer los mecanismos de control interno y de atención de denuncias relacionadas el desempeño del personal de la Carrera Judicial, el Comité estima que sería beneficioso para el Estado analizado el establecimiento, a través del sitio Web institucional del Poder

---

162. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, p. 23, *supra* nota 25.

163. Véase Informe de Avance de la República de Nicaragua en el marco de la Vigésima Primera Reunión del Comité (artículo 31 del Reglamento), p. 60, *supra* nota 12.

164. Al respecto, la República de Nicaragua señala que cada una de las áreas cuenta con normas técnicas y circulares que emite la Corte que regulan el funcionamiento de cada una de ellas. Dicha información es de carácter público y se encuentra en el sitio Web en la cual podrán encontrarse los respectivos enlaces para cada área.

Judicial, de un enlace electrónico que posibilite la presentación de tales denuncias por parte de los particulares. (Véase recomendación 5.4.5 del capítulo II de este informe).

[265] Por último, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, no identificó la existencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones que desempeña el Poder Judicial, que incluya, por ejemplo, sus actividades y resultados alcanzados, así como el desempeño interno de la institución, metas y logros. Lo anterior, sin perjuicio de los informes aludidos por el Estado analizado en su respuesta que se rinden tanto al Ministerio de Hacienda como a la CGR en cuanto a la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, así como de los Anuarios Estadísticos que elabora y publica su Dirección de Información y Estadísticas. En este sentido, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 5.4.6 del capítulo II de este informe).

### 5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[266] En su respuesta<sup>165/</sup> al cuestionario, del Estado analizado suministró la siguiente información en cuanto al número de decisiones jurisdiccionales que resultaron con responsabilidad, sanción o absolución en relación con los tipos penales que allí se indican:

Año	Tipo Penal	Ingreso	Tipo de Sentencia			Declarados rebeldes	Total Sentencias
			Sobremto.	Cond.	Absol.		
2008	Abuso de autoridad	2	1	0	0	1	1
	Cohecho	6	0	0	1	0	1
	Encubrimiento	1	0	0	0	0	0
	Fraude y exacción	2	0	0	0	0	0
	Obstrucción de funciones	9	0	0	2	4	2
	Malversación	4	0	0	0	1	0
	Peculado	1	0	0	3	1	3
	Tráfico de influencias	1	0	0	0	0	0
	Subtotal 2008	26	1	0	6	7	7
2009	Abuso de autoridad	3	0	2	0	0	2
	Cohecho	13	2	0	3	2	5
	Encubrimiento	3	0	0	0	0	0
	Fraude	2	0	0	1	0	1
	Fraude y exacción	4	0	0	0	0	0
	Malversación	1	0	0	0	0	0
	Peculado	37	3	5	3	17	11
	Obstrucción de funciones	14	1	0	0	8	1
	Tráfico de influencias	3	0	0	0	0	0
	Subtotal 2009	80	6	7	7	27	20
2010	Abuso de autoridad	3	0	1	2	0	3
	Desobediencia o desacato	2	0	0	0	0	0
	Fraude	1	1	0	0	0	1
	Encubrimiento	2	0	0	0	0	0
	Cohecho	25	1	0	3	2	4
	Malversación	1	0	0	0	0	0
	Peculado	14	2	3	4	1	9

165. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 102 a 105, *supra* nota 8.

	Obstrucción de funciones	22	0	0	1	9	1
	Tráfico de influencias	2	0	0	0	0	0
	Subtotal 2010	72	4	4	10	12	18
2011	Abuso de autoridad	8	0	2	2	1	4
	Admón. fraudulenta	4	1	0	0	0	1
	Desobediencia o desacato	2	0	0	0	0	0
	Encubrimiento	4	0	1	0	0	1
	Fraude	1	0	0	0	0	0
	Cohecho	16	0	6	8	1	14
	Obstrucción de funciones	20	7	2	4	2	13
	Peculado	4	4	2	0	1	6
	Subtotal 2011	59	12	13	14	5	39
2012	Abuso de autoridad	1	0	1	0	0	1
	Admón. fraudulenta	4	4	0	0	0	0
	Desobediencia o desacato	4	4	0	0	0	0
	Encubrimiento	5	0	1	2	0	3
	Fraude	9	10	0	0	0	10
	Cohecho	3	0	0	2	1	2
	Malversación	9	9	0	0	0	9
	Obstrucción de funciones	29	1	5	21	1	27
	Peculado	1	0	0	0	0	0
	Subtotal 2012	65	28	7	25	2	60
Total		302	51	31	62	53	144

[267] Con relación a la anterior tabla, el Estado analizado agrega en su respuesta que “del total de casos registrados en el periodo 2008-2012, el 48% (144) no tienen sentencia firme, el 37% (53) se encuentran Declarados Rebeldes con orden de captura y el resto de casos están en trámite por diversas situaciones procesales; una solicitud de Desaforación [sic] ante la AN, citados para Audiencia 3 con Recursos de Amparo ante la CSJ, 4 citados para Audiencia, entre otras”.

[268] Con base en la información anterior, el Comité estima que la misma sirve para demostrar que en el Estado analizado se han iniciado procedimientos judiciales relativos a determinados delitos cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el Comité considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones:

[269] En primer lugar, como se puede observar, poco más del 35% de los procesos que terminaron por sentencia en el periodo a que se refiere la información provista por el Estado, corresponden a sentencias de sobreseimiento. Sin embargo, el Comité no cuenta con información desagregada que le permita conocer y analizar cuáles fueron las causales invocadas a que se refiere el artículo 155 del CPP para decretar el sobreseimiento en los procesos señalados en la tabla anterior. Por ello, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado para que considere elaborar información estadística que identifique tales causales, incluyendo la prescripción, aplicadas para decretar el sobreseimiento en los procesos judiciales antes aludidos en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase recomendaciones 5.4.7. y 5.4.8 del capítulo II de este informe).

[270] En segundo lugar, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró información en relación con los casos de corrupción que han llegado a conocimiento de la Corte Plena en los últimos cinco años en relación con las funciones de sanción de las prácticas corruptas que le atribuye, entre otras

disposiciones, el artículo 27, numerales 3 y 4 de la LOPJUD, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado. (Véase recomendación 5.4.9. del capítulo II de este informe).

[271] En tercer lugar, el Comité, teniendo en cuenta que no se suministró información en relación con los casos de corrupción que han llegado a conocimiento de la Sala Penal de la CSJ en los últimos cinco años en relación con las funciones de sanción de las prácticas corruptas que le atribuye, entre otras disposiciones, el artículo 33, numerales 1, 8 y 9, de la LOPJUD, le formulará una recomendación al respecto al Estado analizado.<sup>166</sup> (Véase recomendación 5.4.10. del capítulo II de este informe).

[272] Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos en relación con el cumplimiento del régimen y procedimiento disciplinarios previstos, respectivamente, en los capítulos XIII y XIV de la LCJUD, el Estado analizado pone de presente en su respuesta la siguiente información:

Sanciones Impuestas	Año					Total
	2008	2009	2010	2011	2012	
Suspensión provisional	0	5	5	3	6	19
Amonestación privada	1	0	1	2	1	5
Amonestación privada y multa	0	0	0	1	1	2
Destitución del cargo	1	4	1	6	11	23
Suspensión en el cargo por un mes	0	1	0	0	0	1
Suspensión en el cargo por tres meses	0	0	0	0	1	1

[273] Sin perjuicio que la anterior información podría servir para demostrar que al interior del Poder Judicial se han realizado investigaciones e impuesto sanciones disciplinarias en cumplimiento de las funciones que le competen en relación con la LCJUD, el Comité estima que, con base en la misma, no es posible realizar una valoración integral de los resultados en este campo, por lo que formulará una recomendación sobre la conveniencia de que se elabore y publique información estadística sobre estos resultados. (Véase recomendación 5.4.11. del capítulo II de este informe).

#### 5.4. Conclusiones y recomendaciones

[274] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la CSJ en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[275] La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la CSJ, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 5 del capítulo II de este informe.**

[276] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 5.4.1. Considerar adoptar, teniendo en cuenta la importancia de garantizar el principio del debido proceso, las disposiciones necesarias que determinen objetivamente el procedimiento y causales de separación o destitución de los magistrados de la CSJ. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).

---

166. Al respecto, la República de Nicaragua suministra información adicional a la remitida en su respuesta al cuestionario en relación con estadísticas de los casos de corrupción que han llegado a conocimiento de la Sala Penal de la CSJ, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_nic.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_nic.htm)

- 5.4.2. Adoptar las medidas pertinentes para culminar el proceso de actualización de las descripciones de puestos de la Carrera Judicial, posibilitando su consulta pública a través del sitio *Web* institucional del Poder Judicial. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.3. Adoptar procedimientos documentados, manuales o guías, complementarios a los existentes, sobre el desarrollo de las tareas en el ámbito del Poder Judicial. (Véase sección 5.2. del capítulo II de este informe).
- 5.4.4. Desarrollar y promover proyectos informáticos, complementarios a los existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores que desarrolla el Poder Judicial para sancionar las prácticas corruptas. (Véase sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.5. Adoptar las medidas pertinentes que posibiliten presentar, de manera virtual, denuncias por parte de los particulares relacionadas con el desempeño del personal de la Carrera Judicial y Administrativa del Poder Judicial, a través de un enlace electrónico en su sitio *Web* institucional. (Véase sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.6. Adoptar las medidas necesarias que establezcan mecanismos adicionales de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones sustantivas que desempeña el Poder Judicial, sus actividades y resultados, incluyendo procedimientos sobre la manera en la que se recopilaría y procesaría la información necesaria para ello y la forma en que ésta se haría pública y accesible a la ciudadanía. (Véase sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.7. Elaborar información estadística relativa a los procesos judiciales adelantados en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.8. Elaborar información estadística que identifique las causales, incluyendo las de prescripción, aplicadas para decretar el sobreseimiento en los procesos judiciales por los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.9. Elaborar información estadística relativa a los recursos tramitados por la CSJ correspondientes a actos de corrupción, en ejercicio la función que le atribuye, entre otras disposiciones, el artículo 27, numerales 3 y 4 de la LOPJUD, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).

- 5.4.10. Elaborar información estadística relativa a los recursos tramitados por la Sala Penal de la CSJ correspondientes a actos de corrupción, en ejercicio la función que le atribuye, entre otras disposiciones, el artículo 33, numerales 1, 8 y 9, de la LOPJUD, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).
- 5.4.11. Elaborar información estadística relativa a los procedimientos disciplinarios adelantados de conformidad con lo dispuesto en los capítulos XIII y XIV de la LCJUD, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 5.3. del capítulo II de este informe).

### III. BUENAS PRÁCTICAS

[277] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología* para el análisis de la implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda y en la *Estructura* para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario en la sección correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”, las cuales ha deseado compartir con los demás Estados Parte del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

#### [278] En relación con el MP:

[279] – Las “Jornadas de Trabajo Anticorrupción”, que consisten en 2 ó 3 días de trabajo en los que se concentran a los Fiscales Especializados de la UACCO para efectuar un análisis de casos y tomar decisiones como la profundización de las investigaciones o el ejercicio de la acción penal.

[280] – El “monitoreo de casos por delitos contra la Administración Pública”, que consiste en dar seguimiento periódico de cada caso de corrupción existente en el país, ya sea que se encuentre bajo investigación por la PN o esté en etapa de procesamiento penal ante los órganos judiciales. Con ello el MP, tiene por objetivo tener el control sobre las gestiones de los fiscales en casos de corrupción pública e instar a que se cumplan con los procedimientos judiciales establecidos en la ley de la materia y procurar obtener información concreta sobre cada caso para la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de las metas de trabajo.

[281] – El “Sistema Anticorrupción Interinstitucional”, el cual, a partir del monitoreo de los casos de corrupción, se obtiene una gran cantidad de información sobre cada uno en concreto, lo cual es utilizado para alimentar la base de datos interinstitucional de delitos contra la Administración Pública; la cual es rectorada por el MP y permite conocer desde una plataforma informática los actos de investigación y de ejercicio de la acción penal por todos y cada uno de los casos de corrupción existentes en el país.

[282] Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>167/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[283] **En relación con la PGR:**

[284] – La “Colaboración Internacional en materia de Asistencia Legal Mutua”, que consiste en la creación de unidades especializadas, tanto en asuntos penales internacionales, como en la lucha contra la corrupción; el establecimiento de contactos directos vía Internet con las unidades internacionales de las autoridades centrales de otros Estados, como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá, para facilitar la tramitación ágil de las solicitudes de asistencia mutua activas y pasivas, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de la PGR, como autoridad central, con las autoridades nacionales competentes para la realización de las distintas diligencias y actos solicitados en las asistencias, y entre los órganos nacionales de persecución al delito (Poder Judicial, MP, PN) y en el caso particular de los delitos de corrupción, con la CGR. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>168/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[285] **En relación con la PN:**

[286] – La implementación de las “Instancias de Diálogo”, que consiste en un proceso permanente de coordinación entre la PN y la cooperación internacional para apoyar a ésta en la implementación de su Plan Estratégico a través del establecimiento tanto de objetivos estratégicos como indicadores de impacto y de proceso en áreas temáticas, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento institucional de la PN. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>169/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[287] **En relación con la CSJ:**

[288] – El “Modelo de Gestión de Despacho Judiciales”, que consiste en brindar a los usuarios del sistema de justicia un servicio eficaz y eficiente, mejorar la calidad del servicio y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales respaldado por un sistema informático que agiliza la tramitación de los procesos judiciales y permite estar al día con las nuevas tecnologías. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>170/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[289] **En relación con la Oficina de Ética Pública:**

[290] – La “Estrategia de Promoción, Capacitación e Implementación del Decreto Ejecutivo 35-2009 “Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo 35-2009)”, que consiste en promover las buenas prácticas en la gestión pública, capacitando a los servidores públicos de instituciones del Poder Ejecutivo en el manejo del contenido del Código de Conducta Ética, a fin de fomentar los principios y valores éticos a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de cara a la transformación del comportamiento de la persona en el ámbito público. Para

---

167. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 160 y 162, *supra* nota 8.

168. *Ibíd.*, pp. 168 a 171.

169. *Ibíd.*, pp. 153 a 157.

170. *Ibíd.*, pp. 163 a 167.



obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>171/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

**[291] En relación con la Dirección General de Contrataciones del Estado:**

[292] – La promoción y comunicación del Portal de Compras; la utilización de las herramientas de capacitación en compras públicas con que cuenta el portal electrónico de la OEA.; desarrollo de pasantías para funcionarios de la Dirección General de Contrataciones del Estado en otros Estados Parte de la Convención; el establecimiento de “mesas de ayuda” de la Dirección General de Contratación Pública que proporciona asistencia personalizada y asesoría a las oficinas locales de compras; someterse a las evaluaciones de la OCDE-DAC; y la publicación anticipada de los planes de compras. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>172/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

**[293] En relación con la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:**

[294] – La implementación de un “Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección de Función Pública”, que consiste en el redireccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y política de calidad) sobre la base de las leyes que rigen el quehacer de la institución a partir del establecimiento de un mapa de procesos (estratégicos, misionales y de apoyo) y la determinación y definición de procesos y procedimientos obligatorios que estipula la Norma ISO 9001, con la finalidad transparentar y mejorar los procesos y brindar un mejor servicio a los usuarios, partes interesadas y ciudadanos. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta<sup>173/</sup> del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

**IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>174/</sup>**

[295] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República de Nicaragua en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas<sup>175/</sup> sugeridas por el Comité para su implementación en el Informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas<sup>176/</sup>, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado VI de la *Metodología* adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

---

171. *Ibíd.*, pp. 144 a 148.

172. *Ibíd.*, pp. 149 a 152.

173. *Ibíd.*, pp. 158 y 159.

174. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el anexo de este informe.

175. En el Informe de Nicaragua relativo a la Primera Ronda, las medidas no tuvieron ninguna nomenclatura y se indicaron simplemente con un punto. Este mismo formato se siguió con diferentes países. Sin embargo, posteriormente el Comité adoptó una nomenclatura para las medidas, indicándolas como párrafos a), b), c), etc. Para mayor claridad, en esta sección se está siguiendo dicha nomenclatura.

176. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/nic.htm>

[296] El Comité también tomará nota en esta sección del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

## **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

#### Recomendación

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.*

#### Medida a):

[297] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas que regulan conflictos de intereses, de acuerdo con los propósitos de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.*

[298] En su respuesta al cuestionario<sup>177/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, las acciones que de conformidad con el artículo 4º de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos viene desempeñando la CGR. Sin embargo, el mismo Estado analizado pone de presente en su respuesta, como dificultad observada en los procesos de implementación de la anterior medida aun teniendo en cuenta que el régimen de competencias para la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas que regulan conflictos de intereses está claramente establecido en la LOCGR, “la capacidad de controlar y auditar mayor cantidad de procesos y actos de la administración pública, ello implica dotar de mayores capacidades económicas y operativas a la CGR, así como a las Unidades de Auditoría Interna en cada una de las entidades del sector público”.

[299] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, reflejados en las acciones que de conformidad con el artículo 4º de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos viene desempeñando la CGR, así como de la conveniencia de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta la necesidad identificada por el Comité en la sección 3.2 del capítulo II de este informe de fortalecer a la CGR, garantizándoles los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y cobertura de sus atribuciones de control externo y fiscalización. (Véase medida a) de la sección 1.1 en el anexo del presente informe).

---

177. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 108 a 112, *supra* nota 8.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público.*

[300] En su respuesta al cuestionario<sup>178/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, la aprobación, en octubre de 2010, de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público<sup>179/</sup> (Ley No. 737) que en su artículo 18 establece que no podrán ser proveedores del Estado o celebrar contratos con los organismos y entidades del Sector Público, dentro del año siguiente a su retiro, los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente señalados en la Constitución y la LSCCA.

[301] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, reflejados principalmente en ciertas disposiciones de la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Público, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que dichas disposiciones únicamente aluden a la prohibición para ser proveedor o contratista con el Estado. No obstante, el sentido de esta medida sugerida por el Comité está encaminado a la necesidad de que el Estado analizado considere adoptar disposiciones que prevengan conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas, tales como la prohibición para quienes las ejercieron de gestionar en asuntos oficiales que fueron de su conocimiento o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente y, en general, todas aquellas situaciones que puedan conllevar el aprovechamiento indebido de la condición de ex funcionario.

[302] En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear como sigue la medida c) de la recomendación de la sección 1.1. del capítulo IV del presente informe para centrarse en los aspectos anteriormente señalados y sugiere, además, la posibilidad de que el Estado analizado tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de conflictos de intereses disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas<sup>180/</sup>:

[303] – Considerar adoptar disposiciones que eviten que quienes desempeñaron funciones públicas se aprovechen indebidamente de su condición de ex servidores públicos, al procurar obtener ventajas, privilegios o tratamientos preferenciales para sus intereses particulares en las dependencias oficiales en las que prestaron sus servicios. (Véase medida b) de la sección 1.1 en el anexo del presente informe).

[304] – Considerar adoptar disposiciones que prohíban a quienes desempeñaron funciones públicas gestionar, a favor de intereses particulares propios o de terceros, ante las entidades públicas a las que estuvieron vinculados y en asuntos oficiales que fueron de su conocimiento, por un plazo razonable. (Véase medida c) de la sección 1.1 en el anexo del presente informe).

---

178. *Ibíd.*, pp. 112 a 117.

179. Disponible en: <http://goo.gl/oV73Qj>

180. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/gl\\_conflictos\\_int.doc](http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_conflictos_int.doc)

Medida d):

[305] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

**1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

[306] La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

**1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

Recomendación:

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Nicaragua para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, las sanciones contempladas en el régimen sancionatorio correspondiente.*

[307] En su respuesta al cuestionario<sup>181/</sup>, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior medida relacionada con las atribuciones de la CGR como órgano competente para aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 7º, literal h, contempla la obligación para la generalidad de los servidores públicos de “*poner en conocimiento ante su superior o autoridad correspondiente los actos que puedan causar perjuicio al Estado y que conozca por la naturaleza de las funciones que desempeña*”.

[308] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.3 del capítulo IV de este informe, reflejados en las funciones que viene desempeñando la CGR en cuanto la aplicación de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos y aquellas relacionadas con la determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos cuanto éstos incumplen sus deberes y obligaciones conforme a la ley, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta, como quedó señalado en el Informe de la Primera Ronda, que la obligación prevista en el artículo 7º, literal h, de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, no está considerada como falta en su artículo 12, y por ello su infracción no podría ser sancionada en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del mismo ordenamiento.

[309] En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear como sigue la medida a) de la recomendación de la sección 1.3. del capítulo IV del presente informe para centrarse en los aspectos anteriormente señalados y sugiere, además, la posibilidad de que el Estado analizado tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del

---

181. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 112 a 117, *supra* nota 8.

MESICIC sobre elementos básicos en materia de sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas<sup>182/</sup>:

[310] – Considerar adoptar disposiciones que atribuyan a un funcionario u órgano en especial el deber de velar por el cumplimiento de la obligación de aquellos que desempeñan funciones públicas, de informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento. (Véase medida a) de la sección 1.3 en el anexo del presente informe).

[311] – Considerar adoptar disposiciones que establecen sanciones administrativas y penales por el incumplimiento de aquellos que desempeñan funciones públicas, de informar sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento. (Véase medida b) de la sección 1.3 en el anexo del presente informe).

Medida b):

[312] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación

*Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones patrimoniales.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la verificación del contenido de las declaraciones patrimoniales, por parte de la autoridad competente para ello.*

[313] En relación con la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, en su respuesta<sup>183/</sup>, el Estado analizado reitera la información que presentó en su respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda<sup>184/</sup> en relación con la aprobación del “Manual de Procedimientos Administrativos e Indicadores de Gestión de la Dirección General Jurídica”<sup>185/</sup> por parte del CSCGR en su Sesión Ordinaria No. 524 de 2007. No obstante, en esta oportunidad, el Comité sí tuvo a su disposición dicho documento, toda vez que el mismo ya se encuentra publicado en el sitio Web institucional de la CGR, razón por la cual se pudo verificar que dentro del contenido de dicho Manual se establecen procedimientos para la recepción, custodia, comprobación y revisión de las declaraciones patrimoniales, así como para comprobar la veracidad y exactitud de la información suministrada por el funcionario público en su declaración de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

[314] En vista de lo anterior, Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe.

---

182. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/gl\\_obligacion\\_denun.doc](http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_obligacion_denun.doc)

183. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 121 a 123, *supra* nota 8.

184. *Ibíd.*, pp. 27 y 38.

185. Disponible en: <http://goo.gl/myo9XK>

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo.*

[315] En su respuesta al cuestionario<sup>186/</sup>, el Estado analizado no presenta información distinta a la que fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas.

[316] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe. Asimismo, para estos efectos, el Comité cree conveniente que el Estado analizado considere los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas” disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas<sup>187/</sup>, por lo que estima replantear dicha medida de la siguiente manera:

[317] – Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”. (Véase única medida de la sección 2 en el anexo del presente informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.*

[318] En relación con la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, en su respuesta<sup>188/</sup>, el Estado analizado reitera la información que presentó en su respuesta de la Tercera Ronda en relación con la aprobación del “Manual de Procedimientos Administrativos e Indicadores de Gestión de la Dirección General Jurídica” al que ya se ha hecho referencia en relación con la implementación satisfactoria de la medida a) de la misma recomendación.

[319] Asimismo, el Comité toma nota de lo expresado por el Estado analizado en su respuesta<sup>189/</sup> en el sentido que “la CGR ha iniciado un proceso de adquisición de medios informáticos y audiovisuales, para apoyar el proceso de verificación de las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos”, así como que “actualmente se trabaja con un Nuevo Sistema de Declaraciones Patrimoniales que facilitará el llenado vía Web de los formularios de Inicio y Cese los que contarán con claves de acceso.” Teniendo en cuenta estos aspectos y en consideración a que en la sección 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado y pormenorizado con respecto a las atribuciones de la CGR como órgano de control superior en términos del artículo III, párrafo 9º,

---

186. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 123 y 124, *supra* nota 8.

187. Disponible en: [http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley\\_modelo\\_declaracion.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_declaracion.pdf)

188. Véase respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 125, *supra* nota 8.

189. *Ibíd.*, p. 122.

de la Convención, el Comité se acoge a lo indicado en dicha sección y, por lo tanto, estima que esta medida es redundante con respecto a la recomendación 4.4.3. del capítulo II de este informe.

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 3.1:

*Fortalecer a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior que desarrolla funciones relativas al efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención.*

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Dotar a la Contraloría General de la República con los instrumentos legales y los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las nuevas responsabilidades que en relación con el control del cumplimiento de las aludidas disposiciones de la Convención se le han venido asignando.*

#### Medida b):

[320] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Procurar que la Contraloría General de la República cuente con un mayor apoyo político y social para el desempeño de sus funciones, y establecer mecanismos que permitan la coordinación y una continua evaluación y seguimiento de sus acciones.*

[321] En su respuesta<sup>190/</sup> al cuestionario, el Estado analizado pone de presente información y nuevos desarrollos en relación con la implementación de las medidas a) y c) de la recomendación anterior. Al respecto, el Comité, teniendo en cuenta que en la sección 3 del capítulo II del presente informe efectuó un análisis actualizado y pormenorizado con respecto a la CGR como órgano de control superior en términos del artículo III, párrafo 9º, de la Convención con base en ésta información suministrada por el Estado y otras que tuvo a su disposición, se acoge a lo indicado en dicha sección y, por lo tanto, estima que estas medidas son redundantes.

### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)**

#### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

[322] La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

---

190. Ibíd., pp. 125 a 131.

#### **4.2. Mecanismos de consulta**

[323] La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública.*

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.*

[324] En su respuesta al cuestionario<sup>191/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma:

[325] – Los eventos de capacitación realizados por la Oficina de Ética Pública en el período de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, dirigidos a la población organizada, donde se promueve el ejercicio del control social a la gestión pública y se le sensibiliza sobre la importancia de ejercer este derecho con fundamento en la Constitución y las Leyes de Participación Ciudadana (No. 475) y de Acceso a la Información Pública (No. 621).

[326] – La instalación, administración, seguimiento y monitoreo de los más de 200 “Buzones de Quejas y Sugerencias” en las instituciones del Poder Ejecutivo, con base en los mecanismos previstos en el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo No. 35-2009), así como en el Manual de Aplicación para los Buzones de Quejas y Sugerencias para la Buena Gestión Pública.

[327] – Los procesos de Auditoría Social llevados a cabo en 5 dependencias del Estado.

[328] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe, reflejados en las funciones que viene desempeñando la Oficina de Ética Pública, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que dichas funciones están encaminadas hacia el seguimiento de la gestión pública y no hacia el establecimiento y promoción de mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar en la prevención de la corrupción y crear conciencia social sobre sus efectos como lo señala la medida sugerida. (Véase medida única de la sección 4.3 en el anexo del presente informe).

---

191. *Ibíd.*, pp. 132 a 136.



#### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

[329] La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

### **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 5.1.

[330] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### Recomendación 5.2.

[331] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### Recomendación 5.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación dirigido específicamente a las autoridades competentes (en especial, a los jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con funciones de investigación judicial), con el fin de asegurar que ellas conozcan, y puedan aplicarlas en aquellos casos concretos de que tengan conocimiento, las disposiciones en materia de asistencia jurídica recíproca previstas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscritos por Nicaragua relacionados con las materias a que ella se refiere.*

[332] En su respuesta al cuestionario<sup>192/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma:

[333] – El grupo de trabajo constituido en el ámbito de la PN, coordinado por su Inspectoría General, en el que participan las Direcciones de Investigación Económica, Auxilio Judicial, Academia de Policía y las Divisiones de Asesoría Legal, Asuntos Internos, Secretaría Ejecutiva Nacional y Relaciones Internacionales, con la responsabilidad de ejecutar, monitorear y evaluar las recomendaciones que se originan del informe de país.

[334] – La suscripción del Acuerdo de Coordinación entre el MP, la PN y la PGR en la investigación, persecución y recuperación de activos provenientes de actos corrupción y delitos conexos, el cual tiende a operativizar las recomendaciones relativas a los aspectos preventivo e investigativo de los delitos contra la Administración Pública y los delitos penales de la Convención.

[335] – La Estrategia de Seguridad Regional de la PN que desarrolla acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de actividades vinculadas al crimen organizado que puedan originar tipos penales contemplados en la Convención, incluyendo acciones de cooperación internacional con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia (CJPCAMCC), entre otras.

---

192. Ibíd., pp. 136 a 139.

[336] – La impartición de cursos sobre instrumentos internacionales y asistencia mutua en las capacitaciones especializadas relacionadas con la investigación de delitos contra la Administración Pública que brinda la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”.

[337] – El diseño del Manual Instructivo y Teórico sobre Ética y Doctrina para la Buena Gestión Pública de la PN, en el que se incluye un módulo de estudio sobre los instrumentos internacionales anticorrupción.

[338] – Los seminarios realizados por la PGR y el MP sobre el alcance y aplicación en el derecho interno de las convenciones internacionales contra la corrupción.

[339] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.3. de la sección 5 del capítulo IV de este informe, reflejados en las acciones antes descritas, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que, con base en la información que tuvo a disposición, no identificó un programa integral de difusión y capacitación dirigido especialmente a jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con funciones de investigación judicial sobre las disposiciones que en materia de asistencia jurídica recíproca prevén la Convención y otros tratados suscritos por la República de Nicaragua, con el fin de asegurar que dichas autoridades las conozcan y puedan aplicarlas en aquellos casos concretos de los que tengan conocimiento. (Véase única recomendación en la sección 5 en el anexo del presente informe).

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 6.1.:

[340] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

### Recomendación 6.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Dotar a dicha autoridad central con los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.*

[341] En su respuesta<sup>193/</sup>, el Estado analizado no presenta información que se relacione con las acciones que se han ejecutado para implementar la anterior recomendación. En este sentido, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma y además estima del caso replantearla como sigue en aras de mantener la uniformidad de las recomendaciones que sobre estos aspectos formula.

[342] – Dotar a la Autoridad Central designada para los efectos previstos en el artículo XVIII de la Convención, con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención. (Véase recomendación en la sección 6 del anexo del presente informe).

---

193. *Ibíd.*, pp. 139 y 140.

## 7. RECOMENDACIONES GENERALES

### Recomendación 7.1:

[343] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

### Recomendación 7.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría Técnica del Comité publicará en la página en “Internet” de la OEA un listado de indicadores más generalizados aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado.*

[344] En su respuesta al cuestionario<sup>194/</sup>, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma:

[345] – La puesta en marcha del SIGRUN, como una plataforma informática de seguimiento y planificación estratégica integral, en la cual se introduce y procesa la información correspondiente a las actividades establecidas en los planes institucionales operativos de 52 entidades públicas. En este sentido, de acuerdo con lo expresando por el Estado analizado, las instituciones nicaragüense *“han alcanzado avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos, sobre la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), ya que en los respectivos planes estratégicos y operativos se incluyen actividades que coadyuvan en la implementación de recomendaciones, medidas o actividades resultantes de los procesos valorativos del MESICIC.”*.

[346] – La propuesta que en el marco del Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública se ha planteado para actualizar el Plan de Acción<sup>195/</sup> sobre la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Nicaragua por el Comité de Expertos del MESICIC. Para esta labor, como lo señala el Estado analizado, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública *“ha elaborado una matriz en la que se recogen los avances brindados por las instituciones y un informe de los avances de los indicadores generales y específicos del Plan de Acción en los que se ha progresado, estos instrumentos se encuentran en proceso de revisión, posteriormente se iniciara [sic] el proceso de validación de la propuesta de Plan de Acción actualizado, el cual incluirá la I, II y III Ronda de análisis, en miras de modernizar este instrumento partiendo de las nuevas políticas estatales y bajo el nuevo modelo de buen gobierno y dotar a las instituciones del Estado de un documento dinámico, ágil y de uso cotidiano en la implementación de las recomendaciones y determinando de manera clara la responsabilidad institucional acorde a sus funciones y competencias en las recomendaciones de las Rondas de Análisis realizadas al Estado de Nicaragua.”*

---

194. Ibíd., pp. 141 a 143.

195. Véase: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic\\_cida\\_project\\_nic\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_cida_project_nic_sp.htm)

[347] – El establecimiento que se prevé como resultado final del Programa citado en el párrafo anterior, de un Sistema Nacional de Indicadores de Transparencia y Buena Gestión Pública, el cual tiene como objetivo crear *“un mecanismo nacional para la medición de los alcances realizados en materia de buena gestión pública, calidad, buen gobierno, control social y cumplimiento de recomendaciones internacionales, por medio de una evaluación crítica y objetiva de la buena gestión pública en el Gobierno, para medir la contribución del programa a la mejora de administración pública.”*

[348] – La creación mediante el Acuerdo Presidencial No. 227-201<sup>196/</sup> de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, la cual tiene como una de sus funciones: *“l) Apoyar en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción”*<sup>197/</sup>

[349] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 7.2. de la sección 7 del capítulo IV de este informe y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el SIGRUN es un sistema de acceso restringido que requiere de un nombre de usuario y una clave para consultar su información; en segundo lugar, en virtud de que no se tuvo a disposición la matriz elaborada por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, así como con información sobre los procedimientos e indicadores que permitan verificar el seguimiento por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Nicaragua el informe de la Primera Ronda. (Véase única recomendación de la sección 7 en el anexo de este informe).

---

196. Disponible en: <http://goo.gl/9GfZoN>

197. Véase Estrategia para la Buena Gestión Pública, p. 11, *supra* nota 64.

## **ANEXO**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCION)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### **Recomendación:**

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

###### **Medidas sugeridas**

- a) Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas que regulan conflictos de intereses, de acuerdo con los propósitos de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.
- b) Considerar adoptar disposiciones que eviten que quienes desempeñaron funciones públicas se aprovechen indebidamente de su condición de ex servidores públicos, al procurar obtener ventajas, privilegios o tratamientos preferenciales para sus intereses particulares en las dependencias oficiales en las que prestaron sus servicios.
- c) Considerar adoptar disposiciones que prohíban a quienes desempeñaron funciones públicas gestionar, a favor de intereses particulares propios o de terceros, ante las entidades públicas a las que estuvieron vinculados y en asuntos oficiales que fueron de su conocimiento, por un plazo razonable.

##### **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

##### **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

###### **Recomendación:**

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Nicaragua para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Considerar adoptar disposiciones que atribuyan a un funcionario u órgano en especial el deber de velar por el cumplimiento de la obligación de aquellos que desempeñan funciones públicas, de informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento.
- b) Considerar adoptar disposiciones que establecen sanciones administrativas y penales por el incumplimiento de aquellos que desempeñan funciones públicas, de informar sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento. (Véase medida b) de la sección 1.3 en el anexo del presente informe).

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

Recomendación:

Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones patrimoniales.

Medida sugerida:

- Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”.

**3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas no vigentes y por lo tanto no requieren atención adicional.

**4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)**

**4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

**4.2. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

#### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

##### Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública.

##### Medida sugerida:

- Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.

#### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

### **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

##### Recomendación:

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación dirigido específicamente a las autoridades competentes (en especial, a los jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con funciones de investigación judicial), con el fin de asegurar que ellas conozcan, y puedan aplicarlas en aquellos casos concretos de que tengan conocimiento, las disposiciones en materia de asistencia jurídica recíproca previstas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscritos por Nicaragua relacionados con las materias a que ella se refiere.

### **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

##### Recomendación:

Dotar a la Autoridad Central designada para los efectos previstos en el artículo XVIII de la Convención, con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención.

### **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

##### Recomendación

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría Técnica del Comité publicará en la página en “Internet” de la OEA un listado de indicadores más generalizados aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado.